

GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
IBARRICHE, Julio César
ITURRE, César Eusebio
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSELER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LANUERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOZADA, Luis Eugenio
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACEDO, Oscar Alfredo
MALIANA, Elsa Ignacia
MANUTEROTTEL, Carlos
MARCEDA, Juan Carlos
MARGOS, Ricardo Expósito
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MAURICER, María Virginia
MENDIETA GABRIÑO, Emilio R.
MONTOL, Enrique José
MONTEN, Jorge Ramón
MENDOZA, Claudia Rosalva
MENDOZA, María
MENDOZINI, Esther Reynaldo
MILKIN, Carlos César
MONTAGNER, Martha Estelina
MICHIELLI, Marco Antonio
MICHELLE, Salomón Antonio
MILFOMEL, Julio Alberto
MIRALLES de EGUIERO, Norma
MOLINAS, Ricardo Francisco
MORFAU, Leopoldo Raúl
MULLER, Mabel Hilda

MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
MURIEL, Néstor Jorge
NACUL, Miguel Camel
NATALE, Alberto Adolfo
NEOER, Jorge Humberto
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario
NIÑO, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
ORGÁZ, Carlos Alfredo
ORQUÍN, Leopoldo Manuel
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADA, Alberto
PARAJON, José María
PAROLA, José María
PASQUAL, Rafael Manuel
PATTERSON, Ricardo Ancel
PELAZ, Víctor
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PEREZ, Jorge Telmo
PERINAKETTI, Horacio F.
PESDINI, Gioconda Eulalia
PESCE, Félix
PICHETTO, Miguel Ancel
PIERI, Alberto Reinaldo
PINTO, Guillermo
POLANO, Néstor Teodoro
POLO, Luis Nicolás
PRAT, Alfredo Ernesto
PRÉ, Ricardo Marcelo
RARRIGO, Esteban Joaquín
RODRÍGUEZ, Jesús
RODRÍGUEZ, José
RODRÍGUEZ, Mabel E.
RODRÍGUEZ SARUBIN, Hugo B.
ROGGIO, Humberto Jesús
ROST, Angel
ROSO, Ramón Darío
ROMERO, Carlos Alberto

ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUIZ PALACIOS, José David
SAADI, Ramón Eduardo
SALINO, María Antonia
SAMPIETRO, Darel
SANTIN, Eduardo
SARQUIZ, José Alberto
SCELZI, Carlos José
SEBASTIANI, Claudio A.
SMITH, Santos
SOBRINO, Margarita María
SOLANAS, Fernando E.
SOLIA, Carlos Ernesto
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Federico
SUCABIA, Nery
SUERO, Carlos Adolfo
TENEV, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TERRAGNO, Rodolfo Néstor
TOGNI de VELY, Adriana
TOLONEO, Leonor Esther
TOMA, Miguel Angel
TOPA, Raúl Rogue
TOTÓ, Francisco Patricio
TRETTI, NETER, Raúl
TROIANO, Silvia Elena
FRANDEZAGA, Horacio Daniel
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA, Néstor Angel
VARELA CIO, Eduardo
VÁZQUEZ, Roberto
VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
VENESIA, Guillermo Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE, Atilio Oscar
VITAR, José Alberto
ZIMARELLI, Orlando A.
ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE
DE APROBACION
DE LA HONORABLE CAMARA:

ALLENDE, Oscar Eduardo
CALLABA, Anibal
CERDERA, Rogelio Rafael
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MOLARDO, Elyio Francisco
MUNOZ, Marcelo Bernardo
PERALTA, Anibal Pedro
ZAVALLA, José Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ALBERTI, Juan Carlos
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
AYETZ, Lilitana
BONINO, Miguel Angel
CAMPERO, Rodolfo María
CASTELLO, Oscar Anibal
DI TULLIO, Néstor Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
GALANTE, Pedro Jorge
LÓPEZ, Albeles Humberto
LUNCH, Carlos Alberto
MARCELLI, Juan Miguel A.
MONTEIL, Sergio Alberto
MORELLO, Emilio Pedro
NICENINI, Ana Ida
RICO, Aldo
RUBINI, Mica Elsa
SÁNCHEZ CALDEANO, Rogue

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª sesión ordinaria (4ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

SUMARIO

1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de Ley del Poder Ejecutivo (61-P.E.-93) y del señor diputado Santín (502-D-93) por los que se modifica el título VI de la Ley 21.936, sobre su sujeción a los bienes personales no incorporados al patrimonio económico. (Pág. 547.)
- Manifestación de adhesión al duelo del señor presidente de la Nación y de su familia. (Pág. 550.)
- Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. (Pág. 551.)
- Interrogación de privilegio planteada por el señor diputado Polino con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Lamberto en la sesión del 9 de marzo de 1995 (702-D-95). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 552.)
5. Aclaración formulada por el señor diputado Molinas en relación con el asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. (Pág. 553.)
6. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1 y 3 de este sumario. Se sanciona con modificaciones el dictamen de mayoría. (Pág. 553.)
7. Moción de orden formulada por el señor diputado Aceñolaza de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Página 605.)
8. Moción del señor diputado Aceñolaza de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 605.)
9. Consideración de los proyectos de resolución de los señores diputados Di Tullio y otros (72-D-94), Polino y otros (17-D-94), Vázquez (8) y Perinasetti (339-D-94), Alvarez García (314-D-94), Becerra (C.A.) y otros (172-D-94); y de los proyectos de declaración de los señores diputados Drisaldi (197-D-94), Bulleich (202-D-94), Ortiz Maldonado (311-D-94), Molard (338-D-94), Vicchi y Algaba (337-D-94), Solanas y otros (583-D-94), Bravo y otros (375-D-94), Aceñolaza (447-D-95) y Pesce y Becerra (N.E.) (469-D-94) relacionados con el

tránsito por aguas argentinas del buque "Pacífico Batail", que contiene un cargamento de plutonio. Se sanciona un proyecto de declaración. (Pág. 605.)

10. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 606.)

B. Asuntos entrados:

- Proyectos de resolución. (Pág. 609.)
- Proyectos de declaración. (Pág. 609.)

—En Buenos Aires, a los quince días del mes de marzo de 1995, a la hora 16 y 17:

I

MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.966 (IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES NO INCORPORADOS AL PROCESO ECONOMICO) (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (expediente 65-P.E.-93) y del señor diputado Santín (expediente 5.097-D.-93) por los que se modifica el título VI de la ley 23.966, sobre impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico¹.

Cuando se dispuso el pase a cuarto intermedio se encontraba en uso de la palabra el señor diputado Berberghany, quien en este momento no está presente.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fernández Curi. — Señor presidente: estaba pensando pronunciar términos de un alto y claro contenido político, pero en consideración a los dolorosísimos y angustiosos momentos por los que está pasando el señor presidente de la Nación, a quien como padre lo hago llegar toda mi solidaridad espiritual, he decidido abstenerme de hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Castiella. — Señor presidente: antes de entrar en el tema en consideración la honrada del Frigorio quiere acompañar al señor presidente de la Nación en su duelo y en su pesar ante la situación dolorosa que está viviendo.

Este bloque hoy está presente en el entendimiento de que nuestro trabajo es una manera de ayudar al señor presidente de la República, quien además de esta instancia que está padeciendo, está viviendo momentos difíciles en la conducción del país. Estamos presentes para tratar de encontrar soluciones para el conjunto de los argentinos y superar la crisis económica-financiera por la que estamos atravesando.

Estamos convencidos de que los argentinos tendremos la madurez necesaria para salir fortalecidos de esta situación, vigorizando fundamentalmente la democracia que supimos conseguir con mucho esfuerzo, el funcionamiento pleno de sus instituciones, el sentido federal que impregna nuestra Constitución Nacional y que todos los partidos defendemos, y también la estabilidad económica, que es la que hoy está en jaque.

Por lo expuesto, consideramos que corresponde realizar un rápido debate sobre cuáles son los instrumentos que el país necesita en este momento para salir adelante. Al respecto, juzgamos que es imperativo e importante que la difícil situación que hoy nos aqueja no sea atendida solamente por la vía de la recaudación o la modificación de impuestos. Tal como ya lo hicimos a fines del año pasado, queremos plantear la necesidad de una profunda revisión del presupuesto correspondiente a 1995, que oportunamente fue rechazado por nuestra Cámara por considerarlo atentatorio contra la estabilidad económica y por estar basado en gruesos errores en las ponderaciones microeconómicas y en las expectativas de recaudación fiscal que contemplaba como respuesta a las tasas de interés internacionales.

Según nuestro criterio, el mencionado presupuesto tiene dentro de sí balzones de privilegio que es inaceptable que hoy se sigan manteniendo, como ya lo era el año pasado, en una situación de menor astringencia que la que hoy vivimos.

En esta situación de ajuste donde se pierza gravar con más imposiciones a nuestros conciudadanos se hace absolutamente insostenible la existencia de balzones de privilegio como lo son partidas de más de 2.200 millones sin asignar, y una estructura de gastos corrientes para la Presidencia y ministerios que ronda los 600 millones de pesos, lo que consideramos a todas luces excesivo.

Por lo tanto, una de las cosas que solicitamos es la pronta remisión de la ley de presupuesto al Congreso de la Nación para ser rechazada, dado que la magnitud de la reprogramación que hay que efectuar hoy es tan grande que, si se

¹ Véase el texto de los dictámenes en el Diario de Sesiones del 8 y 9 de marzo de 1995, página 459.

deja al libre arbitrio del Poder Ejecutivo, se puede desvirtuar la intención que este Congreso tuvo en la asignación de recursos y prioridades cuando sancionó esta ley.

Asimismo, es importante llevar a cabo una discusión sobre cómo mantener la relación fiscal entre las provincias y la Nación, ya que muchas de las propuestas que hoy están llegando a este recinto van a modificar el equilibrio que habían logrado la Nación y las provincias a través del pacto fiscal. No debemos olvidar que por ejemplo, la reintalación de los aportes patronales había llegado como contrapartida en las provincias la eliminación de gravámenes que contribuían a solventar los gastos de los presupuestos provinciales.

Estamos viendo con preocupación cómo la crisis que ha estallado en nuestro país estalla con mayor virulencia en los territorios provinciales. En este sentido, se registran incidentes en Jujuy y en Córdoba, y vengo de una provincia cuyos bancos provinciales no pagan sus obligaciones por tercer día consecutivo, lo que está generando una secuela de recesión, corte de cadena de pagos, desempleo y falta de productividad de manera tal que consideramos imperativa una discusión en conjunto y global. Mientras no se replanteen sobre la base de hipótesis macroeconómicas confiables, las medidas enviadas por el Poder Ejecutivo pueden carecer de la seriedad que en este momento se requiere.

Por último, creemos que la discusión de una norma tan importante como la que hoy tenemos a consideración requiere de la preservación de los instrumentos institucionales, así como el cumplir en profundidad con lo que establece la Constitución Nacional reformada. Por eso, antes de proseguir con el tratamiento del proyecto solicitamos que, a través de la Presidencia, la bancada oficialista exprese con claridad cuál es la interpretación que hará respecto de la mayoría necesaria para la sanción de la presente norma, porque estamos dispuestos a trabajar pero no a convalidar una transgresión constitucional que implicaría que esta iniciativa fuera sancionada con una mayoría que no es la que la Constitución establece, es decir, la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de este cuerpo.

Advertimos que, en caso de que la bancada oficialista convalide lo que entendemos es la interpretación correcta —que es que debe haber mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara—, estamos dispuestos a seguir conversando y discutiendo en el recinto. De lo contrario, seguiríamos trabajando en las propuestas de modificación al presupuesto que

tenemos en nuestro bloque a la espera de un cambio de actitud para poder seguir avanzando en el recinto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: antes de reanudar la exposición que estaba realizando la semana pasada, cuando desde la Presidencia se dispuso el paro a cuarto intermedio, deseo referirme a algo que realmente nos ha conmovido a todos y que es muy difícil de transmitir en pocas palabras. Los que somos padres y quienes no lo son observamos que estamos viviendo un momento muy especial. Hay hechos que nos demuestran la fiabilidad de muchos de los problemas que nos hacemos y la insignificancia de algunas situaciones que nos planteamos frente a los grandes temas de la vida.

Cuando se producen estos sacudones, volvemos a poner la escala de valores en su justa dimensión. En este momento, es muy difícil asumir nuestra responsabilidad como legisladores, dejando nuestros sentimientos de hombres y de padres. En lo personal, quiero hacer llegar mi consternación a los padres de estas víctimas y, especialmente, al señor presidente de la Nación y su señora.

Hay circunstancias que están muy por encima de cualquier desencuentro. Los grandes temas de la vida a veces son los tristes temas de la muerte. De todos modos, debemos seguir, aunque parezca difícil ingresar en el laberinto de los problemas constitucionales, de los aspectos económicos y de las necesidades de todos los días. A mí me cuesta arrancar e halar mi pensamiento.

La semana pasada, cuando discutíamos el tema que planteó recién el señor diputado por Mendoza al final de su exposición, decíamos que no coincidíamos con el criterio del bloque oficialista en relación a la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa en consideración.

Creemos que las emotivas palabras del señor diputado por Córdoba, quien habló en nombre del bloque Justicialista, fueron producto más de una emoción —lo digo con todo respeto— que de una adecuada reflexión constitucional. Sé que se trata de un hombre de bien y por eso respeto sus emociones, pero debemos hacer un esfuerzo para racionalizar esta cuestión.

En la última reunión la Unión Cívica Radical planteó lo que entendía era una clara afirmación en el texto constitucional y no una mera interpretación. No queremos que la nueva y no-

formada Constitución Nacional se vea empalmeada por alguna violación que se produzca durante las primeras oportunidades en que deba ser puesta en práctica. No me cabe duda de ello y lo digo con la sinceridad con que lo exprese también en la Convención Constituyente de Santa Fe.

Aquí tengo la versión taquigráfica del 5 de agosto de 1991, cuando se trató este tema en el plenario que estaba abocado a la reforma constitucional. Por supuesto que en aquella oportunidad ni pensábamos en las circunstancias a las que hoy estamos convocados. Me refiero a lo que creemos fue el pensamiento de los constituyentes en la Convención reformadora. Habíamos empezado señalando que el sistema tributario en la Argentina era precisamente eso, un todo sistémico que había sido esbozado por Alberdi donde se establecía perfectamente cuáles eran los impuestos que correspondían a la Nación, cuáles a las provincias y cómo después —por corresponder a facultades concurrentes— se fue estableciendo el sistema de la coparticipación.

Este tema fue planteado con absoluta claridad cuando se reformó la Constitución. Me refiero a la división entre los impuestos puramente nacionales, que son los contenidos en el inciso 1º del artículo 75 —antes 67— de la Carta Magna, es decir aquellos que provienen de la Aduana, de los derechos de importación y exportación y por supuesto de la renta del correo. En aquel momento, la Nación pensaba que apropiándose de los derechos de la Aduana se estaba apropiando —y con razón— de una parte importante de la renta de la Pampa Húmeda. A través del sistema de correos se estaba estableciendo también otra fuente rentística importante.

Para las provincias quedaban los impuestos directos, es decir, aquellos que gravan el patrimonio, los bienes o la acción de las personas. Pero este designio constitucional de 1853, lamentablemente no fue convalidado en los años posteriores por el devenir de la historia de los argentinos. Al contrario, uno de los objetivos de 1853, que había sido la afirmación del federalismo, se vio desnaturalizado en forma permanente por los hechos que le sucedieron. Por eso, en la Asamblea Constituyente de 1991 propusimos como una de las ideas fuerza, además de la descentralización del poder reafirmando la independencia de los poderes y de los órganos de control, la descentralización a través de la afirmación de un mejor federalismo y la descentralización en la relación entre Nación y pro-

vincias, y dijimos con toda claridad cuáles eran los impuestos coparticipables, pues la coparticipación es la regla.

Los impuestos establecidos en el inciso 1º del artículo 75 de la Constitución Nacional son la excepción. Inclusive, en algunos proyectos también se planteó la coparticipación de los impuestos derivados de las importaciones y exportaciones. En este sentido, hubo varios proyectos de diversos constituyentes, entre ellos el que habla. Finalmente, estas posiciones no prosperaron, pero sí el fuerte espíritu federal que animó a toda la Asamblea Constituyente. En una de las comisiones —la de Afirmación del Federalismo— se estableció con toda claridad el régimen generalizado de la coparticipación de todos los impuestos.

Cuando tuvimos que tratar el tema de las asignaciones específicas —con respecto a las cuales mantenemos diferencias de criterio en cuanto a las mayorías necesarias para su aprobación— hubo constituyentes que plantearon la conveniencia de la eliminación de dichas asignaciones. La bancada de la Unión Cívica Radical señaló que no quería privar de ningún instrumento de ejercicio del gobierno a aquellos que ejercieran los poderes en la Argentina. Sabiendo que esto podía llegar a significar una especie de donación que las provincias le hacían a la Nación, aceptamos la coparticipación y las asignaciones específicas de todos los impuestos coparticipables. Reitero que impuestos coparticipables son todos, con excepción de los que son puramente provinciales —patentes, ingresos brutos e inmobiliarios— y de aquellos que son puramente nacionales, es decir, los de importación, exportación, aduanas y correos. Los demás son todos coparticipables, ya sea porque afectan a bienes que están gravados por facultades concurrentes de la Nación y de las provincias o porque directamente figuran en la ley de coparticipación.

Los impuestos no se definen con palabras en cuanto a si son nacionales, provinciales o coparticipables, sino en función de la base imponible que permita precisar su naturaleza jurídica.

Las asignaciones especificadas en el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución son, como dijimos, una excepción y por lo tanto su sanción requiere una mayoría especial: el voto afirmativo de la mitad más uno de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras.

En aquel debate, dijimos que establecíamos esa mayoría especial porque esto significa una concesión de las provincias en favor de la Na-

ción, no sólo de tributos sino de bienes que también pueden ser agravados por impuestos directos y coparticipables donde una parte corresponde a las provincias. Dijimos que esta mayoría especial debía ser de ambas Cámaras. Se estaba indicando que si en algún momento excepcionalmente se requería una asignación específica se debería contar con el voto de por lo menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros de cada Cámara, que era lo mismo que decir que por lo menos se debía contar con el asentimiento de la mitad de las provincias argentinas, porque iniciativas como la que estamos tratando, obviamente tienen que ser aprobadas por el Senado. Vale decir que el proyecto de ley en tratamiento tiene que ser aprobado por más de doce provincias.

Ahora bien, una interpretación que se hacía en sentido contrario, de que para establecer o modificar una asignación específica no se requería esta mayoría especial, nos llevaría directamente a desnaturalizar el espíritu de la Convención Constituyente de 1994 y a crear situaciones que nadie imaginó ni quiso. Rondaba por allí el tema del fondo especial para el Gran Buenos Aires. Era algo que estaba presente en todas las reuniones de comisión y en los plenarios de la Convención Constituyente. Había mucha gente que desde sus provincias reclamaba la anulación de ese fondo. Finalmente, nosotros compartimos que en forma transitoria dicho fondo quedara vigente, porque también pensábamos que las necesidades básicas insatisfechas del Gran Buenos Aires esperaban una respuesta que estuviera por encima de una solución puramente federalista; pensábamos en la gente y por eso aprobamos la creación del fondo especial para el Gran Buenos Aires.

Mi planteo es si alguien hubiera admitido que dicho fondo, en virtud de ser considerado una asignación específica, hubiese sido votado con la mayoría especial prevista por la Constitución reformada por un monto insignificante y luego, a través de una desnaturalización del texto constitucional, fuese modificado por una mayoría simple —porque de acuerdo con la interpretación que se ha dado aquí bastaría esta mayoría— y aumentado en diez, veinte o cien veces. ¿No significaría esto una burla o desnaturalizar el concepto que con toda claridad se estaba reafirmando en el texto constitucional?

Si para establecer o modificar una asignación se cambia la mayoría especial por una mayoría simple se está burlando clara y absolutamente lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 3º.

Por ello quiero apelar —como lo hizo oportunamente el señor diputado por Córdoba— no sólo a la racionalidad sino también al justo equilibrio de todos los legisladores. No podemos crear inseguridad jurídica ni incluir elementos que de entrada impliquen la violación de la Constitución. No vaya a ser que este esfuerzo y el consenso que hemos logrado todos los argentinos queden desnaturalizados por necesidades y circunstancias que a veces se plantean como indispensables cuando seguramente no lo son.

Debemos respetar la Constitución. Aquella recordación que en la sesión anterior se hiciera en este recinto en relación con los hechos de Semana Santa, nos lleva a una reflexión. Durante esos días de Semana Santa los argentinos nos juntamos para defender la Constitución; sigamos ese ejemplo de estar todos juntos para defender nuestra Constitución Nacional. (Aplausos.)

2

MANIFESTACIONES DE ADHESION AL DUELO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. González. — Señor presidente: a efectos de formular una breve reflexión a raíz del durísimo golpe que acaban de recibir el señor presidente de la Nación y su familia, así como también todos quienes desde hace muchos años lo acompañamos con afecto y comprensión en la coordinación de ideas y en la lucha permanente hacia la búsqueda de los altos objetivos del país, solicito que la Cámara se aparte momentáneamente del importante asunto que estamos discutiendo.

En este momento, me resulta muy difícil ser coherente en mi discurso. Deseo reflexionar profundamente sobre una vida joven que se inmola, que prácticamente siguió los lineamientos de todos los jóvenes de hoy, nuestros hijos, que juegan en forma permanente en el límite y asumen los riesgos. Ello, porque probablemente les toca vivir en una generación, en una etapa, en que asumirán desafíos quizá mucho más grandes o difíciles que los que debimos asumir nosotros.

También comprendo la gravedad institucional que está viviendo el país. Por lo tanto, dado el efecto y la comprensión que me unen con el señor presidente de la República, sé que él va a entender perfectamente que el mejor homenaje que le podemos brindar y el mayor abrazo fraterno que podemos hacerle llegar, es trabajar para evitarlo o superar estas dificultades, y

al mismo tiempo, reconocer que está cumpliendo con los grandes objetivos que se ha propuesto en el sentido de buscar permanentemente la grandeza del país.

Por esto y por muchas otras razones que la emoción me impide expresar debidamente, solicito un minuto de silencio en homenaje a la memoria del hijo del señor presidente de la Nación.

Sr. Presidente (Pierri). — Invito a los señores diputados y al público asistente a las galerías a ponerse de pie a efectos de dar cumplimiento a la solicitud que acaba de formular el señor diputado por la Capital.

— Puestos de pie, los señores diputados y el público asistente a las galerías quedan unos instantes de silencio.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Gaiván. — Señor presidente: es sumamente difícil hablar después de este minuto de recogimiento, pero debemos expresar en palabras breves y sencillas nuestro pesar por este infausito suceso que llena de sombra y de pena nuestros corazones.

Conocí a Carlitos. Fue amigo de mi hijo, nacieron en la misma época, eran casi contemporáneos; conocía mi casa. Y en estas convivencias provinciales y vecinales supimos de un joven de gran corazón y de una enorme ternura. Por eso estamos profundamente conmovidos por la desaparición de este muchacho que viviera verdaderamente.

Desde este recinto hacemos llegar nuestro más profundo pesar al señor presidente de la República, sin perjuicio de que en su momento lo hagamos personalmente en nombre propio y en el de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical.

Desde los sentimientos profundos de nuestro amor a la Nación de los argentinos también le damos ese debemos cumplir estóicamente con el mandato de la Constitución. Por ello, frente a tan trágica decisión del destino, los representantes del pueblo de la Nación —entre quienes se encuentran los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical— habrán de expresar en su momento su amor a la patria respetando la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Duráñona y Vedia. — Señor presidente: como en la tarde de hoy todos los diputados que han hecho uso de la palabra pasaron de mani-

fiesto el sentimiento con el que hemos ingresado a este recinto, he decidido formular una propuesta. Seguramente todos creemos que tenemos algo que decir, pero también comprendemos que nos encontramos frente a una barrera institucional, dado que este es un tema doloroso que toca a la condición humana y no a la que tenemos como miembros de este honorable cuerpo.

Por esa razón creo que sería algo acertado —de allí que me animo a proponerlo— que el señor presidente de la Honorable Cámara, en nombre propio —es decir, en nombre del ciudadano Alberto Reinaldo Pierri—, hiciera llegar su pesar y el de todos los integrantes de esta Honorable Cámara, despojados de toda cuestión institucional, al señor Carlos Menem y a su esposa. Considero que de esta forma cumpliríamos con nuestros sentimientos y no tengo dudas de que así va a ser valorado.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento se procederá conforme lo plantea el señor diputado por Buenos Aires.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en la forma dispuesta.

3

MODIFICACION DE LA LEY 23.966 (IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES NO INCORPORADOS AL PROCESO ECONOMICO) (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración de los dictámenes sobre modificación de la ley 23.966.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: no es un dato menor la opinión vertida por el señor diputado Matzka —dado que es el titular del bloque mayoritario de esta Cámara— sobre cuál es la interpretación que se debe tener con respecto a la mayoría requerida para la sanción de este proyecto de ley que estamos tratando. Tampoco son datos menores las ilustradas opiniones manifestadas por diputados de la Nación versados en derecho constitucional.

Teniendo en cuenta que la Presidencia del cuerpo tendrá que expresar en su momento cuál habrá de ser el sentido de la votación, quisiera saber qué opina usted, señor presidente, con respecto a la mayoría requerida para la sanción de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pierri). — No voy a ser yo quien tenga que decidir esta cuestión, sino el cuerpo. Puedo tener una interpretación, pero si existe controversia, el cuerpo es quien decidirá.

Sr. Flores. — Entonces, antes de discutir el tema de fondo, lo que tendríamos que analizar es cuál va a ser la interpretación acerca de la mayoría exigida para su votación.

Sr. Presidente (Pierri). — En este momento la Cámara se encuentra abocada a la consideración en general de un proyecto de ley que hasta ahora no ha tenido modificaciones ni se le ha incorporado ningún tema como para que el cuerpo lo debata.

Sr. Flores. — Señor presidente: estamos discutiendo un proyecto de ley sobre el que nadie tiene la menor idea de la mayoría que se va a requerir para poder sancionarlo.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia reitera que lo que está en consideración es el proyecto de la ley contenido en el expediente 258-D-95. Si hay alguna modificación será analizada por el cuerpo, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.

4

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Polino. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: esta es la segunda vez que planteo una cuestión de privilegio en esta Honorable Cámara. La primera fue como consecuencia de la sanción del proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, ya que interpreté que las modificaciones introducidas por el Senado debieron provocar la vuelta de ese proyecto a esta Cámara, antes de que el Poder Ejecutivo promulgara la norma.

Hoy planteo una cuestión de privilegio por un agravio absolutamente injusto que se ha perpetrado a nuestra banca. Cuando se inició la interpelación al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, el señor diputado Matzkin indicó a esta Cámara cuáles iban a ser las reglas de juego para llevar adelante esa sesión y señaló el tiempo de que dispondría el señor ministro para hacer su exposición y el que tendríamos los distintos bloques para referirnos a ese tema. Se estableció que al bloque de la Ciudad Socialista le correspondían diez mi-

nutos, al igual que a otros sectores. No se había agotado el tiempo con las exposiciones de los señores diputados Estévez Bocro y Bravo, cuando pedi la palabra para hacer al ministro una pregunta que demandaría muy pocos segundos, y el señor presidente, en una actitud que lo reprocho, no me dio el uso de la palabra.

En consecuencia, en señal de protesta me retiré del recinto y acompañaron ese retiro el resto de los integrantes de la bancada de la Unidad Socialista. En la continuación de la sesión al día siguiente habló el señor diputado Lamberto, quien pronunció expresiones realmente inmerecidas para mi día sector. Me voy a permitir leerlas.

"Con respecto a los diputados de la oposición, llama la atención que no están, me pregunto por qué no vienen. Los diputados de la Bancada socialista se llaman la boca a la boca de los discursos hablando de la política social sin embargo, cuando hay que votar impuestos a los ricos para implementar la política social, estos socialistas de cartón en están en sus bancas. La oposición nos viene extorsionando desde hace tiempo con sus amenazas, pero al momento de votar impuestos que son perjudiciales a los que ella misma propone, tampoco se hace presente."

Y más adelante remata con las siguientes expresiones: "Ante lo mismo, después de escuchar al señor diputado Polino en interminables discursos en defensa de los intereses de los pequeños y medianos empresarios, en defensa de los intereses de los inquilinos y en defensa de tantos otros casos que él mencionó, me dirigí a su banca y le pregunté: '¿Mañana, va a venir a votar el impuesto a la hipoteca?' '¿Cómo no?', me contestó, pero hoy no lo va. Lo mismo se aplica a los señores diputados Estévez Bocro y Molinas." Y concluye diciendo: "Es muy fácil comenzar con los caperzudos discursos a favor de los pobres y no estar presente a la hora de votar medidas que los perjudican".

Existiendo en esta oportunidad se inició un doble discurso en una misma sesión. El primero lo fue por parte del señor presidente, al no darme el uso de la palabra para formular una pregunta al señor ministro. Debo aclarar que el tiempo del que disponíamos no era el de los diputados en forma individual sino correspondiente a los bloques políticos, que administraban el tiempo según el criterio que les resultaba más conveniente. En nuestro caso, distribuíamos el tiempo de forma tal que intercendíamos los temas, es decir, los señores diputados Estévez Bocro, Bravo y quien habla.

El agravio por no darme el uso de la palabra por parte del señor presidente radica también en su actitud sumamente flexible para con el señor ministro de Economía, quien insunó mucho más del doble del tiempo asignado; y lo mismo ocurrió con otros bloques políticos de esta Cámara, que tampoco respetaron el término prescrito. Si se obra con rigidez, debe actuarse de tal manera con todos los bloques por igual. No puede ser que se actúe con flexibilidad para con algunos sectores y con suma rigidez para con otros, a punto tal que en nuestro caso ni siquiera habíamos llegado a insunir los diez minutos que se nos habían asignado.

Por lo señalado nos retiramos del recinto y en esas circunstancias recibimos el agravio del señor diputado Lamberto mediante expresiones suyas absolutamente inmerecidas. En muchas oportunidades los señores diputados justicialistas no asisten a las sesiones que convoca el presidente del cuerpo a pedido de otros bloques, y sin embargo nosotros jamás utilizamos calificativos agraviantes como los que usó el señor diputado Lamberto.

Finalmente solicito que esta cuestión de privilegio que planteo pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de que ésta se expida a la brevedad.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar si se acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por la Capital.

Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

5

ACELERACION

Sr. Molinas. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: ampliando lo expresado por el señor diputado Polino y frente al agravio que se nos ha inferido, quiero expresar que son pocos los legisladores que asisten a las sesiones y permanecen durante todo su desarrollo, como es mi caso. Ciertamente aquel día nos retiramos del recinto en señal de protesta, pero si no se logró conformar el quó-

rum fue porque de la bancada oficialista no estaba presente ni la mitad de sus integrantes. No es por nuestra culpa que las sesiones fracasen, y no merecemos ese trato. En estas condiciones no hay razón alguna para descalificar a un grupo, por pequeño que sea, sobre todo cuando hemos dado muestras de asistir de modo constante a todas las sesiones, e incluso es posible que tengamos el récord de permanencia.

6

MODIFICACION DE LA LEY 23.966 (IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES NO INCORPORADOS AL PROCESO ECONOMICO) (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración de los dictámenes sobre modificación de la ley 23.966.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández. — Señor presidente: tengo que expresar el impacto emocional que he sufrido al enterarme de la noticia de la muerte del hijo del señor presidente de la Nación. Uno es padre y piensa que tal vez el dolor más grande que puede sentir en la vida es el de tener que despedir a un hijo, lo cual impone una alteración de las reglas naturales de la vida. Por eso, como hombre del Parlamento y con la responsabilidad que tengo de una candidatura para el cargo de vicepresidente de la República, quiero expresar que con todo mi dolor en esta instancia dramática acompaño al señor presidente de la Nación.

La Unión Cívica Radical está aquí con todo su bloque cumpliendo con su responsabilidad legislativa, tal como lo ha hecho a lo largo de la historia. Siempre que estuvimos en la oposición la ejercimos con altura, responsabilidad y sentido patriótico. Siempre hemos creído que una oposición alternativa es aquella que ofrece caminos y soluciones al país. Por esa razón mayoritariamente en la historia hemos contribuido a formar el quórum y sólo en circunstancias excepcionales dejamos de hacerlo. En estos días he escuchado una crítica permanente en este sentido, y la República debe saber que desde 1983 hasta el presente el bloque justicialista no ayudó a rendir quórum en cincuenta oportunidades, tal como figura en la carpeta que tengo sobre mi banca, o sea, en muchas más circunstancias que la Unión Cívica Radical.

Este es un momento particularmente difícil para la República, porque el ministro de Economía ha reconocido en este recinto, en una interpretación promovida por la Unión Cívica Radical,

que estamos atravesando circunstancias particularmente complejas que afectan al pueblo argentino.

En toda esta instancia, y más allá de que el radicalismo venía indicando desde hace tiempo algunas señales preocupantes de la marcha económica del país, luego de producido el efecto "México" actuamos con una enorme prudencia, con equilibrio, con sentido patriótico y guardamos un prudente silencio o nuestras manifestaciones fueron dirigidas a llevar tranquilidad fundamentalmente al pueblo, que sabe que tenemos que mantener la estabilidad. No hicimos lo que hizo el justicialismo en 1939, en que cuando nosotros teníamos la responsabilidad de la Presidencia de la República, salió incluso al exterior a generar desconfianza. Esta no ha sido la actitud de la Unión Cívica Radical en esta difícil circunstancia, y la prueba más evidente fue el sentido de equilibrio con que hemos actuado. Porque evidentemente, como lo dice nuestra doctrina, nuestra causa es la causa de la Nación, y hemos nacido a la vida argentina como una fuerza social e histórica que hace de la defensa del hombre y de los derechos del pueblo el motivo principal de nuestra preocupación ciudadana.

En esta crisis resulta evidente la notable falta de previsión que tuvo el gobierno. El señor ministro de Economía salió a decir rápidamente que la Argentina no era México, pero todos nosotros sabemos que tiempo atrás había dicho que la Argentina era México dos años después.

El señor ministro de Economía no llevó adelante la idea del préstamo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, pero ahora ha tenido que volver rápidamente para tratar de encontrar algún rasgo de confianza en esta crisis. Ha quedado en claro que no teníamos ahorro interno y que el déficit en las cuentas fiscales que señalábamos constituía la prueba más evidente de que había ineficacia en el gasto público.

La balanza comercial, que el año pasado presentaba un déficit de más de 5.800 millones de pesos, nos indicaba lo que estaba ocurriendo y la aguda dependencia de los capitales foráneos, que habían llegado dentro de lo que fue esta idea de las economías emergentes. Luego del efecto "México" desgraciadamente se fueron y ello provocó un hondo impacto en América latina.

Nosotros no tomamos las previsiones que en su momento adoptaron Chile o Colombia, y en consecuencia estamos afrontando una situación completamente difícil. A esto debo agregar otro

aspecto que venimos mencionando desde hace mucho tiempo en este Parlamento: para generar confianza en la economía, dentro de Occidente hace falta un claro respeto por el Estado de derecho. Esto significa que el valor de la seguridad jurídica es esencial para generar confianza en los inversores. Pero resulta que este gobierno desde 1989 hasta la fecha ha dictado 230 decretos de necesidad y urgencia anulando así muchos correspondientes al Parlamento de los argentinos.

Cuando algunos magistrados de la Nación —como ocurrió con la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social— declararon la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia, no faltó la palabra descalificadora del propio señor presidente de la República, quien con su manifestaciones indicaba que no existe respeto por la independencia del Poder Judicial.

Por eso a esta altura del debate el bloque de la Unión Cívica Radical está presente en el recinto para señalar cuáles son las soluciones que prevé para la República.

Decimos con toda claridad que vamos a exigir el cumplimiento irrestricto de los principios de la Constitución Nacional. Esta es una de las atribuciones del Parlamento. La defensa del federalismo ha sido uno de los rasgos principales en la reforma constitucional en que tuvo el alto honor de participar.

En esa ocasión pudimos llevar adelante la idea de una reforma por consenso, que es algo sin precedentes en la historia argentina. Así avanzamos en una serie de principios fundamentales. Entre ellos me voy a detener particularmente en el del fortalecimiento del federalismo de los argentinos. Sobre este tema se desarrolló el debate más profundo en esa Convención Constituyente, lo que es bien conocido por el señor presidente de la Cámara dado que fue su vicepresidente 1º.

Con un soero análisis del articulado constitucional comprenderemos que dicho principio fue una de las ideas fuerza en la reforma constitucional reflejada en el tema de la intervención federal, la regionalización del país, la consagración de la autonomía municipal, la autonomía plena para la ciudad de Buenos Aires y, en particular, la relación entre la Nación y las provincias en materia fiscal, lo que voy a analizar detenidamente.

Si leemos el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional comprenderemos cómo

se resuelve un problema histórico, relacionado con las facultades concurrentes de la Nación y las provincias para recaudar contribuciones indirectas.

Sabemos que la Constitución Nacional distingue entre impuestos directos e indirectos. Los primeros corresponden a las provincias, y excepcionalmente y por tiempo limitado, al gobierno federal. Las contribuciones indirectas pueden ser internas o externas. Con respecto a las primeras existen facultades concurrentes entre el gobierno federal y las provincias para aplicarlas. En cambio, los impuestos indirectos externos —o sea, los correspondientes a las exportaciones o importaciones— sólo corresponden al gobierno federal.

Mantuvimos un debate importante y llegamos a la conclusión —que se plasmó en el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional— de que los recursos directos —en forma excepcional— y los impuestos indirectos internos son coparticipables. Así lo expresa el inciso 2º del artículo 75, que dice que corresponde al Congreso: "Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias".

Naturalmente, esta línea de razonamiento se profundiza cuando se exige algo que nosotros estamos reclamando para este momento de la vida de la República. Me refiero a una nueva ley convenio de coparticipación impositiva, que debe surgir de un debate del Parlamento y de las Legislaturas provinciales luego del acuerdo entre el gobierno federal y las provincias.

Por ello, como otra de las consecuencias del efecto "México", debemos dejar de recurrir a los "decretazos" de necesidad y urgencia en esta materia, que afectan a las provincias, y a los pactos fiscales, inconstitucionales. Así como se ha establecido en una disposición que la nueva ley convenio debe estar sancionada para diciembre de 1996, estamos reclamando que cuanto antes comience el debate para que tengamos esa ley que defina esta situación de arbitrariedad donde las provincias con una extrema dependencia financiera tienen que depender del humor o del arbitrio del ministro de Economía de turno, como está sucediendo en la actual situación política que vivimos los argentinos.

Decía que ahí se establece con claridad en cada caso cuál es el quórum agravado que se exige en esta materia. Así lo determinamos los que fuimos constituyentes, tanto en la letra como en el espíritu de la Constitución, sin ninguna posibilidad de interpretación distinta. Establecimos quórum agravado para alcanzar acuerdo

en el Parlamento —en las dos Cámaras— en este tipo de materia tributaria e impositiva que afecta las facultades de las provincias.

Por eso es que también la ley convenio tiene que iniciar su tratamiento en el Senado de la Nación, porque es el órgano de defensa de las autonomías provinciales.

En esta misma línea de pensamiento el inciso 3º del artículo 75 hace referencia a las asignaciones específicas y determina que para establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables se necesita tiempo determinado y una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es el mismo criterio del inciso 2º. No existe ninguna duda y sólo basta analizar la doctrina constitucional y la del derecho financiero para llegar a la conclusión de que el IVA —cuya alícuota se pretende aumentar con el proyecto en consideración— es un impuesto indirecto; en consecuencia, es una facultad concurrente del gobierno federal y de las provincias e integra indiscutiblemente la coparticipación de las provincias argentinas.

Por eso, cuando se habla de una asignación específica se necesita ese mismo quórum agravado de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para impedir precisamente que exista una detracción de lo que debe ser el fondo de la coparticipación impositiva.

Este criterio de defensa del federalismo argentino también se observa en otros incisos del mencionado artículo 75. En este sentido, en el inciso 6º se hace referencia a un banco federal y en el 8º, en relación con el método a utilizar por el Parlamento para el presupuesto, se cita precisamente el tercer párrafo del inciso 2º de dicho artículo, con la idea de avanzar en un desarrollo equilibrado del país. Entonces, no cabe duda acerca de la necesidad de fortalecer el federalismo como una línea principal de la reforma constitucional.

En ese proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, reiterando esta política centralista que ha vulnerado las atribuciones de las provincias, se insiste en detracer fondos de la coparticipación impositiva de las provincias a través de la alteración de lo que tiene que ser la alícuota del IVA, avanzando en la formación de un fondo especial que debe ser administrado por el Tesoro nacional con finalidades específicas.

Por eso la Unión Cívica Radical sostiene en forma categórica que aquí hace falta un quó-

rum agravado de la totalidad de los miembros de cada Cámara para avanzar en la detracción de un fondo que se relacione con los recursos coparticipables. Por tal motivo vamos a exigir el respeto absoluto de los principios de la Constitución Nacional. La idea de la seguridad jurídica es esencial al Estado de derecho, y esto es lo que venimos a decir a este recinto, de la misma manera que reiteramos la necesidad de que se respete al Parlamento en el ejercicio irrestricto de todas sus atribuciones.

Quiero mencionar también otro criterio establecido por la Constitución Nacional. Cuando se mencionan los decretos de necesidad y urgencia o se establecen las posibilidades de delegaciones legislativas en casos esenciales, no se hace referencia más que al control de una comisión permanente bicameral. No vayamos a avanzar en algo que pueda significar una violación de la Constitución: esto es lo que viene a decir con toda claridad la Unión Cívica Radical. Con este mismo sentido de defensa de la Constitución y del Parlamento venimos también a decir que para nosotros la solución frente a estas crisis no puede ser un "impuestazo" ni un aumento de las atribuciones del Poder Ejecutivo en detrimento —como alguna vez se pensó— de las facultades del Congreso. La solución no es obra que atacar la cuestión desde el punto de vista de la reducción del gasto público.

Desde 1989 hasta la fecha el gobierno también avanzó en un exceso del gasto público, demostrando así su ineficacia. Ahora hay que reducir en este nuevo ajuste fiscal los fondos rechazados con la Educación, o con el Conicet, o con el Hospital Garrahan —donde se desarrollan operaciones de alta complejidad—, aunque somos conscientes de que la educación es una herramienta fundamental para lograr el cambio en la Argentina y de que la ciencia y la tecnología tienen que estar vinculadas al proceso productivo, siendo la única posibilidad en cuya virtud los argentinos entraremos al siglo XXI en las condiciones que nosotros reclamamos para impulsar el grado de desarrollo humano que todos estamos ansiando.

No podemos dejar de señalar que ha existido una profusión de gastos reservados que no se compadecen con el estilo republicano de los argentinos.

Desde 1989 hasta la fecha —y ésta es una prueba evidente de lo que venimos señalando— se han gastado más de mil millones de pesos en gastos reservados por parte de la Presidencia de la República. Se trata de una con-

ducta muy distinta a la que ha observado históricamente la Unión Cívica Radical. En efecto, cuando el doctor Arturo U. Illia, un hombre del radicalismo de Córdoba, fue presidente de los argentinos, no gastó un solo peso de gastos reservados, mostrando así cuál es la conducta ética, el estilo republicano y la austeridad que el pueblo argentino está reclamando en estos difíciles momentos.

Por todo ello la Unión Cívica Radical solicita que el Poder Ejecutivo reenvíe el presupuesto al Parlamento. Esto ya lo dijimos en el debate sobre el presupuesto que se llevó a cabo el año pasado, adelantándonos a lo que después ocurrió: necesitamos poder y reducir gastos que son de carácter improductivo; necesitamos avanzar en la austeridad, tener un gobierno ortodoxo en el manejo de las finanzas y que haya una política económica al servicio de los sectores populares con una clara comprensión de que el factor más importante de la economía es el humano porque se debe gobernar con sensibilidad popular pero también con una visión integral de los problemas del país, cosa que no ha ocurrido ya que las economías regionales están postadas.

Vamos a rediscutar el presupuesto en el Parlamento de los argentinos; vamos a celebrar todos los debates que sean necesarios. No podemos consentir que la solución sea un nuevo ajuste de impredecibles consecuencias sobre las economías castigadas de los sectores populares. El radicalismo no sólo tiene un bloque de diputados que está aquí dando la cara y enfrentando con seriedad los problemas de la Argentina, exponiendo con vigor y sentido republicano sus posiciones. Este radicalismo hoy es el que incuestionablemente ofrece una alternativa distinta a la que presenta este gobierno que ha errado en materia económica. Y la prueba más evidente son las duras consecuencias que nos quieren imponer en este momento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Horacio Daniel Usandizaga.

Sr. Hernández. — Con este sentido republicano, con la necesidad de que se respete estrictamente la Constitución Nacional y se exija el quórum agravado que corresponde frente a las asignaciones específicas, la Unión Cívica Radical reitera la propuesta de que discutamos aquí el presupuesto para avanzar en las soluciones que el pueblo está reclamando. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri. — Señor presidente: es un momento singular e importante el que estamos viviendo los argentinos. A veces no resulta sencillo despejar durante el debate en este recinto los temas principales de los accesorios, pues sin lugar a dudas a nadie escapa que cada vez que debemos resolver sobre asuntos relacionados con la actividad cotidiana del país esta Honorable Cámara se tiñe de los acontecimientos que suceden fuera de ella. Esto, por la incidencia que tienen sobre este cuerpo los propios factores de poder y porque de la noche a la mañana se modifica el escenario nacional.

De pronto, los argentinos —según el gobierno— veníamos transitando por una ruta en una dirección y con determinada velocidad. Nosotros advertíamos que existían problemas y obstáculos y que era necesario serenarse y no tener soberbia, pues conocíamos algunas cuestiones a partir de experiencias propias de gobierno. Siempre nos respondieron de la misma manera: ustedes probaron y se equivocaron, nosotros somos los que acertamos; la legitimidad popular nos acompañó en las elecciones: vamos bien, la fiesta continúa, sigamos adelante.

Se ha producido un cambio colectivo en la sociedad, que de repente ha sido despertada; desde diciembre del año anterior hasta ahora, como una verágine, vivimos acontecimientos precipitados. Se han modificado los escenarios económicos.

Ya no estamos en aquel viaje tan utópico al que en 1989 nos invitaba el presidente de la Nación y que hubiera descado cualquier país del mundo. Vamos todos en avión pero sin paracaídas; aquí hay que arriesgar. De pronto, de la noche a la mañana, el efecto "tequila" y los problemas del exterior han llevado a los argentinos, que honestamente subieron sin paracaídas a ese vuelo infinito y lleno de felicidad que nos auguraba el Primer Mundo, a buscar un piloto que los hiciera aterrizar bien y sin daño.

Fue así que a comienzos de este año nos encontramos con diversos escenarios. Hasta el día de hoy no hallamos explicación frente a este trabajo escenario institucional en el que, casi por un capricho, nos involucró el ministro de Economía. Nos llevó un mes lograr que el ministro concurreniera a este recinto para decirnos qué estaba pasando y cuál era su visión de la realidad.

Días pasados recordaba con legisladores amigos algo que había sucedido en este recinto. Un día estábamos sesionando sin quórum, pero al revés, pues quienes no estaban en el recinto eran los diputados del oficialismo, y el ministro

de Economía estaba almorzando en una dependencia de este Congreso. El grado de emergencia era grande, pero no había que dar la razón a los radicales y a otros partidos. Sólo queríamos que, además de recorrer el mundo, golpear la puerta del Fondo Monetario y reunirse con empresarios el ministro cumpliera con ese simple e importante trámite institucional de concurrir al recinto para dar a conocer su opinión acerca de cómo resolver la emergencia. Lo logramos, aunque nos llevó bastante tiempo; fue trabajoso pero, finalmente, fructífero.

Así, nos enteramos de muchas cosas que advertíamos que iban a suceder. Primero, que estábamos por desbarrancarnos: "Si no actuamos con rapidez no saldremos del fondo del tarro, acompañame", decía el señor ministro con urgencia. Le faltó pedir disculpas por los agravios que siempre tuvo hacia el Parlamento. La emergencia lo obligaba a pedir clemencia. Además, nos dijo que tengamos cuidado, que estábamos débiles y que la situación había cambiado, es decir que ya no éramos el ejemplo y que no podíamos ser solidarios con los que necesitaban plata. Esta es la síntesis de la interpelación a la que fue sometido hace pocos días el señor ministro.

Todo esto está por encima de los partidos políticos. Ya nos hemos dado cuenta de que el señor ministro ha dado vuelta la carpeta con la que vivió el éxito de estos años. Lo de antes no vale más. Ya no van a poder decir que este es un gobierno que impulsa políticas económicas que no gravan el trabajo y la producción y que no son como los radicales, que imponían impuestos a la nafta y perjudicaban a la gente. Tampoco van a poder señalar que buscando el equilibrio nos dirigimos hacia el quinquenio de la justicia social. ¿Cuántas veces el señor ministro nos pidió a los radicales que nos dejemos de embromar, toda vez que él había bajado los aportes patronales a fin de apoyar la producción? Yo vengo de una provincia que no firmó el pacto fiscal, razón por la cual debimos atender a muchos industriales que nos pedían que lo hiciéramos porque por ahí pasaba el desarrollo del país. Todo eso se acabó. Lo de antes no vale más. Ahora hay una nueva carpeta.

En un rasgo de sensatez el señor ministro dio a entender —aunque no lo reconoció oficialmente— que en la práctica la Argentina se encuentra frente a un nuevo escenario. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo sobre el juicio de valor que nos merece el origen de la crisis, pero la realidad nos está indicando que no era correcta aquella teoría según la cual la

privatización total de los bienes del Estado resolvería los problemas históricos de la Argentina, o sea el desequilibrio fiscal y el incremento de la deuda. Lo cierto es que nos hemos endeudado cada vez más y que el modelo de acumulación sobre la base de un fuerte proceso industrial concluyó el jueves de la semana pasada.

Digo esto porque ya no tiene más validez lo que manifestó el señor ministro el 7 de noviembre del año pasado, cuando le juró al Congreso que no había desequilibrio fiscal y que el problema se presentaba porque había juces malos que hacían fallos igualmente malos, lo que obligaba al Estado a pagar jubilaciones que no correspondían. Me estoy refiriendo al famoso caso Buceta. Sin embargo, el jueves descubrimos que existe desequilibrio fiscal. Ahora no importa quién tiene la razón. Lo importante es que hay desequilibrio fiscal.

Por otro lado, en su momento se vendieron todas las empresas del sector público con el objetivo de achicar la deuda externa. Pero, ¿nos damos cuenta de lo que sucedió ayer en la Argentina? Además de anunciar el impuesto, el señor ministro consagró el aumento de la deuda externa en más de 10 mil millones de dólares —sin querer la sociedad lo aplaudió, probablemente por ese impulso lógico de aferrarse a la idea de que es posible salvarse— sobre la base del cronograma de endeudamiento para el sector público y privado que él anunció. Es decir que las privatizaciones no dieron resultado como forma de achicar la deuda externa.

No me voy a extender más en analizar el país que tenemos. Vengo de una provincia de la que conozco hasta el último de sus riachos y hace tiempo que en ninguno de los pueblos que habitualmente visito me dicen "venga que vamos a inaugurar esta fábrica"; lo que sucede es todo lo contrario, porque los comentarios que recibo son de que se está cerrando tal o cual fábrica porque no pueden pagar los créditos a raíz de las altas tasas de interés.

Reitero que aquí hay una nueva carpeta y un nuevo escenario. Lo del pasado no sirve más. Es necesario que actuemos con calma. En este sentido recuerdo un viejo proverbio que dice que las cosas que se hacen en forma apurada no siempre salen bien y que se pueden pagar costos muy altos.

El día siguiente a la interpelación algunos medios periodísticos hicieron referencia a la preocupación que tenían los señores legisladores indicando que algunos estaban asustados. Es cierto, estábamos preocupados pero, además,

tengo una fea sensación. El día miércoles el señor ministro describió la realidad, pero venía con una sota en la manga. Lo veía cuando se paraba y sacaba un papel del bolsillo; me llamaba la atención que no reaccionara como es natural en él, máxime con discursos duros como los que se hacían. Pero lo que estaba buscando eran las facultades con las que siempre había soñado y pretendía que este Congreso se las otorgara.

En política queridos amigos, se pueden hacer muchas cosas, pero no cualquier cosa, de lo contrario nos vamos a desbarrancar en serio.

Por ejemplo, el jueves nos encontrábamos con que tocábamos el fondo del tarro: emergencia, principio de catástrofe, etcétera. Ayer ¡miren, está todo bien! ¡Está todo resuelto! "El problema consiste en que en la Cámara de Diputados hay un grupo de vándalos que forman parte de la oposición y que no quieren votar la salica y la salvación nacional." Eso es lo que se decía. Es más: un grupo de empresarios ha hablado con los gobernadores pidiéndoles que por favor soliciten encarecidamente a los legisladores que no solamente den quórum sino que voten, porque ellos van a poner —los empresarios— 1.000 millones de pesos de sus bolsillos. ¡Ojo con esto! No los vamos a condecorar, porque no nos regalan nada sino que nos prestan y a una buena tasa con el bono que se les va a dar. Entonces, sigamos manejándonos en el equilibrio, pero no tiremos manteca al techo.

Aquí estamos sumados a un escenario constitucional que se trabajó en la sesión anterior, y éste no es un tema menor.

Un amigo perteneciente a otra bancada me decía la semana pasada que se iban a caer diez bancos; pero yo trataba de explicarle a mi manera que la Carta Magna tiene normas taxativas, a lo que él me decía que no y que todo esto constituía una barbaridad.

¿Cada vez que estemos en emergencia económica van a tirar la Constitución? ¡Qué locura! Me proponía que para entrar a la emergencia económica entremos a la emergencia constitucional. Y eso no es bueno, porque estaríamos caminando hacia atrás, lo que significaría ir por mal camino. (Aplausos.)

Ingresamos en esta discusión que con toda altura inició mi querido amigo el diputado Maqueda en la reunión anterior. Sin embargo, no es fácil para quien tiene una sólida formación constitucional estirar esto como un chicle para explicar lo inexplicable. En este país se explicó lo inexplicable hasta que la gente se dio cuenta.

¿Dónde estaba radicado el problema? Lo han explicado con absoluta certeza los señores diputados Berhongaray y Hernández. Aquí lo que estamos tratando es la modificación del título VI de la ley, por el que se gravan los bienes personales no incorporados al proceso económico. Ya he dicho que nosotros nunca hemos gravado la actividad productiva sino otras cosas.

También recuerdo que en la reunión anterior el señor diputado Maqueda había dicho que no se violaba la Constitución, porque lo que se iba a hacer era ensanchar la base imponible, sin cambiar el destino específico, porque el artículo 30 del título VI establece la distribución de la siguiente forma: aproximadamente el 90 por ciento para el Sistema Nacional de Solidaridad Previsional, el 10 por ciento para la Caja de Previsión de la Ciudad de Buenos Aires, y el resto para las provincias. Pero no se discutía si se cambiaba el destino específico sino otra cosa. No por casualidad se propone que se dejen de llamar "bienes personales no afectados al proceso económico", tal como se expresa en el artículo 1º, porque lo que ha cambiado no es la alícuota sino la base imponible. Es decir que ahora se incorporan bienes que estaban fuera del proceso económico para que puedan ser gravados. Las contribuciones que vota el Congreso son coparticipables por naturaleza, salvo que por una ley especial tengan un destino específico, para lo cual se necesita la mayoría calificada referida por el señor diputado Hernández y que tanto tiempo nos lleva de discusión. Entonces no estamos adoptando una actitud autojadiza, porque se ha modificado la base imponible y se han incorporado bienes que corresponden al proceso económico para ser gravados. Hay una diferencia con la ley aún vigente; su naturaleza es coparticipable y dejará de serlo, al incorporarse a un destino específico, como lo señala el artículo 30 del propio capítulo VI.

Aquí no cabe otra que una mayoría calificada; eso no admite discusiones. Yo no fui constituyente, pero me tocó gobernar una provincia y sé de esta vieja discusión. ¿Por qué se incorporó en el 75 y en el 76 la mayoría agravada? Es un capítulo que habla esencialmente de tributos que tienen que ver con la vieja pelea de su distribución, es decir la relación entre Nación y provincia.

Nadie lo querrá reconocer, pero allá en Santa Fe la discusión no era entre peronistas, socialistas y radicales; era el terrible temor que existía frente a la eventual aparición de nuevas

afectaciones específicas, como en el caso del Fondo del Combustible Bonaerense.

Entonces, lo que se quería decir era que para estos casos debía existir una mayoría agravada. Esto no es fácil, hay que discutirlo y buscar el acuerdo, para seguir adelante. Esa era la naturaleza política de la discusión entablada entre provinciales, peronistas y radicales, porque lo que estaba en juego era el destino de los tributos de la Nación y sus diferencias para poder distribuirlos.

Reitero que el nudo de la cuestión radica en la relación Nación-provincias. Son tributos que, por su naturaleza vota el Congreso, que en su origen son coparticipables y que por excepción deben tener un fondo específico y deben ser votados con una mayoría agravada.

Entiendo las razones del bloque oficialista, con un ministro de Economía que impone siempre y que obliga a usar la imaginación para estricar las interpretaciones, pero eso es peligroso porque también está rondando otra cosa. Aquí se comenta que vendrán modificaciones, pero el señor diputado Maqueda hizo una interpretación del artículo 76 referido a los decretos delegativos, nuevo instituto incorporado a la Constitución.

No olvidemos que la historia en la materia ha sido perversa, con modificaciones en la delegación hasta convertirla en un uso sistemático, que fue consagrado por dos fallos de la Corte en 1993, aumentando las delegaciones.

Entonces, con sabio criterio los constituyentes de todos los partidos consagraron como principio esencial que no había delegaciones, aunque previeron algunas excepciones. El señor diputado Maqueda las describió correctamente cuando habló de la emergencia, con tiempo determinado y establecimiento de la delegación con una ley. Eso es cierto pero se olvida que para no distorsionar el sentido cualitativo que da origen a la norma, ésta debe ser absolutamente específica, acotada, marcada, y no que aparezca el señor ministro para decirnos que se aumentan todos los tributos en un 25 por ciento, incrementando lo que quiere y cuando quiere.

Con esto parece que la emergencia justifica cualquier cosa. Pero además tiene que ver con lo que viví con los argentinos hace más de quince días, cuando se debatió el tema de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Este debate estuvo en todos los medios periodísticos. Así, se estableció un mecanismo, según el inciso 12 del artículo 100 de la Constitución Nacional, donde se dice que, autorizada la delegación por el Congreso, debe ser reinter-

dado el decreto delegativo por el presidente de la Nación o, en su defecto, por el ministro coordinador cuando esté, o en su lugar por el jefe de gabinete.

Para evitar la distorsión que se había producido en la delegación, el precepto constitucional habla de una Comisión Bicameral Permanente que refrendará los controles sobre el decreto delegativo. Aquí no existe una comisión bicameral: no me lo pregunten a mí, hay que preguntárselo al gobierno que estaba apurado por la sanción de la Constitución que no impulsó ninguna de las leyes para crear esta comisión bicameral... (Aplausos)... imprescindible para aplicar el principio de control republicano, de equilibrio de poderes y para que se aplique la concentración de facultades por vía de excepción y no de modo general. Es evidente que no estamos frente a un tema menor.

Sin embargo nos dicen: "Ya están los radicales. ¡Qué leguleyos son! ¡Miren con la pavada que vienen! ¡Están con la Constitución! Aquí estamos con una crisis económica en la que nada tenemos que ver; fue México el que nos perjudicó, pero los radicales emboman con este tema, y también los otros partidos".

Insisto en que éste no es un tema menor y que estamos frente a un escenario político complicado. ¿Por qué? Porque nos acorralan; nos quieren hacer pasar como los mules de la pollería, pero esa actitud no va a hacer bien a nadie; por supuesto no al país. Sólo servirá para que algunas comunidades se dedican al desparterio ideológico: "¡Qué burros son los del Gobierno! ¡Qué burros son los del Gobierno! ¡Qué burros son los del Gobierno! ¡Qué burros son los del Gobierno!". Pero, ¿qué pasa con la política? La política del momento se ve como un juego serio del pensamiento, como el ajedrez, y no como los dados, que es un juego de gambeta seria. En cambio, el ajedrez implica dibujar escenarios para los hechos que venimos, analizando las complicaciones con las que nos podemos encontrar.

No se trata de gritarnos entre nosotros. Todos los países con democracias fuertes defienden sus instituciones y nunca someten lo permanente a la coyuntura porque ésta termina destruyendo lo que debe permanecer.

Hoy nos encontramos en una emergencia económica y también ante casi una emergencia política. Ustedes recordarán que durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra vivió un proceso electoral, pero a nadie se le ocurrió suspender las elecciones. Lo tenía de la independencia de las naciones, de la vida, de la muerte, y lo que se votaba a tranquilidad y a la tranquilidad, porque lo que nos alica es permanecer en el

tiempo es aferrarnos al valor del sistema en el cual se resuelven las contradicciones. Esta emergencia es mucho menor que la que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no quieren meter en ese callejón? ¿Por qué quieren hacer las cosas a cualquier precio? ¿Por qué nos quieren atropellar? ¿Por qué resolver la emergencia económica con la emergencia constitucional?

Recién escuché en los corrillos, muy por la bajo, que a lo mejor alguien intenta modificar este "artículo" de los viejos sueños del ministro. El señor diputado Maqueda ya no tendrá el problema que tuvo en su interpretación de la semana pasada porque aquí se está hablando del aumento del IVA, que es coparticipable desde aquí hasta la China, y a donde quiera que sea.

Por otra parte, los partidos provinciales seguirán soportando la crisis en sus provincias, porque si se crea un fondo de destino específico no será para coparticipación sino para aumentar el Tesoro nacional y corregir los desfases del propio autoritarismo económico reinante en el país. De cualquier modo, para implementar eso necesitarán los 120 votos, la mayoría absoluta de esta Cámara. (Aplausos.)

Si eso que se está dando por debajo de alguna banca se convierte en realidad, quiero decirles —a pesar de que nosotros no vamos a votar el "Impuestazo"— que sería un gran servicio a la República no aceptar delegaciones omnímodas de facultades que destruirán al Congreso. De otro modo nos quedaremos sin tener futuro en los próximos meses y otros gobiernos por nosotros. Pero yo les advierto que si la modificación continúa, si el artículo promueve su camino generando inconstitucionalidad, ilegalidad o ilegitimidad, mañana por la mañana se hará realidad el viejo sueño del ministro Cavallo. Podrá pararse frente al espejo de su dormitorio y recordar la antigua frase de Luis XIV diciendo en voz baja y sonriente: *L'Etat c'est moi*. El Estado soy yo. (Aplausos. Varios señores diputado rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Abihaggle.— Señor presidente: hoy estamos aquí analizando el contenido de un expediente que trata sobre la ampliación del impuesto a los activos, en el marco de una situación financiera bastante diferente a la que vivíamos algunos meses atrás. Cuando hablo de la situación financiera estoy analizando claramente la naturaleza de la crisis que hoy padecemos.

como en la República Argentina. No existe indicador alguno ni presente ni pasado ni futuro de que estemos frente a una crisis de naturaleza económica y, que yo sepa, la economía y las finanzas son dos cosas complementarias pero bastante disímiles. Sería muy equivocado y podría llevar a error si alguien aquí pretendiera decir que nuestra economía está débil.

Está claro cómo se ha ido modificando el lenguaje de quienes se oponen a este modelo de transformación que estamos desarrollando. No hace mucho yo escuchaba decir a la oposición que solamente habíamos conseguido la estabilidad y faltaba el crecimiento. Pero se tuvieron que rendir ante la evidencia de un aumento de más del 35 por ciento en el producto bruto, de más del 30 por ciento en los indicadores de consumo y ante la evidencia de los miles y de los millones generados a partir de la producción industrial en el tema de los electrodomésticos durante los últimos cuatro o cinco años. Y si no que digan dónde han ido a parar los televisores, cocinas y lavavajillas que se han vendido. Esto no ha podido hacerse sin un aumento en el salario real porque no son los ricos los que consumen este tipo de productos.

No hay dudas de que están aumentando las exportaciones. Nadie dice aquí que las exportaciones de enero y febrero de 1995 han experimentado aumento del 39 por ciento con respecto a los mismos meses del año anterior.

Entonces, es evidente que estamos viviendo una crisis de carácter financiero y por lo tanto los remedios a aplicar también deben tener esa naturaleza y no tienen que ser de tipo económico.

También es cierto que necesitamos recuperar la confianza, y a esto obedece nuestro apuro y la necesidad que tenemos de trabajar en la sanción de determinados proyectos, porque toda crisis financiera si no es atacada a tiempo y si no se le aplican los remedios correspondientes puede llevar a un problema de tipo económico, como de algún modo se está comenzando a visualizar. El hecho de que se haya cortado la cadena de pagos y que nos veamos imposibilitados de obtener créditos —principalmente para la pequeña y mediana empresa—, así como otras consideraciones más amplias que no vale la pena efectuar aquí, nos van a llevar sin duda a un problema de carácter económico con el correr del tiempo si no le sabemos poner remedio justo a tiempo.

Las crisis financieras comienzan por lo macro y terminan afectando lo micro; comienzan

en los grandes números y terminan afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. Con las soluciones ocurre lo mismo: primero tienen que aparecer a nivel macro y después deben descender a lo micro.

En consecuencia, necesitamos dar un signo de confianza, de solvencia fiscal y de solvencia financiera a nuestro Estado nacional, a fin de generar nuevamente el ingreso de capitales. La confianza en nuestro sistema bancario hará que regresen los depósitos. A su vez, esto generará una baja en la tasa de interés que permitirá recuperar el crédito.

Si esta no es la solución, invito a que se propongan alternativas a nuestra propuesta en lugar de criticarla. El proyecto en consideración se inscribe en ese marco de la necesidad de recuperar la solvencia fiscal. Esta iniciativa y todas las que analizaremos están inscritas en este contexto. No se trata de que el auto o el avión se hayan detenido. Hay una equivocación en ese pensamiento. El avión o el auto —o sea, la economía— siguen siendo los mismos. El único cambio consiste en que ahora tienen una entrada de combustible menor. Esta es la influencia que ejerce el mercado financiero sobre la actividad económica.

Hemos escuchado propuestas para salir de esta crisis. La oposición ha señalado la necesidad de disminuir el gasto público. Esta es una buena medida, pero se trata de propuestas que hay que concretar en la realidad. Sin ir más lejos, esta mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda quisimos tratar un proyecto de mi autoría y otros señores diputados del justicialismo —expediente 5.762-D-94—, el que según estimaciones de un notorio economista del radicalismo, el licenciado Adolfo Sturzenegger, significaría una reducción del gasto del orden de los 700 millones de pesos. No conseguimos de los bloques opositores la posibilidad de considerar la iniciativa. La hemos dejado para otra oportunidad, en la que finalmente lo haremos. Entonces, necesariamente hay que llevar el discurso a los hechos y a las realidades concretas.

Sr. Molinas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Abilaggle. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: frente a la afirmación que efectúa el señor diputado en el uso de la palabra, quiero aclarar que esta ma-

rama estuvo en la comisión desde las 10 y 30 hasta las 11 y 30 horas. Sólo estaban presentes cuatro señores diputados del justicialismo y quien habla. De manera que la culpa de la falta de quórum no puede ser atribuida a los bloques opositores.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Abihaggle. — Señor presidente: después de que se retiró el señor diputado Molinas se produjeron los acontecimientos que yo señalé.

Insisto en el tema de que no hay ningún problema para analizar el presupuesto de 1995. Tanto el Poder Ejecutivo como cualquier legislador pueden presentar un proyecto para reformular el presupuesto de 1995. Con toda seguridad, si se quiere eliminar o reducir un gasto improductivo —como existen en todos los presupuestos del mundo—, se encontrará —por lo menos de mi parte— el eco que corresponde.

Por eso estamos ampliando el impuesto a los bienes personales. No estoy de acuerdo con que vayamos a cambiar la base del impuesto. Ello depende de la definición de bienes que se adopte, pero considero que se trata de una ampliación de la base imponible del gravamen que está en vigencia. Incluso, no se cambia el destino que tiene el tributo, que está dirigido principalmente al sistema previsional. Lo que estamos haciendo al ampliar la base es bajar la alícuota del impuesto. Por lo tanto, de ningún modo se lo puede calificar como un "impuestazo".

Aquí se ha dicho, haciendo alusión a la situación económica que estamos viviendo...

Sr. Losada. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Abihaggle. — Por respeto al señor diputado Losada, se la concedería; pero me falta medio minuto para terminar mi exposición.

Aquí se ha dicho que los argentinos están en búsqueda de un piloto que permita aterrizar el avión. Creo que se ha elegido mal el ejemplo. No estamos en la búsqueda de un piloto que pueda aterrizar el avión, porque ello significaría que estamos buscando el estancamiento, sin posibilidades de crecer. Por el contrario, los argentinos buscamos un piloto que sea capaz de seguir conduciendo el avión a la velocidad con que lo venía haciendo anteriormente y que en definitiva nos permita iniciar el despegue de la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: en primer lugar adherimos a lo señalado por el señor diputado González Cayiola en cuanto a nuestro pesar por la situación que está atravesando el señor presidente de la República a raíz del accidente sufrido por su hijo. En realidad es un dolor tan grande que para dar un adjetivo tanto y pobre — que escapa a la ponderación de las palabras. Por ello expresamos nuestro absoluto respeto y solidaridad.

Entrando al análisis del proyecto en consideración, y de algunos borradores de artículos que se pretenden incluir, voy a señalar nuestra posición. Sobre la filosofía de esta norma quiero aclarar que ya le habíamos indicado al señor ministro de Economía cuando estuvo en esta Cámara que se trataba de una ley regresiva porque en contradicción con lo que se afirmaba bajaba la alícuota a las grandes concentraciones de capital expresadas en la tendencia de importantes bienes, disminuyéndola del 1 al 0,5 por ciento, y además incluía a los bienes que estaban afectados al accionar económico en la base imponible. Por eso dijimos en esa oportunidad que se estaban efectuando dos modificaciones regresivas. ¿Qué se cambiaba modificando la alícuota y alterando el objeto imponible? Como lo hicimos hace más de dos años alertamos que este nuevo gravamen sobre los bienes de los pequeños y medianos productores —que iban a ser alcanzados a pesar de que había un mínimo de 100 mil pesos— iba a agudizar el quebranto de quienes ya no pueden pagar los impuestos existentes ni las deudas que tienen.

Ante esta realidad se iba a abrir nuevamente el camino de la doble y triple imposición que ya sufren estos pequeños y medianos productores con el impuesto inmobiliario y con algunas tasas comunales en ciertas provincias que llegarán a constituir verdaderos flagelos, pagándose el equivalente a 25 o 28 litros de gasoil por hectárea en concepto de tasa de caminos.

Esto no fué respondido oportunamente por el señor ministro. Sólo dijo dos cosas, que debían figurar en la versión taquigráfica: que si era cierto que tenían deudas —como decían los pequeños y medianos productores— iban a poder desgravarlas, y que el impuesto no era regresivo porque tenía un mínimo no imponible de cien mil pesos. No dijo absolutamente nada respecto de la diferencia de las alícuotas.

Lajos de nuestro ánimo está negarnos a gravar las concentraciones de capital. Respalamos el proyecto presentado por la señora diputada Fernández Mujica, que planteaba una escala progresiva para la aplicación de este impuesto.

Ahora bien, nosotros pensamos que para hacernos responsables de un incremento impositivo que ha de castigar, como siempre, a los sectores de menor capacidad contributiva —sobre todo cuando se piensa en el IVA, que es un impuesto indirecto que no grava de acuerdo con la capacidad contributiva— debemos tener un cuadro general de la situación y éste no se nos brinda por falta de información del Poder Ejecutivo.

El otro día el ministro repitió dos o tres veces el mismo discurso, la misma línea argumental. Dijo que tienen que cerrar las cuentas fiscales, que si no cierran no hay préstamo del Fondo y que si no contamos con ese préstamo no podemos salvar el sistema financiero; después todo depende de que la confianza vuelva. Pero hubo un presupuesto que renació el Poder Ejecutivo y que esta Cámara aprobó hace pocos meses. Los integrantes del Frepaso lo votamos en contra y dijimos que era un presupuesto para un año electoral. Y hoy llegamos a un nuevo ajuste: se ajustan las imposiciones pero no los gastos. Esta es la realidad. No basta la expresión de deseos, por sinceros que sean —no entro en este campo— de un diputado o de un conjunto de diputados. El Poder Ejecutivo tendrá que haber suministrado la cancelación de gastos aprobados en el presupuesto y enviados por él. Las únicas cancelaciones que conoce la gente son las salariales. Por eso, pedimos la revisión del presupuesto para no seguir con los gastos del año electoral y evitar que el desfase lo pague solamente la gente, pues también debe afrontarlo el gobierno, el Poder Ejecutivo.

Queremos saber cuáles son los alcances concretos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ya que tampoco se los conoce. Sobre la base de qué conocimiento integral de la situación presupuestaria de la República se nos pide la modificación de gravámenes? ¿Cuáles son las próximas obligaciones que tenemos con el Fondo? ¿Cuáles son los tiempos y los requisitos impuestos por ese organismo, que ha aceptado el equipo económico?

Sobre ello no tenemos ningún conocimiento, ninguna información. Se modifican los recursos, pero todo se destinará al Tesoro nacional. ¿Y que sucede con las provincias? ¿Acaso sólo está en crisis el Estado nacional? En las provincias tenemos problemas todos los días; estamos esperando que exploten? Nada va hacia las provincias, ni un cobre. Tengo sobre mi banca el borrador de un artículo por el que se prometen a las provincias 1.200 millones de pesos: cómo se concretará esto, en qué fecha? Esto es como tener un billete de lotería en el que no figura

el día del sorteo y no sabemos cuándo se juega. Por lo tanto habría que determinarlo claramente.

En las provincias hay gente que administra que gobierna y que requiere de un cálculo de recursos. Ajustemos; si reventan no pasa nada; no están en juego el modelo ni el equipo económico.

En el área de planificación de la economía, de acuerdo con el presupuesto, hay más gastos que los que tiene el INDEC. No existe un solo recorte de los gastos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos...

Sr. Presidente (Usandizaga). — La Presidencia ruega a los señores diputados guarden silencio y permitan al orador hacer uso de la palabra.

Sr. Estévez Boero. — Gracias, señor presidente. A raíz de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, como todos sabemos, se proyecta la modificación del IVA por su eficiencia y difícil evasión. Ahora dice el señor ministro que está asustadísimo con la evasión. Desde hace largo tiempo estamos aplaudiendo los altos niveles de recaudación; ahora, en 60 días ha descubierto que hay evasión. El IVA, que es un impuesto terriblemente inequitativo, se ha globalizado en el mundo a raíz de las teorías del "thatcherismo" y el neocapitalismo salvaje, con el cuento de que sin él no puede existir justicia contributiva y que su recaudación se utiliza para privilegiar a los sectores necesitados y el gasto social, lo cual aquí se restringe. Este impuesto podría ser aplicado con cierta sensibilidad social como lo que ha existido en otras épocas en nuestro país. Se podría haber impulsado una excepción al IVA para los alimentos de la canasta familiar y para los medicamentos que la gente necesita, pero en este proyecto no hay ningún vestigio de sensibilidad social. Digo esto porque no se establece ningún tipo de excepción que beneficie a los más necesitados que, en definitiva, son los que mayor esfuerzo van a tener que realizar.

No caben dudas de que es difícil imaginar que este conjunto de medidas esté en contra de la estructura institucional del país y pueda embestir contra la interpretación correcta de la Constitución Nacional. Pero si existieran dudas sobre si el texto que ahora estamos tratando requería de la mayoría especial que establece el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional, ahora, con la incorporación de estos nuevos artículos, es indudable —desde cualquier punto de vista y cualquiera sea la interpretación

que se haga del texto constitucional— qué es necesario contar con una mayoría especial para su aprobación.

Estoy convencido de que, si por cumplir con una promesa que se pudo haber asumido ante el Fondo Monetario Internacional, quebramos la norma constitucional, estaríamos actuando con muy poca inteligencia ya que le daríamos al mundo una señal de desconfianza; y un Estado de derecho tiene que infundir confianza. Esto lo hemos visto en varios informes internacionales, porque cuando se analiza un país no sólo se observa la mano de hierro que pueda tener para aplicar impuestos sino también la previsibilidad en el cumplimiento del derecho. No son niños que vienen a comer un caramelo; es gente que para invertir necesita seguridad jurídica. Entonces, no se pueden conformar con la mera letra del texto constitucional esperando que cambien las cosas o que cambie un ministro, o pensar que la Constitución es "de chicle". Esto es lo que se tiene en cuenta cuando se habla del riesgo y de la confianza que existe en un país para invertir. Estamos hablando del cumplimiento de las reglas de juego, cuya base es el texto constitucional.

Con respecto al tema del federalismo debo señalar que existe un artículo, todavía en borrador, que prorroga hasta el 1º de abril de 1996 la cláusula de un pacto federal. Lo extraño es que se la prorroga en forma unilateral; en ningún momento se indica que se va a proponer a las provincias la prórroga de dicha cláusula. Por ello, insistimos en el tema del suministro de información, para que ella pueda ser manejada por quienes asuman la grave responsabilidad de incrementar la carga impositiva a nuestro pueblo.

A fin de poder recortar los gastos, necesitamos que el presupuesto sea remitido nuevamente al Congreso de la Nación. Además, sería conveniente que analicemos la alternativa de la progresividad que propusimos la semana pasada y a la cual sólo supo responder el señor ministro—no los diputados socialistas— al manifestar que no se podía gravar al gran capital porque se retiraba del país. Esto figura en el Diario de Sesiones de esa reunión.

Por lo tanto, seguiremos trabajando pero dentro del marco de la Constitución y nunca fuera de él. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Corresponde que en este momento haga uso de la palabra el señor diputado Balter, quien se halla ausente. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: estamos, como lo ha reconocido en exceso el señor ministro

la semana pasada, en una grave emergencia económica. Pero ahora nos hemos enterado por boca del señor diputado Abihaggle, de la bancada Justicialista, de que esta crisis que estamos viviendo en la Argentina tiene causas exclusivamente externas, provocadas fundamentalmente por un fenómeno internacional: el movimiento de capitales. Sin embargo, se olvidan de algunos datos.

Anteayer, se echaban las culpas a los diputados que no daban quórum, sin decir que este plan económico tuvo algunos índices de crecimiento, en la compra de electrodomésticos, por ejemplo, porque se vivía de prestado. Lo grave no sería que se reconociera una equivocación sino que no exista voluntad de rectificación. Si la hubiera, nos deberíamos preguntar por qué razón se ha perdido la confianza. Tal vez sea explicable que algunos capitales internacionales hayan tomado la decisión de retirarse de la región porque les convenían más las tasas atractivas que fijó en febrero del año pasado la Reserva Federal norteamericana. Pero no es explicable que los fondos de los inversores argentinos se hayan retirado. Lo que ocurre es que se ha perdido la confianza.

Tampoco se dice que ya en septiembre del año pasado el Fondo Monetario Internacional—precisamente el organismo que hace pagar al pueblo argentino el aumento del IVA y otras gabelas más y con el cual el gobierno argentino quiere congraciarse— había advertido a nuestro país que iba a tener un déficit en el tercer trimestre por las medidas que se estaban tomando y no como consecuencia de la situación internacional. Además, se ocultaron diversos informes en el mismo sentido—algunos difundidos por los medios de comunicación internacionales—, desde el del instituto de William Rhodes hasta los más conocidos estudios de la banca Morgan o de "The Economist", que aquí también se señalaron.

Si la situación del país es tan floreciente, ¿por qué se retorna al Fondo Monetario Internacional en estas condiciones? Si a la Argentina le va tan bien, ¿por qué se le exige que tenga este superávit?

Y hay otras preguntas. Si a la Argentina le fue tan bien con este modelo económico de concentración de la riqueza, ¿cuál es el índice de desocupación que tiene y dónde están los fondos provenientes de las privatizaciones? Si esos fondos fueron usados debidamente, con acierto político, ¿por qué la deuda pública, que estaba en 63 mil millones en 1989, hoy alcanza los 80 mil millones, cifra a la que se llega por cual-

quiera de los métodos de cálculo que se utilice y no por información del gobierno, ya que no la da?

Quiere decir que hemos vendido hasta las joyas de la abuela y debemos mucho más que en 1959. Tenemos un índice de desocupación record y el Fondo Monetario Internacional dice que somos un país que tiene que hacer los deberes. Por su parte, la bancada Justicialista nos dice que la culpa no es de este gobierno sino de la situación internacional que afecta a toda la región. Y ponen caras de "yo no fui"; pero resulta que ahora que se termina la fiesta, el Parlamento debe dictar leyes que son verdaderos zarpazos al pueblo, a la actividad privada, y en el caso del IVA, a los que menos tienen.

Para hacer los deberes, se piensa extraer la plata del bolsillo de la gente, pero debe hablarse con propiedad: los deberes se hicieron mal. Aquí debería existir una rectificación y un acto de contricción, la vuelta del presupuesto para que este Congreso recorte el gasto público.

En la interpelación al ministro de Economía dijimos que desde la convertibilidad hasta el presupuesto de 1965 el gasto público aumentó 7.422 millones de dólares, sin calcular el gasto social, que es la parte en la que ha impactado el cambio del régimen previsional. Lo que nosotros decimos surge de las cuentas oficiales y lo señalan los más diversos órganos públicos y privados en la Argentina. Incluso una declaración de FIEL, publicada hace dos días en los medios, dio cuenta del incesante aumento del gasto público.

En algunas reparticiones, como el propio Ministerio de Economía, el incremento del gasto es mucho más importante que el del gasto público en algunas provincias. De manera que aquí no pueden venir a decirnos que no tienen nada que ver y que la solución es votar leyes terroríficas que atentan contra el orden jurídico. Después de este desastre no pueden venir a pedirnos que votemos como solución este artículo, que ahora lleva la firma de un diputado pero que era el artículo 14 del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y que significa la destrucción del orden jurídico.

¿En qué país del mundo con estabilidad y crecimiento el Congreso vota cheques en blanco para que destruyan el orden jurídico? ¿Quién invierte en un país donde la suerte de las cosas queda en manos de un decreto? Ese artículo 14 no se debe votar, no porque falten diputados sino porque es un disparate, y si llegara a aprobarse se sepultaría el orden jurídico en la

Argentina. No se trata de una rectificación sino de una vuelta más de tuerca de una sucesión de errores.

Todas —los medios, los operadores, etcétera— han venido a traernos un mensaje: estamos en una grave emergencia y debemos apurarnos a sancionar leyes porque el Fondo Monetario Internacional las exige. Se ponen en boca del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos palabras que no sé si ellos habrán pronunciado. Pero las cosas se corrigen desde acá; hay que empezar desde acá y recortar el gasto público. Se trata de verdaderos nichos de gasto público que el poder utilizará con destino electoral.

¿Cómo es eso de que no hay dónde recortar? Yo quiero mucho a mi provincia, Buenos Aires, y conozco el drama que ella tiene, pero el gobernador ha tenido en sus manos una cheque-
ra para dar dos millones de dólares diarios.

Ciertamente la provincia de Buenos Aires padece una gran emergencia social; pero, ¿cuáles son los planes en salud y en educación? ¿Cuánto ganan los maestros? ¿Cuántos chicos van a la escuela? ¿Cómo se atiende en los hospitales? No se trata de hacer propaganda o de pagar a los medios para que muestren a los gobernantes. El país significa algo más que ganar una elección, es algo más que una encuesta, y a la provincia de Buenos Aires le tocan 700 millones de pesos, el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. No digo que no lo merezca, por supuesto que sí, pero esos recursos hay que usarlos de modo apropiado, y frente a la emergencia nadie ha pensado si no habrá que revisar algunos conceptos.

Resulta claro que estamos urgidos, pero la condicionalidad la pone el propio gobierno, que es el que se debe rectificar. Nos remite para su consideración un proyecto de ley sobre modificación del impuesto a la riqueza, que trataba sobre los bienes no incorporados al proceso económico pero que ahora pretende incorporar a todos los bienes.

Se nos dice que no se cambia la base de este tributo; sin embargo, ¿no se cambia la base cuando se afecta a 300 mil productores agropecuarios que antes no pagaban este gravamen? El presidente de la Nación les prometió en la exposición de la Sociedad Rural Argentina que se iba a derogar el impuesto a los activos, pero ¿caso el impuesto a la riqueza no es el impuesto a los activos?

No hace un día que este proyecto de ley sobre modificación del impuesto a los bienes

personales no incorporados al proceso productivo está en la Cámara de Diputados; data de 1993, y si la bancada Justicialista hubiera querido lo podría haber aprobado incluso antes de la modificación de nuestra Carta Magna.

Todas las entidades agropecuarias se pronunciaron sobre este tema. También quiero referirme a este sector porque existe una cultura nociva: se cree que el que está en el campo tiene recursos y que el que vive en la ciudad es pobre. Eso es mentira; ya no quedan ricos en el campo ni en las economías regionales. El sector agropecuario debe 7 mil millones de dólares. Los otros días el presidente de Coninagro nos decía que si tuvieran que pagar la deuda tardarían 63 años. Y ahora resulta que, así como en estos días hemos dejado de hablar del gasto e inclusive los operadores privados se han olvidado de este tema con tal de hablar del dinero que van a prestar y de las leyes impositivas que debemos votar, también se comenzó a hacer referencia a la cosecha récord dejando de aludir a lo que debe el sector agropecuario.

En una balanza comercial y en una balanza de pagos como las que poseemos, con la necesidad que tenemos de exportar bienes para reemplazar las divisas que ya no van a venir, ¿cómo vamos a hacer para seguir exportando trigo, manzanas, algodón, arroz y carnes si a este sector que tiene que invertir, cambiar las maquinarias y fertilizar, además de no darle solución, hacerle desaparecer el crédito y dejarlo sin respuesta frente a los 7.000 millones de pasivos bancarios, por medio de este impuesto le agregamos otros 350 millones que deben pagar? ¿Cómo vamos a hacer para producir en la Argentina? El gobierno estuvo de fiesta y ahora la mejor forma de pagarla es esta: menos producción, menos comercio y atacar al consumo popular. Se nos dice que no se cambia la base, pero la verdad es que esto no se entiende.

Tampoco entiendo cómo es que después de tanto tiempo en la Cámara de Diputados, de manera intempestiva, casi sin darnos cuenta, se puso a consideración este impuesto sobre los bienes personales, se aprobó en la comisión y ahora ya lo tenemos aquí. No se trata de un impuesto de percepción automática sino que se va a cobrar a fin de año; y aunque pretendan utilizar la facultad para gravar con anticipos, no se da tal facultad en este impuesto, por lo que el anticipo sería inconstitucional. ¿Sobre qué base se va a gravar?

Además, ya me he referido al sector agropecuario, ¿sabrán los señores diputados que la base patrimonial se calcula sobre valuaciones fiscales provinciales y que en muchas provincias nada tienen que ver con lo que vale el bien y con la posibilidad económica del productor? ¿Sabrán los señores diputados cómo está valuado la viña, o el campo en la provincia de Santa Fe o en la de Buenos Aires? ¿Sabrán los señores diputados lo que significa un mínimo no imponible de 100 mil pesos con las dificultades que hoy padece ese productor? Nos podrán decir que estamos hablando de apenas un 0.5 por ciento, pero se trata de un sector que tiene que invertir, producir y que está endeudado. Tendríamos que prestarle en vez de cobrarle.

Tal vez mañana o el año que viene sea necesario publicar cifras —que en algunos casos son arregladas— sobre cosechas gruesas y finas récord, para que la gente tenga la sensación de que por obra y milagro de la naturaleza este sector ya no está más en crisis ni en quiebra y que se van solucionando los problemas del país. Hay que decir las cosas de otro modo. Se debe hablar con la verdad para encontrar las rectificaciones. Por este camino a la Argentina le va a ir muy mal.

Hubo un presidente de una entidad que nos ha dicho que ellos están esperando que sancionemos este impuesto para empezar a pagar. Pocos días antes también había estado con nosotros, oportunidad en la que dijo que éste o cualquier otro impuesto era malo. Pero yo afirmo que ese dirigente, ese presidente de la Sociedad Rural Argentina, no expresa ni al campo argentino ni a las economías regionales. La producción primaria no está en condiciones de pagar medio centavo más de impuesto.

Entonces, ¿cómo no vamos a cambiar la base? Lo estamos haciendo. Incluso, se introducen los activos financieros con un descuido y una ligereza que realmente llaman la atención, porque los títulos públicos fueron emitidos con cláusulas de eximición impositiva total. ¿Cómo van a quedar con esta iniciativa? Dada la situación actual del mercado accionario, ¿cómo se van a gravar las acciones de aquellas empresas que tienen quebrantos transitorios? ¿Cómo va a ser la imposición sobre esas acciones, dada la situación que se está viviendo? Pareciera que no se ha pensado en estas cuestiones.

De manera que para cada cosa que hacemos no debemos encontrar un discurso político para quedar bien y para superar la circunstancia

de una sesión parlamentaria. Es hora de que empecemos a trabajar y elaborar ideas de otra manera. Nosotros no hemos hecho pedidos por capricho sino porque sufríamos en nuestras manos la pulsación y el dolor de un país que la está pasando muy mal.

Estamos dispuestos a compartir soluciones y a no levantarnos de estas bancas, pero se tienen que cumplir principios mínimos de legalidad y racionalidad, sin los cuales en vez de prestar un acto de servicio para el que estamos obligados, estaríamos cometiendo un crimen contra las instituciones y la economía de la Argentina.

En consecuencia, resulta necesario reflexionar. ¿Cómo se va a aplicar un gravamen sin tener en cuenta las deudas? Se había prometido no gravar al sector de la producción primaria y ahora volvemos con una triple imposición que surge del impuesto a la riqueza, del impuesto inmobiliario y de las tasas municipales. Sin embargo, no tenemos en cuenta las deudas, incluso, lo que es más grave, no se ha considerado el dictamen de minoría, que menciona un mínimo no imponible igual al doble del que figura en el dictamen de mayoría. Aunque no se hubiesen considerado las deudas, la elevación al doble del mínimo no imponible habría tenido varias ventajas. En primer lugar, la recaudación habría resultado más fácil. En segundo término, el control de la DGI habría presentado menos complicaciones. Finalmente, el costo para cobrar los impuestos habría sido más bajo, lo que parece no importarle a este gobierno.

Hemos presentado un proyecto alternativo para que este impuesto lo pague un sector muy pequeño, que es aquel que tiene capacidad contributiva para hacerlo. Pretenden cambiar un esquema aceptado en el mundo. Los impuestos se deben abotar según la capacidad contributiva de cada sujeto. Con esta intención, en cambio, han hecho otra cosa. Han obtenido una película y la transformaron en una fotografía, que es estática. El impuesto lo aplicamos a esa fotografía. ¿Sabemos lo que hace detrás de ella? ¿Conocemos lo que sucedió ayer y lo que pasará mañana con esa fotografía? ¿Cuál es la realidad de la fotografía?

Por si fuera poco, a este proyecto se han agregado otras inquietudes. Parece que ha llegado una emergencia de arriba. En virtud de ella, todos tenemos que hacer una contribución patriótica que en la Argentina consiste en que los diputados se apuren a aprobar leyes

para aumentar los impuestos de la gente. Esta es la contribución patriótica. Entonces, nos trajeron la historia del "cristianazo".

La semana pasada tuve el gusto de conversar con el secretario de Ingresos Públicos, un hombre por el cual tengo un enorme respeto, sobre lo que significa esta autorización en blanco que, además, debía afectar la mayoría de los problemas. Era tan grossa la redacción que ahora felizmente nos han traído propuestas concretas a los que me quiero referir. Se ha deslizado un error del que no teníamos conocimiento. ¿Sobre qué vamos a cobrar el impuesto? ¿Sobre la actividad económica? ¿O se ha enterado el gobierno de lo que ha caído la actividad económica? ¿No se ha enterado de que cuanto más impuestos establezcamos más va a caer la actividad económica? Estamos de acuerdo con qué hay que renunciar con el crédito pero debe ser un crédito compatible con la actividad económica.

No se ha ponderado la caída de la recaudación impositiva por la disminución de la actividad económica. Entonces se propusieron tres medidas y ya no se habla del gasto, del que nos hemos olvidado. Que cuclen el presupuesto al Congreso y que se libren los gastos es un capricho de la oposición. Así que el gasto es muy libre; alguien podrá decir "No, pero el gasto lo hemos suprimido por decreto".

¿Por qué queremos que vuelva el presupuesto a la Cámara? Por una razón muy simple: con la misma máquina de escribir y con la misma mano con que se redacta un decreto a los ocho de la mañana se lo deja sin efecto a los 12 del mediodía. Una ley no se puede dejar sin efecto tan fácilmente.

¿Cuáles son los artículos que nos proponen? La prórroga del pacto — técnicamente que puede ser válido — y el aumento en 3 puntos de la alícuota del IVA. ¿Se ha medido la repercusión que va a tener esta medida en el consumo popular? ¿Se ha medido la repercusión en aquella gente que a duras penas conserva el trabajo y cuyo único ingreso es de 500 o 600 pesos? ¿Se ha medido cuál será la contracción en el mercado? No, señor presidente. Se toma el impuesto más cómodo para cobrar y llegar al 14 de mayo. Esa es la prior de las técnicas.

Además voy a decir algo que los va a sorprender: van a recaudar mucho menos de lo que creen porque va a aumentar la evasión. Digamos esto porque se están dividiendo de algo chomental; no se puede gravar a la renta de subsistencia, porque la gente entre comer y pagar impuestos prefiere la prórroga. En esto se han equivocado,

Hay otro artículo bastante extraño que me voy a permitir leer porque llama verdaderamente la atención. Dice así: "La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de 1.200 millones de pesos para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales y de la banca provincial". Cuando votamos las salidas de dinero también votamos las entradas. ¿De dónde viene este dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo es posible que se nos hayan escapado nada menos que 1.200 millones de dólares? ¿Cómo se asegura el cumplimiento de esta obligación que la Nación va a asumir cuando votemos esta ley?

Pero el artículo no termina aquí, señor presidente. Más adelante agrega: "... al cumplir sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción que les corresponde en el régimen de coparticipación federal". ¿Qué debemos entender? ¿Que los 1.200 millones de pesos van a repartirse según la coparticipación federal tomando a las provincias que tienen muchas dificultades y a las que tienen pocas y aplicando el índice de la coparticipación? ¿O que primero van a resolver los problemas de las provincias y bancos con dificultades y, si sobra algo —al cumplirse los objetivos, como dicen— será distribuido según el régimen de coparticipación?

Esto es más o menos lo que dejan entrever los tres puntos de aumento del IVA. Ahí se cambia la asignación; se hace no coparticipable. Aquí aparece una coparticipación que no tiene recursos y además uno no comprende cómo se hará la distribución.

Por las razones expuestas me sumo a la expresión de mi bancada en rechazo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Creemos que es necesario recomenzar con otro plan de trabajo: que vuelva el presupuesto, recortemos el gasto, busquemos entre todos los impuestos, los recursos para una canasta que se llame "de emergencia fiscal", que no es solamente del gobierno nacional aunque en algunos casos hayan gastado más que las provincias. Hagamos que esos impuestos sean coparticipables y que atiendan las crisis que tienen las provincias, la banca provincial y las economías regionales y tal vez así estemos realmente iniciando un camino que le hace mucha falta empezar a la Argentina (*Aplausos*).

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: evidentemente el debate se ha derivado a cuestiones mucho más amplias que el proyecto de ley que

estamos tratando. Está bien que así sea porque el hecho de ocuparnos hoy de un proyecto de ley en particular no resuelve los problemas que están latentes en la vida argentina en el momento actual.

En 1989 —al inaugurarse este gobierno—, con las privatizaciones, desregulaciones y demás sorprendentes medidas se genera confianza en el país y ello atrajo 40 mil millones de dólares a la República Argentina. En la economía argentina esta cifra significa mucho dinero. Una fracción comparativamente chica de esa suma se invirtió en verdaderas empresas a largo plazo; otra fracción se orientó a empresas que imprudentemente se endeudaron a corto plazo; otra parte se dirigió a la especulación —la Bolsa pasó de 20 millones a 80 millones de pesos por día y además las acciones subieron diariamente, permitiendo que los especuladores obtuvieran rápidas ganancias—; y otra parte es monetizada por el Banco Central, que compró los dólares y esos pesos sirvieron como base al crédito que se amplió debido al multiplicador bancario. Se inundó el país con fondos que en forma imprudente la población tomó comprando automóviles, heladeras, etcétera.

Esta carrera consumista más el tipo de inversiones señalado provocó un boom, que el país vivió durante casi cuatro años. Se formó una especie de burbuja de expectativas favorables. Todo el mundo apostaba a esa burbuja sin darse cuenta de que estaba firmando sobre bases endebles, al contraer compromisos a largo plazo o consumiendo con crédito a corto plazo. Cuando ese crédito se cortara tendríamos un proceso inverso.

El fenómeno que nos afecta se produce a fin del año pasado por seis razones, de las cuales me referiré solamente a dos para no extender mi exposición. Una de ellas es el llamado "problema México", que no es el más importante y que en realidad no es lo que precipitó los acontecimientos. La otra razón se relaciona con lo que vivimos aquí, en la Cámara, cuando a fin de año apareció un déficit de presupuesto. La palabra "déficit" preocupa a toda la población, pues por suerte la opinión pública argentina está muy alerta frente a este tema ya que no quiere volver a vivir la hiperinflación de julio de 1989. Por eso, como sabe que detrás del déficit llega la emisión de moneda y luego de ésta vienen la inflación y la hiperinflación, el público se preocupa por este tema.

Esa cuestión, la situación de México y cuatro factores más que aisladamente no hubieran pro-

ducido la inversión de la situación, en conjunto hicieron que la tendencia positiva se invirtiera. Así, la expectativa optimista se transformó, si no en pesimista, por lo menos en incertidumbre y en una gran duda. Entonces, se produjo un movimiento contrario al que habíamos vivido antes, y de esta manera comenzamos a vivir la fase descendente del ciclo. Es decir, durante cuatro años subimos en el ciclo económico, pero a partir de fines de 1994 comenzamos a recorrer su fase descendente, a cuyo fondo no hemos llegado todavía ni sabemos cuándo se va a revertir.

Esa situación, si bien no es común, tampoco es la primera vez que ocurre en la historia económica. También sucedió en nuestro país en la época de Martínez de Hoz. En ese entonces el "dème dos" era la expresión de un consumo desorbitado que no podía durar.

Este ciclo, que en realidad no debería conmover tanto a la opinión pública, hoy se ve agravado por lo que señalara el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos: una crisis financiera en medio de él, que se traduce en algún corrimiento hacia el dólar y retiro de depósitos. Esto crea en el sistema financiero y en los bancos una perturbación muy grande como la que vivimos en el momento actual. Frente a esta situación, ¿cuál es la reacción del gobierno, en particular del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos?

A fines del año anterior el Poder Ejecutivo nos sorprendió a todos con un proyecto de ley por el que se solicitaba autorización para aumentar el presupuesto de 1994 en 1.400 millones de pesos. Preguntamos al ministro —que había manifestado que no existía déficit— para qué quería ese aumento. El argumento fue que solicitaba esa autorización porque necesitaba arreglar las cuentas, pero que no iba a pedir más dinero pues recurriría al ahorro en otras cuentas.

Luego llegamos al presupuesto de 1995. Ese presupuesto, de cuya sanción todos somos responsables —excepto quienes votamos en contra—, se suponía equilibrado. Su artículo 4º, decía: "Vistos los artículos 1º y 2º donde se equilibran los recursos con los gastos, se considera financiado el presupuesto". A continuación, el mismo artículo determinaba que debían buscarse 600 millones de dólares o pesos para cubrir las amortizaciones de capital que no eran refinanciables y otras obligaciones. Es decir que, por un lado, el artículo dice que no hay déficit, y por el otro, que debemos 600 millones de

dólares. Si no tenemos recursos para pagar eso, es obvio que hay un déficit a cubrir con financiamiento.

Durante los meses de enero y febrero de este año se observó una caída de la recaudación. Además, aunque no pueda probarlo en este momento, hay un deslizamiento de mayores gastos. Entonces, aparece un déficit potencial en el presupuesto que a lo largo del año se efectivizaría como un déficit real. Ahí fue cuando el señor ministro salió al cruce de esta situación y puso en marcha las medidas anunciadas el 27 de febrero, por medio de las cuales se redujo el gasto en mil millones de pesos y, por distintas vías, se buscó incrementar la recaudación en 2.500 millones de pesos. Es decir que, con las medidas anunciadas el 27 de febrero próximo pasado, teóricamente el presupuesto estaría nivelado.

Pero eso no era todo porque aún restaban cubrir los 6.600 millones de dólares por amortización de capital. Para ello se salió a buscar dinero. Inicialmente se pensó en colocar letras en el mercado, pero éstas debieron ser suspendidas ante la imposibilidad de su colocación.

Más tarde apareció un tercer factor que obligó al país a buscar más recursos, como fue el de la inseguridad del sistema financiero. En ese momento el gobierno intentó establecer una especie de salvataje para determinadas empresas por vía privada, pero como eso no alcanzó tuvo que volver a intervenir modificando los efectivos mínimos. Como esto tampoco fue suficiente, surge el interrogante de cuánto más será necesario para evitar una bancarrota, que en cierta forma fue preanunciada por el señor ministro cuando dijo que si no manejamos el problema financiero podemos caer en un pozo del que será muy difícil salir.

A fin de resolver ese problema el ministro solicitó la colaboración del Congreso. Por ello, lo primero que nos debemos plantear es si estamos dispuestos a colaborar para evitar la crisis financiera o si nos vamos a desentender de esa situación.

A todos los señores legisladores, incluso a quienes estamos en la posición constructiva de ayudar para resolver los problemas, se nos presenta un interrogante: no sabemos si lo que se nos ha planteado es suficiente. Por lo tanto, lo que debemos hacer —y es posible hacerlo en 48 horas— es elaborar un cuadro en el que se reflejen los déficit y las necesidades, y cómo se espera cubrirlos. Nos interesa esa visión de conjunto, porque nada ganamos con votar una ley en forma aislada si no tenemos idea

de cómo va a repercutir. Entonces, como la propuesta en análisis, de ser aprobada, rutinariamente tendría efecto recién a fin de año, propongo que, ya sea a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda o de la presidencia del bloque oficialista, se obtenga rápidamente del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda un cuadro de situación. Es necesario saber cuáles son las necesidades y cómo se espera cubrirlas, porque recién entonces la Cámara estaría en condiciones de hacer un análisis razonable para luego decidir acerca de su propia acción.

De lo contrario vamos a emplear varias reuniones y algunas semanas en discutir problemas parciales y en función de apreciaciones de carácter parcial, mientras en el exterior pueden darse acontecimientos que nos hagan llegar tarde. Esta vez actuamos con cierta lentitud. No podemos darnos el lujo de dejar que los acontecimientos se precipiten para luego tratar de evitarlos.

En síntesis, y para no extenderme demasiado, es necesario que hagamos un análisis global, para lo cual deberíamos pedir al Ministerio de Economía un rápido informe, que podría caber en una carilla, sobre cuáles son las necesidades que se presentan en esta emergencia, cuáles los recursos con los que se espera contar y en cuánto se calculan los recursos de aprobarse estas iniciativas.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: en mi humilde intervención durante la última interpelación que se llevó a cabo en este recinto al ministro Cavallo, empleé el término "prever lo previsible", e hice referencia —muchos de ustedes estaban presentes, por lo cual lo recordaré muy brevemente— que lo que se espera de un dirigente, ya sea político o social, o de un funcionario, es que ante lo que puede ser previsto elija como posible un determinado escenario y adopte las medidas necesarias. De esa manera, se debe hacer responsable si el escenario que luego se verifica resulta diferente de aquel que previó y en base al cual eligió el camino a seguir.

Antes del efecto México, concretamente desde febrero de 1994, el problema de la Argentina fue suficientemente planteado en este recinto. Sé empezaba a ver que el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos repercute —tenemos que admitirlo— mucho más fuertemente en estos países latinoamericanos que la crisis de uno solo de ellos.

Cuando le pregunté al señor ministro, en relación con el tema de la previsión, por qué razón no se habían adoptado medidas como las tomadas en Chile —por ejemplo para limitar la entrada de capitales golondrina— cuando se sabía que podíamos esperar situaciones como las descritas por los diputados Alsogaray y Abihagile —quienes con distinta visión coincidían en que desde 1991 hasta 1993 en la Argentina se había llegado a una situación de hiperconsumo estimulada por el gobierno—, me contestó casi textualmente que de haberse actuado de esa manera se habría producido un achicamiento en el consumo interno y de esa forma se habría depreciado —como lo hizo Chile— todo el ingreso de ahorro externo.

En realidad, lo cierto es que no se previó aumentar el ahorro interno y en cambio se apostó. Lo que más tiene el ministro es inteligencia y —como todos nosotros— seguramente previó varios escenarios, pero sin embargo eligió uno en que las tasas de interés en los Estados Unidos aparecían como en una foto, es decir, sin variaciones. Apostó a ese escenario y todos sabemos —es una verdad de Perogrullo— que cuando se apuesta se gana o se pierde. El ministro perdió, pero al mismo tiempo perdimos todos.

Marcar todo esto no es meter el dedo en la llaga y revolverlo, sino que significa avanzar abordando el tema de la confiabilidad.

Hace unos momentos el señor diputado Alsogaray señaló —una de mis preguntas también se vinculaba con este tema— que la población gastó imprudentemente de la misma forma en que lo hizo en la época de Martínez de Hoz, poniendo en práctica el mecanismo del "démelos". Es cierto, muchos lo hicieron, pero repito: fueron estimulados desde las más altas esferas económicas y políticas oficialistas en tal sentido. La cuestión era crear la sensación de que realmente estábamos en un país en el que se podía gastar sin problemas.

Hasta hace poco tiempo, además, por un lado escuchábamos indicaciones para que nos endeudáramos en dólares, mientras que por otro lado nos decían que debíamos endeudarnos en pesos. La confusión era total, pero el estímulo siempre era para gastar más.

Se apostaba a que creciera la industria automotriz y a que hubiera un alto nivel de consumo. Es así que aumentaron las importaciones, con consecuencias en las exportaciones que no comentaré por no ser una experta en el tema.

Hace poco el señor ministro nos dijo: "Me hago responsable; vótenme estos instrumentos porque así salimos". Incluso recuerdo que cuando

le pregunté qué pensaban hacer con las PYMES, me contestó que las PYMES se verían beneficiadas por el hecho de que hubiera confianza e ingresaran capitales, ya que de esa forma iba a aumentar el crédito, porque acabábamos de votar hacia unos instantes una ley de flexibilización laboral para favorecer a dichas empresas. Sin embargo, hoy sabemos que todo esto no tiene el valor superior al de una aspirina y, lo que es peor, las PYMES saben que hoy pueden entrar en una cesación de pagos. También están informadas de que algunas que son eficientes se van a retirar de la oferta de puestos de trabajo y muchas correrán peligro de quiebra por el aumento que se va a producir en los aportes patronales y en los impuestos.

Es decir que nada de lo que se nos ofrece nos garantiza un escenario sin subarrones. Por el contrario, se nos garantiza recesión. Es nuestra responsabilidad —también la del ministro— decir todo esto, con la diferencia de que a nosotros nos votó el pueblo y al ministro lo designó el presidente. Los aquí presentes hemos sido elegidos —con más o menos votos— y tenemos un mandato que cumplir.

Recuerdo que cuando propuse al ministro de Economía la aplicación de un sistema progresivo de impuestos me dijo que se trataba de algo bueno y adecuado, pero que se iba a producir la huida de capitales. ¿Ustedes han visto que huyeran los capitales de Canadá, Estados Unidos, España y Francia por el hecho de que se apliquen impuestos progresivos? Los capitales procuran obtener ganancias y no huyen por la aplicación de impuestos progresivos, sino por la falta de confianza, de seguridad jurídica y por el hecho de que en otros países las ganancias son mayores.

Nos hemos informado por los diarios —últimamente los representantes del pueblo nos enteramos de todo por los periódicos— de que estaría en vista la venta de Yacretá, Salto Grande —aclaro que está capitalizada y que da ganancias—, las centrales nucleares y posiblemente las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que tiene el Estado. O sea que a dos meses de las elecciones que pueden llegar a cambiar el signo político del oficialismo se sigue pensando en enajenar empresas del Estado. Me parece que por un pudor elementalísimo no se debería dar por descontada la elección automática del actual presidente. Además, debería tenerse cuidado con este tema de las privatizaciones, aunque más no sea para no obligar al gobierno próximo a revisarlas.

Aquí existe una crisis económica y de confianza. Creo que hoy el señor diputado Dumón y otros pares se refirieron a 1.200 millones de pesos que no sabían de dónde habían salido y que se prometían a las provincias en este artículo volante que apareció en nuestras bancas. A lo mejor esto se relaciona con las partidas no asignadas que fueron votadas en el presupuesto y que nosotros creíamos que estaban destinadas para publicidad electoral. Quizás hayan decidido dar esto a las provincias. No estamos suficientemente informados. Ya que siempre nos acusan de no tener propuestas, y retomando algunas que hicieron los compañeros del Frepaso, nos preguntamos por qué no se establece el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas y a la nafta, que es un gravamen de rápida recaudación. Eso sí, hay que compartirlo con las provincias, cosa que el señor ministro de Economía no quiere.

En materia de IVA, habría que implementarlo en forma selectiva —hay antecedentes históricos— eliminándolo en los alimentos y medicamentos. También habría que eliminar los subsidios a los peajes y a los ferrocarriles. Esos servicios están privatizados y seguimos subsidiándolos.

Estas son formas de ahorro y seguramente habrá muchas más. Este es un momento de crisis de confianza y de crisis económica; traigamos de nuevo al presupuesto, para que nos informen correctamente desde el Ministerio de Economía no sólo qué recortes se hicieron y dónde se aplicaron sino también qué acuerdo se hizo con el Fondo Monetario Internacional.

Sólo sabemos lo que se deslizó por debajo de las puertas de los recintos cerrados donde durante el fin de semana se discutió el tema, y que fue publicado en los diarios. Ya que se nos pide confianza y también instrumentos, merecemos conocer lo que ocurrió.

Por último, teniendo en cuenta que se nos pide confianza, preguntamos a la bancada oficialista —que está bastante raleada— por qué debemos tener confianza en un ministro y en un equipo económico, de los que yo no digo que hayan sido deshonestos o malintencionados sino que se equivocaron y no lo reconocen. El ministro se equivocó en la elección del escenario posible y no lo quiere reconocer. ¿Por qué hay que tenerle confianza?

Siempre se habló de la eficiencia del equipo económico y no me cabe duda de que algunos de sus integrantes lo son; sin embargo ha sido ineficiente para elegir la salida y eso lleva a

preguntarnos por qué debemos tener confianza, si además no quieren darnos toda la información.

Pedimos que se nos permita revisar este presupuesto que hoy se les critica; por otra parte, el Frepaso presentó un proyecto de presupuesto alternativo y por lo tanto ni siquiera votó el actual. Nos asiste todo el derecho a pedir que vuelva a este cuerpo, empleando en su revisión el tiempo que sea necesario, porque no le escurrimos el cuerpo al trabajo y queremos salir de la crisis.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: el ministro distinguió la semana pasada entre una situación de bonanza en el desarrollo de la economía real y una gravísima situación financiera. Creo que estamos en presencia de un verdadero sofisma y, como partimos de un postulado equivocado, el resultado también será equivocado.

Desde nuestra óptica, la economía real no se compadece con el optimismo del señor ministro. Quienes acompañamos al plan económico desde sus inicios, en este momento nos sentimos no tanto preocupados por la gravísima situación actual sino desilusionados. Esí nos replantea nuestra conducta de hoy en adelante.

Los índices nos demuestran que la economía real no está bien y que la situación financiera es una consecuencia de ello. Los índices de pobreza y de desocupación de caída del consumo, la menor recaudación tributaria, la falta de ahorro interno, el desequilibrio en la balanza comercial, las situaciones de padecimiento de los sectores públicos provinciales y las crisis de las economías regionales constituyen la economía real. La otra economía tiene que ver con estos importantes desfases financieros, que inclusive pueden ser coyunturales. Hemos estado engañados creyendo que el movimiento bursátil, que escaló de 20 a 80 millones de pesos diarios, era parte de una auténtica inversión de capitales.

Para el futuro inmediato casi nos han anunciado el abismo, una situación apocalíptica. ¿Cómo se corrige esto? ¿Se corrige recuperando la confianza por medio de la recomposición de la situación financiera, porque seguimos creyendo que la situación económica anda sobre rieles?

A nuestro juicio el dilema es si la confianza se recupera por medio del replanteo global del gasto público o por la vía de una transferencia mayor del sector privado a ese sector público improductivo. Debemos avanzar sobre ese análisis.

Si se llegara a aprobar una mayor presión fiscal cabe preguntar si la comunidad está en condiciones de soportarla — sobre todo en lo vinculado con los bienes productivos y de consumo.

Existen datos de la realidad que me desilusionan. Se observa una rápida adhesión de los grupos económicos importantes a la situación crítica que atraviesa el gobierno. Quienes votamos por la afirmativa la privatización de YPF, el nuevo sistema previsional y los marcos regulatorios para las empresas privatizadas, nos encontramos con que muy rápidamente los grupos económicos aparecen — ¡abundando de un gran sentido patriótico! — ofreciendo un empréstito solidario por mil millones de pesos. No creo que sea solidario ni patriótico: una tasa labor más el 3,5 por ciento está 3,5 puntos por encima de la tasa anual sobre dólares. En consecuencia, hay una especulación, y sabemos asimismo que el rescate de esos bonos puede producirse a cuenta de impuestos a devengar. Entonces, favor por favor, quisiera ver cual va a ser la actitud de los sabuesos de la DGI cuando tengan que investigar a estas patrióticas empresas.

He pensado en un sistema de privatizaciones pero me preocupa el destino de ellas, y lo digo en este momento, dentro de este espíritu desilusionado, en el enter conocimiento de que es la oportunidad de plantearlo.

Se sostiene que esta iniciativa es la vía para recuperar la confianza; pero más allá de las importantes argumentaciones de índole constitucional, me pregunto si cumple con el alcance de bien general que establece el artículo 75. ¿Es bien general esta transferencia al consumidor final del 3 por ciento de aumento de la alícuota del IVA? ¿No hubiera sido mejor un análisis no sólo equilibrado, sino también pausado para hallar una solución integral a este gravísimo problema? La gravedad del problema nos obliga a la precipitación? Advirtamos que los presupuestos nacionales fueron creciendo desde el año 1992: mientras que el de ese año fue de 33 mil millones, el de 1993 fue de 39 mil millones y ya tenemos uno de 42 mil millones, más 6 mil millones que están dando vueltas, lo que da 48 mil millones de pesos. Existe una seria falta de previsión en materia de equilibrio fiscal, es decir, la posibilidad de generar recursos genuinos. Esta es la situación y por eso se hace muy difícil acompañar este paquete de medidas.

Creemos que existe una expectativa pública por parte de quienes van a soportar esta carga impositiva, lo que les va a resultar muy difícil.

Si bien no soy economista, traigo a colación la conocida Curva de Laffer, que marca el pun-

to de equilibrio entre la imposición y la posibilidad de cumplimiento del impuesto. No debemos equivocarnos por cuanto el incremento del producto bruto interno se ha producido fundamentalmente en el área de servicios. Las producciones siguen siendo iguales a las de hace tres o cuatro años. En consecuencia, no vemos que ésta sea la solución. Este tema nos preocupa porque queremos seguir siendo parte de la confianza pública y acompañar globalmente la marcha de una economía cuyo rumbo no discentimos. Pero esta solución improvisada que se ha impuesto nos preocupa.

Yo me preguntaba si este impuesto se comparaba con los requerimientos de bienestar general. Según dijo el ministro, los destinos serían asegurar el plan de convertibilidad y la estabilidad —con lo que estoy de acuerdo—, atender el servicio de la deuda pública externa y robustecer el sistema financiero argentino, ¿éstos puntos constituyen el bienestar general de todos, sobre todo de los contribuyentes? Yo creo que no. Debemos advertir que este endeudamiento, en el que no sólo están los créditos internos, sino también aquello que el ministro ofrece como grandes logros circunstanciales —como es el aporte del Fondo Monetario y de la banca internacional— constituyen un paquete demasiado importante como para que pase desapercibido en el ámbito del Congreso, donde debemos ser cuidadosos en el análisis de los recursos porque los 5.700 millones que se generarían por esa vía —incorporándose a la deuda pública— implican mayor obligación de amortización y en consecuencia mayor aumento de la tasa de interés anual.

Por lo tanto, debemos tomar esta crisis como tal y capitalizarla entre todos, no desde el punto de vista eminentemente monetario sino realizando un análisis serio y desapasionado donde todos nos sintamos comprometidos.

Hemos escuchado la posición de la primera minoría, que ha sido planteada con gran fuerza y contundencia. Debemos colaborar con el oficialismo para hallar una solución integral. Cuando hay un reclamo de confianza debe responder tanto el sistema como nosotros, porque en ese caso no juegan las parcialidades. Adelanto entonces que no vamos a acompañar la propuesta que se nos hace con este proyecto.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: estamos convocados para considerar la ampliación del impuesto a los bienes personales. Este expediente, que fuera remitido hace casi un año por el Poder

Ejecutivo, fue analizado en su oportunidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En aquel entonces se convocó a todas las entidades involucradas con este gravamen. Desfilieron representantes de una serie de ellas que desde luego, como toda vez que se solicita la opinión sobre la creación de un impuesto, no manifestaron un gran optimismo. En función del análisis objetivo que se realizó del criterio de cada una de ellas, los miembros de la comisión llegamos a la convicción íntima de que no era procedente insistir con la modificación. A tal punto ello fue así que el propio oficialismo retiró el proyecto.

Posteriormente y en un escenario absolutamente distinto, se reiteró la necesidad de aprobar la iniciativa. Los motivos por los que hemos presentado nuestras disidencias son múltiples. No hace falta señalarlos en esta oportunidad porque constan en la versión taquigráfica de las remisiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para los diputados presentes no tendría mayor importancia repetirlos, ya que son muy pocas los legisladores que están prestando atención. Si alguien tiene interés, puede recurrir a la versión taquigráfica.

De todos modos, expresaré que se trata de un impuesto que grava la tenencia de bienes cuando lo ideal sería gravar sus rentas. Es un tributo que conspira contra el ahorro y contra el circuito lógico que deberían tener los dineros y los activos en el país. Su aplicación significa alentar el circuito marginal, al que tanto se quiere combatir.

Por otra parte, la ineficiencia que se ha mostrado en la recaudación de este gravamen resulta manifiesta. Decir que los ingresos provenientes de este impuesto aumentarán en 500 millones de pesos significa nuevamente un acto de ilusionismo. Lo mismo ocurriría con todas las estimaciones de ingresos del presupuesto de 1995. Se trata de actos de ilusionismo que han quedado al descubierto a poco de avanzar en el ejercicio fiscal, ya que desde el Poder Ejecutivo se han tenido que rever todas las pautas macroeconómicas que se tuvieron en cuenta para elaborar el presupuesto de 1995.

A veces nos preocupa la certeza y la seguridad con que se responde a nuestras preguntas desde el Ministerio de Economía, ya que al poco tiempo encontramos que se producen modificaciones. Por eso hoy nos planteamos si vale la pena acompañar esta modificación tan trascendente que se quiere incorporar al impuesto en consideración.

A nadie se le escaparon los inconvenientes que tiene el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos para afrontar esta crisis. Cuando la República Argentina decidió huir del Fondo Monetario Internacional se expresó que se lo hacía a regañadientes de dicho organismo, pues necesitaba los fondos de dinero que la Argentina tenía disponibles para entregarlos a otros países que no tenían posibilidad de acceder a los mercados tradicionales de crédito. La realidad era que nos fuimos del Fondo Monetario por las exigencias de este organismo de cumplir con determinadas pautas fiscales. Fíjese no se quería reconocer desde el Ministerio de Economía y se insistía en la soberbia de decir que todo marchaba sobre rieles, cuando era fácilmente perceptible que no ocurría así. Los hechos lo han demostrado.

Ahora algunos pretenden decir que la economía marcha bien. Nuevamente estamos frente a un acto de ilusionismo. ¿Cómo va a marchar bien la economía si la recaudación de la DGI, tomada por el mejor termómetro que se puede constatar que es el del fondo estímulo que reciben sus funcionarios, ha sufrido una disminución del 11,40 por ciento entre los meses de enero y febrero? Esto es una luz roja que nos indica que no sólo tenemos problemas financieros sino también económicos.

Bien se ha dicho aquí que no podemos limitarnos a realizar observaciones sino que también debemos presentar alternativas; y debo decir que alternativas hay pocas. No podemos seguir avanzando en esta economía si no reforzamos los ingresos. Esperamos que de una vez por todas el gobierno nacional ponga los pies sobre la tierra, sea sensato y empiece a trabajar seriamente —como lo ha prometido— sobre la disminución del gasto público. Esto es lo que se debió hacer en un primer momento y lo que reclamábamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que sesionaba a puertas cerradas en una oficina del edificio anexo y que no atendía los reclamos que desde la oposición se le efectuaban para que concentraran los funcionarios a dar las explicaciones del caso. Con autoritarismo y soberbia se pretendía que firmaríamos un dictamen que ni siquiera habíamos tenido oportunidad de leer; y aquí están los resultados. Sería burro que se den cuenta de lo equivocadas que estaban. Si hubiesen oído a la oposición, seguramente el costo que estamos sufriendo todos los argentinos hubiera sido muy diferente.

¿Qué decisión tenemos que tomar en este recinto? Hemos decidido afrontar el debate y ha-

mar la atención sobre aquellos aspectos que no compartimos, proponiendo nuestras alternativas. Y lo haremos concurriendo a las sesiones como lo hemos hecho desde que nos incorporamos a esta Cámara. En ese sentido quiero aclarar que no hemos hecho desde que nos incorporamos a estas convocadas por el oficialismo ni a las peticidas por la oposición. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Nadie duca de que nos enfrentamos a una crisis muy grave.

La solicitud de refinanciación de 5.200 millones de pesos que realizó el ministro para amortizar la deuda a través de las colocaciones en el extranjero no tuvo éxito, como tampoco lo tuvo a través de las colocaciones en el mercado interno. Entonces deló volver al Fondo Monetario Internacional, a aceptar las condiciones de su monitero y las pautas de la macro que la están imponiendo. Por eso estamos partiendo de otras pautas; ya no vamos a crecer el 6,5 sino el 3 por ciento; vamos a tener que aumentar las alícuotas de los impuestos, como lo dijimos en septiembre u octubre cuando analizamos el presupuesto. En ese momento no se quiso reconocer este hecho y hoy estamos aquí repitiéndolo.

No se van a poder disminuir los aportes patronales en el sector de servicios y comercio, como se prometió que ocurriría a partir del 1º de enero. En su momento se nos dijo que éramos obstruccionistas, que teníamos una visión negativa, que éramos agoreros y que el tiempo iba a demostrar que estábamos en un error. Hoy no solamente no se pueden reducir estos aportes sino que aquellos que habían disminuido tienen que ser aumentados en un 30 por ciento de promedio.

Evidentemente, los fondos son necesarios, no sólo —como se ha expresado aquí— para poder afrontar la amortización de la deuda externa y honrar la palabra de los argentinos —porque es importante no perder la respetabilidad en el concierto internacional dado que la economía globalizada no nos permite desprendernos de la necesidad de dicha credibilidad en los compromisos que asumimos—, sino también para asistir a las economías regionales, que han sido realmente castigadas por este proceso económico, y a los procesos de transformación de los bancos provinciales.

Permítaseme realizar una digresión a esta altura de mi exposición a fin de explicar nuestra presencia y nuestro apoyo a estas medidas. Estamos convencidos de que el gobierno tiene la facultad jurídica de crear este impuesto y de no coparticiparlo; es una de sus facultades conforme al artículo 73, inciso c) de la Constitución,

pero requiero —en esto compartimos el análisis que se ha hecho desde el principal bloque de la oposición— una mayoría especial. Esto es lo que en la Convención Constituyente de Santa Fe se llamaba "artículo C-C". Una "C" significaba que eran artículos constitucionales, que eran posibles constitucionalmente, y la otra correspondía —con la dispensa del término— a "cabrón", porque era absolutamente injusto que el esfuerzo que hacía la Convención Constituyente fuera usufructuado por una parte de la Nación y que no volviera a las provincias.

Ahora nos encontramos ante la posibilidad legal de la sanción de esta norma. Nos parece que el impuesto es injusto o que debiera ser coparticipable, pero no lo es con el método tradicional. Creemos que debemos prestar nuestra colaboración para buscar una solución debido a la emergencia de la crisis. Hemos llegado a un estado tal que, si no podemos consolidar esta situación, perderemos el enorme esfuerzo que ha hecho la totalidad del pueblo argentino para lograr algo que muchos quisieran ver afianzado en el tiempo: la estabilidad. Nos ha costado demasiado para no hacer hoy un nuevo esfuerzo, pero a este esfuerzo tenemos que buscarle alguna equidad en su distribución.

Aquí es donde nosotros planteamos la posibilidad de acompañar el proyecto, porque se piensan destinar 1.200 millones de pesos a las economías regionales y fundamentalmente a los bancos. Y volviendo a la digresión que quería hacer, dará como ejemplo lo que ocurre en la provincia de Mendoza. No estoy cometiendo ninguna infidencia ya que la noticia de que nuestros bancos están quebrados ha aparecido en todos los medios de difusión de la República. Se ha divulgado que nuestros bancos no pueden devolver los depósitos a su ahorristas y que hasta ayer solamente se podían retirar 200 pesos de las cuentas corrientes, de los plazos fijos o de los depósitos en caja de ahorros; esta mañana ni siquiera se podía retirar esa cantidad. Pero las dos principales instituciones de crédito de nuestra provincia acaparan el 70 por ciento de nuestros depósitos, por lo que la economía de la provincia está cautiva.

Mendoza se encuentra en el momento más importante de su vida económica porque su industria madre, que es la vitivinicultura, está en el proceso de recolección de su fruto, de su esfuerzo de un año de trabajo. Estamos en un momento en que los productores —que amanecen al alba con el azadón al hombro para abrir los surcos y aprovechar el agua, que es escasa en nuestra provincia, porque es un de-

cierto en donde se ha construido a partir del esfuerzo y la tenacidad de nuestra gente—, únicamente ven compensado su trabajo si cosechan. La uva en la cepa, se pudre y no espera. No tenemos líneas de crédito para su recolección. Para colmo el productor vitivinícola recibe como compensación por un litro de vino el equivalente al valor de un cigarrillo.

Esa es la situación que está viviendo nuestra gente de trabajo, nuestros productores de Mendoza. Por ello necesitamos del apoyo de la Nación, que siempre nos ha sido retaceado porque equivocadamente se ha vendido la publicidad de que Mendoza era una provincia rica, poderosa y fuerte, con su finanzas equilibradas, pero hoy desgraciadamente demostramos que esto no es cierto.

En la Capital Federal se gastaron fortunas en publicidad diciendo que los bancos de nuestra provincia eran fuertes y poderosos. Lo cierto es que hay crisis; así lo demuestra la realidad. Los jubilados hacen cola para ver si pueden cobrar 200 pesos. Por eso necesitamos de la Nación los fondos indispensables para superar esta emergencia, pues la crisis que estamos atravesando los mendocinos es muy poderosa.

Gracias al esfuerzo de muchas generaciones, luego de batallar judicialmente durante largos años, Mendoza recibió algo más de 600 millones de pesos en concepto de regalías que habían sido mal liquidadas. Afortunadamente, como la redacción de los convenios suscritos con la Nación había sido bien realizada años anteriores, esto nos permitió consolidar a través de distintos gobiernos de diferente signo una política coherente en defensa de nuestros intereses. Fue así que pudimos cobrar ese dinero, que en realidad debió ser superior a los 600 millones de pesos. De todas formas ésta es una cifra importante que percibimos hace no mucho tiempo.

Ayer, durante un programa televisivo, un ex gobernador de nuestra provincia dijo equivocadamente que él había percibido ese dinero, que lo había cuidado y que no lo había gastado, como lo hizo otro. No sé a quién se refirió ni me interesa. Lo cierto es que ese dinero se cobró hace poco tiempo y se depositó en nuestros bancos.

Muchos de esos fondos, que constituyen el ahorro de la provincia y que en consecuencia no podemos utilizar para gastos corrientes pues son el fruto de muchas generaciones que debe proyectarse hacia otras, están desapareciendo. Sólo nos quedan algunas acciones de Yacimientos Pe-

traheros Fiscales, pero ahora nos piden que las encucionemos para poder obtener los recursos que necesitamos.

No relataré la historia de la forma en que nuestros bancos han llegado a esta desastrosa situación. Sin embargo, muy rápidamente me referiré a ello para que aquellos diputados que tengan interés puedan conocer el tema.

Esta situación se inició hace muchos años a raíz de la privatización de la empresa Glol en el marco de una transformación muy promocionada. En esa ocasión se transfirió a los adquirentes una deuda de 60 millones de pesos, de la cual debían hacerse cargo. Esa deuda no se ha pagado. Allí comienza una de las historias de nuestros bancos.

Estos bancos otorgaron tarjetas de crédito por 94 millones de pesos, que son incobrables; bancos que prestaron a la provincia de La Rioja 25 millones de pesos, que tampoco hemos podido cobrar, mientras negábamos financiamiento a nuestros productores; bancos que han comprado la cartera de créditos del Banco de San Juan, que vaya a saber cuándo podremos recuperar; bancos que han perdido más de 270 millones de pesos, que hemos compensado con una mayor carga impositiva, que recae sobre las espaldas de todo el pueblo mendocino, que paga los impuestos provinciales más altos del país. Estamos preocupados. Esta crisis nos involucra a todos, no sólo a la Nación. Están sufriendo provincias como la nuestra, que se utilizaba como ejemplo, pues se decía que era la mejor administrada y la más rica, poderosa y fuerte. Sin embargo, quizá hoy sea la que se halla en peor situación en la República.

A pesar de que nos cueste y nos duela tener que votar una norma de estas características, tenemos la obligación de hacerlo porque se trata de la subsistencia misma de la Nación y de las provincias. Desde luego nos hubiese gustado que esto fuera distinto; así lo venimos reclamando con nuestras posiciones. Muchas veces desde la bancada oficialista se alzaba la voz porque nosotros llamábamos la atención sobre estos puntos. Se nos desconocía el derecho a participar y a discutir en las comisiones las normas que luego se nos obligaba a votar, porque se imponía el número sin permitir el debate. Aquí están los resultados. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar con los lamentos de lo sucedido? Sabemos que esta dura crisis que estamos afrontando va a causar un gran dolor a todos los argentinos, porque a partir de la sanción de este proyecto la Nación va a vivir un proceso muy fuerte de recesión. No se puede engañar más a

la gente. Debemos terminar con esta fábula. No hagamos de la política el arte de la comunicación y llamemos a las cosas por su nombre. Entonces digamos a los ciudadanos que de sancionarse esta iniciativa se va a producir una disminución del poder adquisitivo de los argentinos y un aumento en el desempleo.

No caben dudas de que vamos a tener muchos inconvenientes. Seguramente no va a faltar quien salga a refutarlos porque siempre hay algún optimista que dice que estamos equivocados. Digo esto porque hace un año que integro esta Honorable Cámara y siempre hubo alguien que dijo que estábamos equivocados, aunque los hechos nos demuestran que tenemos la razón. Espero que el dolor que pueda causar esta iniciativa sirva para que a partir de ahora el oficialismo, que tiene la responsabilidad de la conducción del Estado, haga una amplia convocatoria hacia todos los sectores políticos, sociales y económicos de la República, para que podamos sincerar las cifras y nuestra economía y entre todos podamos construir una alternativa que nos permita lograr un progreso sostenido y así volver a viva aquella Argentina que supo abrir las puertas al mundo a los hombres de buena voluntad que quisieran radicarse en nuestro suelo. Queremos volver a la Argentina que descubrimos en los libros de historia pero que no encontramos en la realidad de hoy; en definitiva, queremos cambiar la Argentina que hoy estamos sufriendo para beneficio de nuestros hijos.

Por todos estos motivos adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento. Lo hago invocando el sentimiento, el cariño y el amor que tengo por mi patria y, desde luego, por mi provincia, Mendoza, que hoy reclama con urgencia la ayuda de la Nación. Espero que este voto afirmativo sirva para lograr en pocas horas más lo que durante tantos años nos negaron.

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Harbía.— Señor presidente: los días de marzo nos encuentran discutiendo una vez más sobre desequilibrios fiscales y financieros. Los mismos problemas recurrentemente tratados por este Congreso; los mismos problemas a los que se les busca alguna solución por el mismo camino, es decir, un parche tras otro.

Hace cuatro años, cuando se discutió la ley de convertibilidad, describimos lo que consideramos el pecado original, cuyos efectos hoy estamos sufriendo y soportando. En aquel momento había desequilibrio fiscal, la economía estaba cerrada, las tasas de interés eran dispa-

ratadamente altas, el mercado se encontraba, en general, fuertemente regulado, subsistía el control de cambios, existían altos encajes y el índice de monetización de nuestra economía era bajísimo. Por ello entendimos que era inconveniente tomar una fotografía y tratar de definir el valor de nuestra moneda en aquellas condiciones.

Se nos dijo que debíamos mirar el futuro con optimismo porque los problemas no eran tan serios. En relación con el altísimo nivel de la cartera activa irregular de los bancos oficiales —en particular los provinciales— se nos dijo que tampoco había problemas.

Señalamos que el nivel del gasto público era insostenible y difícil de ser financiado, pero también nos dijeron que no había problemas. Pasaron cuatro años antes de que los problemas se manifestaran. No se hacían evidentes para aquellos que no querían verlos. Durante este período hubo capacidad de financiamiento pero los problemas subsistían. Estaban presentes hace cuatro años de la misma forma en que lo están ahora.

Con motivo de la discusión de los tres proyectos de presupuesto que siguieron al de 1991 nuestro bloque formuló las correspondientes advertencias y en su momento negó su voto a la aprobación de un gasto que continuaba creciendo, alcanzando niveles cada vez más difíciles de financiar. Sosteníamos que era necesario lograr una reducción sustantiva en los niveles del gasto.

El problema en la Argentina no radica tanto en el déficit sino en el nivel del gasto, y esto es algo que los funcionarios del Poder Ejecutivo continuán sin advertir. Se podrá decir que desde el punto de vista liberal la falta de preocupación por el déficit es una herejía. Me preocupa el déficit, pero mucho más me preocupa el nivel del gasto. Lo que hoy estamos sufriendo es la consecuencia de un nivel de gasto exagerado en comparación con el nivel de actividad económica. El sector privado no soporta este nivel de consumo del sector público.

Aquellos que apoyan una solución fácil sostienen que es preciso que se produzca una corrección en el valor de nuestra moneda. No quiero entrar en ese debate porque no creo que desde un sillón oficial se pueda fijar el valor de nuestra moneda. Sostengo lo que dije en 1991: el valor de nuestra moneda lo determinará el mercado; él es quien producirá el ajuste. Si el proceso desemboca en una devaluación,

ella nos indicará el nivel de ajuste que el mercado exige al sector público. En una economía multimonetaria como la Argentina la devaluación no es otra cosa que la indicación del nivel de ajuste del sector público en la economía, que exige el sector privado.

Vuelvo a reiterar que el actual nivel de gasto es impagable. Se buscará cubrir el desequilibrio con un aumento de la carga impositiva, pero el problema sigue siendo el mismo.

Si el desequilibrio no se cubre y el nivel de gasto no baja en términos de producto bruto, el problema del valor de la moneda subsiste. Se puede dar todo tipo de explicaciones al mundo entero, por el camino que se quiera; pero el mercado producirá el ajuste, tal como lo hizo en México, en Brasil e incluso en Inglaterra, España e Italia, porque no se trata de un problema exclusivo de los mercados emergentes, sino de cualquier país del mundo que tenga desequilibrios en su economía. La realidad siempre se va a imponer.

El segundo problema de la Argentina es el que el gobierno vincula con la liquidez del sistema financiero. Lo dije en 1991 al tratarse la carta orgánica del Banco Central y, más tarde, cuando el gobierno envió el proyecto de ley de reforma del régimen del cheque, creando uno de pago diferido como si fuera la solución al problema que sigue latente, y lo sostengo también ahora: el problema fundamental de los bancos oficiales es de solvencia y no de liquidez.

Cuando una cartera activa irregular alcanza la magnitud a la que se ha llegado en estos bancos, el problema no consiste en que pierdan depósitos sino en que lo que tienen para pagar esos depósitos no vale nada.

¿Qué ocurrió con la banca Baring en Inglaterra hace pocos días, como consecuencia del mismo problema? El mercado lo resolvió; en pocas horas el banco fue transferido al primer postor y por una libra. Nadie se metió a resolver esto y lo mismo debe ocurrir con estos bancos en la Argentina.

¿Qué es esto de caucionar las acciones de YPF o de conseguir préstamos para que el dinero se vaya por el desagüe a un barril sin fondo? La solución pasa por reconocer los quebrantos y desprenderse de los pasivos representados por estos bancos oficiales en quiebra. Incluso se podría pagar a alguien para que se haga cargo de esta situación y recupere la cartera activa que sea recuperable, sacan lones de encima esta manzana podrida que ha impedido que se produzca una reforma financiera en serio, capaz de re-

resolver el problema de la falta de crédito que tiene el sector productivo en la República Argentina.

Esto debe resolverse a tiempo. Nosotros hemos venido diciendo desde 1991 que el sector productivo de la Argentina no estaba en condiciones para el despegue. Nos enfrentamos a una economía mundial cada vez más integrada y competitiva, y tenemos dificultades para colocar nuestros productos por incapacidad para mejorar nuestra productividad, debido a que las tasas de interés que se pagan en cualquier proceso productivo son muy superiores a la tasa de retorno de cualquier proyecto de inversión.

Todo se ve agravado cuando como consecuencia de la desconfianza de los depositantes se produce una disminución de los depósitos. No nos habríamos equivocado y la disminución de los depósitos hizo más patente el problema que venía de antes. Y esto se puede comprobar observando los números del sistema financiero de este momento, de octubre del año pasado, de junio de 1993 y de marzo de 1991.

¿Lo que el gobierno nos ofrece es suficiente para llegar a mayo y para regenerar la confianza? Dios quiera que sea suficiente y que no tengamos más pérdidas de depósitos. Debemos evitar por todos los medios que continúe este drenaje de depósitos, pero aquí no se resuelve el problema de fondo basado en la falta de solvencia de una parte importante de los bancos del sistema financiero que impide que se produzca un reajuste necesario que permita de una vez por todas disminuir el *spread*, que es la diferencia entre la tasa que se cobra por los préstamos otorgados y la que se paga por los depósitos recibidos. Lamentablemente, si se mantiene ese nivel, el crédito va a seguir siendo escaso en la Argentina, y no debemos olvidar que constituye una herramienta indispensable para producir la transformación y el crecimiento en nuestro país.

Este conjunto de medidas que hoy tratamos podría calificarse como inorgánicas y desarticuladas. El gobierno las envió a consideración de esta Cámara en tres etapas y hoy estamos tratando de analizarlas en conjunto mediante un proyecto vinculado con un impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico. Esto es insuficiente para resolver las dos cuestiones a las que me he referido: el nivel de gastos y la solvencia del sistema financiero.

Nuestro bloque está dispuesto a dar su apoyo a aquellas medidas que tiendan a restablecer la confianza y a superar la transición hasta que se apliquen en forma global y simultánea una

serie de normas que pongan las cosas en su lugar, aunque el gobierno por el momento no las ha anunciado ni se ha comprometido a presentarlas. Pero dentro de este conjunto de medidas el proyecto en consideración, a mi entender, es el más adecuado para conseguir los objetivos esperados.

Se ha dicho que la generalización del impuesto a los bienes que no estaban incorporados podrá generar 350 mil millones de pesos adicionales. El destino de este impuesto se orienta a financiar el gasto del sistema previsional. Pero 350 millones de pesos más por año, frente a tres millones y pico de jubilados, significan sólo diez pesos más por mes para cada pasivo.

Si el gobierno cree que ésta es la reforma necesaria para solucionar el problema previsional, el gobierno no ha entendido la magnitud del problema. Entre 1991 y 1995 el gasto previsional creció de algo más de seis mil millones de pesos a 22 mil millones de pesos. Si el gobierno supone que la ley de solidaridad previsional, sancionada días pasados por el Senado, es la panacea que resuelve todos los problemas, está equivocado.

Con la misma seriedad con que marcamos los errores del gobierno en cada una de las iniciativas que nos envió, pensamos que esta norma no alcanza a cubrir el uno por ciento de los problemas que afronta el sistema previsional de aquí en adelante. Creíamos y seguimos creyendo que es un mal impuesto. Cuando existían el impuesto a los capitales y el impuesto al patrimonio neto nuestro bloque propuso su eliminación, se opuso al impuesto a los activos y aplaudió al gobierno cuando lo eliminó. Y por los mismos fundamentos por los que el gobierno eliminó el impuesto a los activos para algunas actividades, creemos que resulta inconveniente esta extensión a los bienes no gravados.

Se habló de la triple tributación en la actividad agraria y compartimos la queja; también hemos señalado como crítica la injusticia que significa la imposibilidad de computar como pago a cuenta de este impuesto a otros gravámenes de nivel provincial o municipal que recaen sobre los mismos bienes.

Hemos hablado de la injusticia que significa mantener el impuesto a los activos para algunas actividades y la generalización de este impuesto a los bienes no incorporados al proceso económico. Este problema puede ser resuelto si se traslada la entrada en vigencia del impuesto al año 1996.

¿Cuál es la ventaja de estar discutiendo este impuesto en medio de la presente crisis, sobre todo de confianza donde se ha puesto en evi-

dencia el problema del nivel del gasto y de la solvencia del sistema financiero? ¿Para qué discutir el tema de este impuesto que sólo va a generar un incremento de cien pesos por jubilado y por año y que recién será recaudado, en el mejor de los casos, el año próximo?

Los demás impuestos que no estaban contemplados en la ley, que subieron como pasajeros a una norma que comenzó siendo un pequeño vehículo y se convirtió en un ómnibus —al decir de un señor diputado que terminó su mandato—, como las modificaciones al impuesto a las ganancias y al IVA, tienen ventajas sobre cualquiera otra de las reformas que se propusieron. Pero a su vez tienen su desventaja pues son gravámenes a las transacciones como es el caso del IVA la que nos asegura una mejor recaudación si la actividad económica cae. Si nos aseguran que no se distorsione por la aplicación de este impuesto el proceso de producción y transformación de bienes, pero no sabemos qué impacto tendrá en los niveles de demanda de la población.

Si nosotros pudiéramos anticipar que modificando tres puntos el precio de un producto, la demanda se mantendrá igual, no entiendo por qué los productores y proveedores de esos bienes no han aumentado los precios de esos productos para tratar de capturar ese ingreso marginal. Obviamente es una interpretación equivocada la que hace el gobierno. El mercado no tolera tres puntos más en el costo de determinados bienes o servicios. Lejos de ser pagado por el consumidor ese impuesto será trasladado al productor vía menores ventas o, lo que es lo mismo, menores ingresos. De manera que seguimos en el círculo vicioso de cargar con más peso al productor y no de aligerarlo, que es lo que la emergencia está exigiendo.

De cualquier modo insistimos en que esta reforma es más positiva que la que se proponía el jueves pasado, en el sentido de dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo nacional para que pudiera aumentar hasta en un 25 por ciento la alícuota de cualquier impuesto cuya recaudación estuviera bajo su gestión, con el objeto de mejorar los recursos totales en un 10 por ciento. Ante semejante iniciativa manifestamos nuestro no rotundo, pero frente a estas otras en forma selectiva expresaremos nuestro apoyo, en particular a aquellas que se inserten dentro de un programa más o menos completo que tienda a resolver los dos principales problemas apuntados: el del nivel del gasto, simultáneamente atendido con la mejora en la recaudación, y el de la solvencia del sis-

tema financiero. Si no fuera así estaríamos aprobando la generación de más recursos para que dentro de dos meses el señor ministro de Economía nos diga que fueron insuficientes y que le faltan otros 5 mil millones adicionales. Digo esto porque a fin del año pasado sostuvo que le alcanzaría con 1.400 millones de pesos y ahora nos dice que necesita más de 10 mil millones. Por eso pido al señor ministro que sea responsable, que estudie el problema a fondo, entienda la gravedad de la situación y que, tal como ya lo señaló el señor diputado Alsogaray, venga con un conjunto de medidas que este Congreso comprenda y pueda compartir con su voto.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Machado. — Señor presidente: estamos considerando el Orden del Día N° 1.223, sobre modificación de la Ley 23.966 de impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico, en el que figuran un dictamen de mayoría y otro de minoría.

Lamentablemente este debate ha sido invadido por diferentes temáticas: algunas de orden constitucional, como la interpretación sobre la mayoría con que se debe aprobar este proyecto, y otras a mi juicio extemporáneas, como la propuesta que estaba dispuesto a efectuar el oficialismo en el tratamiento en particular, en el sentido de incorporar tres nuevos artículos. Digo lamentablemente porque, como ya lo destacaron diversos legisladores, entre ellos el señor diputado Balter, este proyecto está en discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde febrero de 1993. Esto significa que la iniciativa había caducado y, en consecuencia, tuvo que ser reproducida y autorizada su entrada nuevamente.

La ley 23.966 considera riqueza personal no afectada al proceso económico a los inmuebles de más de determinado valor, los automóviles suntuarios, las embarcaciones, etcétera, y la tasa es el 1 por ciento. Es uno de los pocos tributos considerados progresivos dentro del sistema impositivo argentino. Lamentablemente la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional siempre estuvo orientada a no dar importancia a este gravamen. En el primer año sólo se recaudaron 112 millones de pesos. Parece raro que en un país en el que el 50 por ciento del producto bruto interno —300 mil millones de pesos— está concentrado en menos del 20 por ciento de la población haya tan pocos ricos. Y es realmente en este sentido de la progresividad del impuesto que durante más de dos años se vio trabado en la comisión, donde más allá de la voluntad del oficialismo de im-

pulsarlo —que en algún momento parecía expresa—, siempre existían motivos para posponer su tratamiento.

La paradoja ha querido que esta noche este impuesto avance en el Congreso simultáneamente con el incremento de la alícuota del IVA en tres puntos. Por eso la voluntad política de hacer más progresivo al sistema impositivo argentino resulta poco creíble si a la par de bajar el gravamen del impuesto a los bienes personales en un 50 por ciento —es decir, del 1 al 0,5 por ciento— en un artículo adicional se pretende incrementar el IVA en tres puntos. ¿De qué progresividad hablamos si pretendemos fijar un impuesto mediante el que se piensa recaudar en el mejor de los casos 500 millones de pesos más y en esa misma ley se pretende incorporar un artículo por el que se recaudarían más de 3 mil millones de pesos en impuestos indirectos? Fundamentalmente en razón de que se propone incorporar este artículo con destinos específicos, es que estamos hablando —y creo que con el consentimiento de todos los bloques— de un impuesto contenido en un proyecto cuya aprobación necesita la mayoría especial a que se refiere el artículo 75 de la Constitución Nacional.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Machado. — En su momento nosotros habíamos acompañado en general en la comisión la idea de reformar el impuesto a los bienes personales. Tenemos una propuesta que consideramos superadora que es el texto propuesto por el señor diputado Santín en el cual se pretende sustituir el criterio de bienes personales por el de patrimonio neto.

Debería aclararse si de este impuesto a los bienes personales se van a deducir o no los pasivos. En este sentido, existen dos informes. Uno de ellos es el del diputado Lamberto que dice que cuando nos referimos a la titularidad de los bienes personales estamos hablando de activos menos pasivos y que propondrá un artículo en este sentido. Sin embargo, otro miembro de la mayoría, el señor diputado Abilgaggle, acaba de manifestar que se restablecerá el impuesto a los activos. El bloque oficialista debería aclarar si se podrán deducir los pasivos del cómputo general, con lo cual esta propuesta se estaría asimilando a la del diputado Santín en el sentido de que los bienes personales se van a calcular restando el pasivo al activo. Esto tendría una gran incidencia porque se trata de un impuesto que grava a un

sector altamente endeudado de la economía argentina como es el agropecuario. Entonces, debería aclarar esto o si por el contrario va a primar el criterio anticipado por el señor diputado Abilgaggle en el sentido de que a través de esta discusión acerca del impuesto a los bienes personales se estaría restableciendo el impuesto a los activos que debiera caducar en junio de este año.

La elección entre estas dos posturas expresadas por el bloque oficialista es imprescindible para poder continuar la discusión de buena fe. No es lo mismo hacer el cálculo del impuesto a los bienes personales mediante la deducción de los activos menos los pasivos que sólo mediante el cómputo de los activos.

Las dos posturas del bloque oficialista, no haber podido considerar el dictamen de minoría contenido en el Orden del Día N° 1.223, la eventual incorporación de tres artículos que no figuran en el dictamen ni han sido disutados en comisión, y la inseguridad de no saber qué piensa el bloque oficialista en cuanto a las mayorías requeridas, condicionan fuertemente el camino que se pretende recorrer para mejorar el sistema impositivo argentino incorporándole mayor progresividad.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical anticipo más allá de la interpretación constitucional el voto negativo a la propuesta de la mayoría, y si ésta es derrotada, nuestra proposición respecto del dictamen de minoría a que he hecho referencia.

Lamentamos realmente que la consideración de uno de los primeros impuestos que quiere llevar mayor progresividad al sistema impositivo argentino se diera en el marco de la voracidad fiscal que impone la crisis.

Esta crisis debería haber sido prevista. Al discutir el presupuesto de 1995 decíamos que, en el mejor de los casos, la autorización de gastos era superior en 5 mil millones de dólares al nivel de los recursos. Hoy se pretende descargar el peso de esta crisis, pero no se lo hace en forma pareja. Este impuesto sobre los bienes personales importará —conforme con las expresiones del propio miembro informante de mayoría— una recaudación adicional de 500 millones de dólares.

Asimismo se incorpora un artículo que aumenta en 3 puntos la alícuota del impuesto al valor agregado. Ello permitirá recaudar más de 3 mil millones de dólares. Se trata de un "impuestazo" que recae nuevamente sobre los consumidores. Reiteramos nuestra propuesta de que vuelva a esta Cámara el presupuesto nacional, a fin de precipitar el recorte de gastos antes que

la consideración de nuevos impuestos. Debemos conocer realmente cuáles son las condiciones en función de las cuales se solicita la aprobación de este incremento de la tasa del IVA, que se ha presentado como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos dudas de que hay otras condiciones que no han sido expresadas. Seguramente se habrán comprometido más privatizaciones como otra forma de financiamiento. Solicitamos que ellas sean anunciadas. Quizás esté contemplada la privatización del propio Banco de la Nación Argentina, de la banca provincial, de las represas y de las centrales atómicas.

Hemos expresado desde el bloque de la Unión Cívica Radical que antes de seguir avanzando en la generación de un "impuestazo" sería importante conocer cuáles son los recursos con que vamos a contar. Por otro lado, el presupuesto debería ajustarse por el lado de los gastos para mostrar un superávit. Es evidente que el superávit que se quiere alcanzar por la vía de nuevos gravámenes esconde la voluntad de no cumplir con los decretos de contención del gasto. Esa es la única razón por la cual el presupuesto no puede volver a la Cámara de Diputados.

El nuevo impuesto en consideración tuvo un origen positivo en el sentido de que avanzaba sobre bienes no gravados, como los títulos públicos. Se trata de activos que brindaron una tasa de ganancia excesiva en los últimos años, encontrándose libres de todo impuesto y con garantías totales del Estado. Este aspecto positivo se encuentra empañado por la incorporación de impuestos indirectos.

Tampoco queda claro si la voluntad del bloque oficialista es que realmente haya una deducción de los pasivos, como pareció reconocerle el miembro informante en su exposición. Por el contrario, la voluntad podría ser la expresada por el señor diputado Abihaggle, en el sentido de que ésta es una revisión del impuesto a los activos.

Por los motivos expuestos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical reiteramos el voto por la negativa al dictamen de mayoría. Solicitamos el apoyo al dictamen de minoría, que incorpora el concepto de patrimonio neto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: como llevamos varias horas de debate, me siento absolutamente representado por las palabras de los señores diputados Negri, Dumón y Machado. Creo que no es necesario repetir ninguno de los argumentos que ellos expresaron.

En consecuencia, voy a referirme a un tema de este proyecto de ley que me parece absolutamente necesario tener en cuenta. Para ello quisiera que me escuchara el señor diputado Lamberto, que es el miembro informante de la comisión. Lo mismo solicito al señor diputado Sueiro, quien es presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, porque tengo una duda con respecto a cómo se van a redistribuir específicamente los fondos que van a surgir de esta iniciativa, según el proyecto que estamos analizando esta tarde.

Sería conveniente que el señor diputado Lamberto estuviera presente, porque según tengo entendido es el próximo orador que va a hacer uso de la palabra, y si no nos puede escuchar tampoco podrá evacuar nuestras inquietudes. Por lo tanto solicito a la Presidencia que invite al miembro informante de la comisión a concurrir a este recinto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúe con su exposición, señor diputado.

Sr. Santín. — El tema es el siguiente: en la interpelación realizada la semana pasada el señor ministro de Economía dijo que el sistema previsional argentino se había equilibrado a partir de que este Congreso por voluntad del bloque oficialista había aprobado la ley de solidaridad previsional. Esto significaría que el sistema previsional argentino no tiene déficit; que está equilibrado en sus cuentas, que ha transferido todas sus deudas a dineros de enero de 1996 y por lo tanto hoy no tiene el equilibrio.

A partir de las afirmaciones del señor ministro nos hacemos una pregunta que parece casi elemental. Con la nueva ley de solidaridad previsional, el sistema se mueve por un mecanismo de caja. ¿Qué significa esto? Que va a pagar en función de sus recursos. Como hoy el sistema está equilibrado, lo presupuestado para 1995 alcanza para pagar lo que hoy estamos pagando a todos los jubilados y pensionados de la Argentina.

Esta ley tiene un destino específico en sus fondos: están dirigidos para y exclusivamente al sistema previsional. Según las cifras del secretario de Ingresos Públicos esto va a permitir que el sistema previsional tenga aproximadamente 740 millones de dólares más, a lo cual debemos restar 150 o 160 millones que era lo que estaba previsto que iba a recaudar este año el sistema: el 10 por ciento de esa cifra estaba destinado a las provincias y el 90 por ciento restante se lo iba a quedar el sistema previsional.

Por lo tanto si el bloque oficialista no ha sido engañado cuando discutimos la ley de solidari-

dad previsional, y no ha engañado a la sociedad con el planteo de ese sistema de caja por el que todo lo que se recauda dentro del sistema previsional tiene que ir al bolsillo de los jubilados, estamos teniendo una cifra extra de aproximadamente 500 millones de dólares para el presupuesto de 1995 destinada a nuestros jubilados y pensionados.

Esta noche no sólo debemos decir que el destino específico es el sistema previsional sino también cumplir con el artículo 4º de la ley de solidaridad previsional por el que graciosamente el oficialismo sostenía que todos los recursos que pudiera incorporar al sistema los iba a volcar para llegar a los 450 pesos. Con 500 millones por año no es posible llegar a los 450 pesos, pero sí a los 210. Por lo tanto, si esta Cámara trabaja con algún grado de seriedad y respetando las leyes que sancionó, deberá tener en cuenta esta situación. No me explico cómo va a hacer la ANSES a partir de la semana que viene para volcar estos nuevos recursos al sistema si no tiene previsto ningún aumento, tiene un sistema supravitalicio con jubilados que ganan 150 pesos, y nosotros no le damos la autorización para aumentar los mínimos jubilatorios. En definitiva estoy haciendo una propuesta que se basa en lo siguiente. Nosotros hemos planteado en la comisión, y hoy en el recinto, que en el momento que está viviendo la sociedad argentina es negativo incrementar sus impuestos; nos parece mucho más lógico intentar desarmar la fiesta que se da en el Poder Ejecutivo y achicar los gastos. Pero si el impuesto se establece, al mismo tiempo deberíamos decidir que a partir de ahora el haber jubilatorio mínimo será de 210 pesos, dado que tenemos los recursos pertinentes. De lo contrario no deberíamos aprobar este impuesto. Por eso pretendía que estuviera aquí el señor diputado Lamberto, pero como sé que el señor diputado Sueiro, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, seguramente va a acompañar esta propuesta —porque defendió con mucho énfasis el proyecto de ley de solidaridad previsional y el rol fundamental que juega el Congreso en pro de los jubilados—, creo que éste es el momento preciso para que todos los legisladores cumplan con lo que dijeron la semana pasada. Si el Congreso juega el rol más importante en la defensa de los jubilados, como hoy contamos con 500 millones de pesos más se los tenemos que dar a ellos, dado que este fondo no tiene otro destino que el sistema previsional.

Dejo así planteada mi inquietud para cuando se haga presente el señor miembro informante

de la comisión a fin de que nos pueda responder y solicito que, si es posible, se me alcance la versión taquigráfica correspondiente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: pido disculpas a la Cámara por no haber estado presente en el momento en el que se me requirió.

Hemos escuchado en el transcurso de este debate importantes discursos provenientes de las distintas bancadas —que sin duda uno podría suscribir— donde se advierte que cada cual tiene su cuota de verdad, una visión determinada que se puede considerar legítima y válida y podría ser apoyada en distintas circunstancias. Podrían fundarse las discusiones sobre el presupuesto, los datos con los cuales se aprobó y las previsiones que se utilizaron. Podríamos referirnos a hechos nuevos que han ocurrido aquí y en el mundo y comentar un sinnúmero de situaciones. Así podríamos estar horas y horas buscando la causa o el fundamento de cada cosa que aquí se ha dicho y quizás llegaríamos a la conclusión de que —como ocurre con las cosas que hacen los hombres— cada cual tenga un poco de razón y un poco de equivocación. Pero la labor del Parlamento siempre ha sido aunar voluntades, buscar el consenso, encontrar los mecanismos para dar al país una legislación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reynaldo Pierri.

Sr. Lamberto. — La democracia ha retornado hace diez años y yo diría que hemos tenido situaciones de emergencia la mayor parte del tiempo.

Las situaciones de emergencia a veces se provocan por cuestiones ajenas al país, aunque también por errores de los gobernantes o falta de apreciación de los hechos. Lo cierto es que a nosotros siempre nos tocó decidir en situaciones límites; ocurría antes y así sucede ahora. Dado que en el país existen problemas estructurales —en algunos aspectos han sido corregidos pero todavía faltan muchos por corregir—, recurrentemente surgen cuestiones que rebotan en el Congreso, y en consecuencia debemos decidir con respecto a las imposiciones que pagan los contribuyentes.

Durante los últimos cuatro años, como señalara el señor diputado Abihaggle, la política de nuestro gobierno estuvo centrada en el aumento de la producción y la creación de un modelo de expansión económica. La lógica del modelo consistió en aumentar la producción,

disminuir los impuestos que recaerán sobre ella y el trabajo, cobrar tributos a todo el mundo y generalizar su base. De esta política no hemos renegado, pues ha dado sus frutos. Aumentó la recaudación, se financió el presupuesto con recursos genuinos, se dejó de emitir como método para financiar el gasto público y hubo ingreso de capitales, expansión del crédito y crecimiento de la producción.

Esos datos, que son incontrastables, eran absolutamente válidos hace tres meses cuando debatimos el presupuesto porque existía flujo de capitales, crecimiento de la recaudación fiscal, presupuestos aprobados en término por el Parlamento y control de esos presupuestos. Sin duda, hoy contamos con la información adecuada para saber qué ocurre en cada momento. Esa información es publicada, está disponible y permite controlar mensualmente la evolución de las cuentas del Estado.

Ocurrió el detonante de la situación mexicana, lo cual no fue poca cosa. Hablamos de que el gobierno de Estados Unidos ha tenido que salir a asistir a México con 20 mil millones de dólares y que existe la posibilidad de que vuelva a hacerlo con una suma similar. Piénsese que estamos hablando de 40 mil millones de dólares, que debe ser aproximadamente la base monetaria que circula en la Argentina.

Esa situación no sólo ha repercutido en la Argentina, pues economías sólidas y fuertes del resto del mundo también se han visto perjudicadas por ese hecho. Lógicamente, esto es historia. Podrá argumentarse, con razón o sin ella, que quizás el gobierno debió haber previsto que en algún momento se iban a ir los capitales, que habría una crisis en el mundo o que no era posible preverlo. Lo cierto es que todos los días el gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones que tienen que ver con los problemas de la gente. Tengo que aclarar que estas decisiones que estamos proponiendo que sean adoptadas por el Parlamento no son electorales ni demagógicas ni de aquellas por las cuales nos vamos a alegrar. Son propuestas dolorosas, porque cobrarle a la gente un impuesto al consumo no es agradable. Tenemos que hacerlo porque de todos los males éste es el menor.

¿Por qué llegamos a esta situación? Lo que sucedió es que como consecuencia de la fuga de capitales que se produjo en los mercados del mundo y el aumento de las tasas de interés se hizo muy difícil conseguir crédito, lo que terminó afectando también la cadena de créditos internos, con fuga de los depósitos de los ciudadanos, que agotaron las cajas de

seguridad, creando un problema de insolvencia en el conjunto de los bancos argentinos.

Esta crisis financiera de gran magnitud tiene efecto en los hechos económicos del país, que se advierten cuando la persona que va al banco a cobrar un cheque se entera de que esa cuenta está cerrada porque el librador no pudo atender el pago, o cuando quien esperaba un crédito finalmente no lo obtiene y se ve imposibilitado de pagar los salarios. Además, cuando el crédito no existe, en la escala de prioridades de la gente primero están aquellas cosas que tienen que ver con sus necesidades inmediatas; obviamente en esta escala de valores no figura el pago de los impuestos. En la actualidad una gran parte de la recaudación ha caído como consecuencia de la falta de crédito, porque frente a la alternativa de pagar tasas del 70 por ciento o de no pagar al Estado no caben dudas de que la gente va a optar por esta última, incluso arriesgándose a la aplicación de las sanciones previstas por las leyes penales tributarias.

Por lo tanto, si en la Argentina no restituimos rápidamente el crédito no habrá recaudación, no habrá equilibrio fiscal ni forma de sostener ningún programa. Pero para aplicar cualquier medida que tienda a la restitución del crédito es necesario obtener previamente financiamiento, que hoy se ve encarecido en el mundo como consecuencia de la existencia de mercados de capitales erráticos. Por ello dicho financiamiento se obtiene sólo en los organismos de crédito internacionales que otorgan préstamos condicionales. Esto lo sabemos todos los que pasamos por el gobierno, y casi todos los sectores aquí representados han desempeñado funciones gubernamentales; algunos en gobiernos militares y otros en gobiernos democráticos, pero casi todos los partidos alguna vez han tenido vinculación con los organismos internacionales de crédito. Esto es tan simple como cuando alguien va a ver al gerente de un banco para obtener una línea de crédito que tiene determinadas características. Seguramente le van a pedir avales y garantías porque de lo contrario no le otorgan el préstamo.

Estas son las decisiones políticas que debemos adoptar. La alternativa no es la de un crédito mejor, el crédito tiene estas condiciones o no hay crédito. Esto es la razón por la que nuevamente nos encontramos votando un aumento en los impuestos y proponiendo reformas fiscales.

Recuerdo que me tocó actuar como legislador de los dos lados del mostrador en situaciones precedidas, es decir como oficialista y como opositor. Así, me puse a revisar qué había dicho cuando

do formaba parte de la oposición y por esas cosas del destino —no quiero decir que responda a una actitud de coherencia— observé que en ambas situaciones dije lo mismo, porque por encima de quien gobernaba existía un país que debía ser puesto en marcha. Hace muchos años, en oportunidad de tratarse un proyecto que propiciaba un aumento en los impuestos, como integrante del bloque opositor manifesté que no nos gustaba meterle la mano en el bolsillo a la gente. Por una paradoja del destino en aquella ocasión fui el único orador en ese debate en el que se trató el proyecto de ley presentado por el radicalismo por el que también se aumentaban los impuestos al valor agregado, a los combustibles y a los teléfonos, porque en aquella emergencia, al igual que ahora, no importaba el partido que gobernaba sino encontrar una solución para la Nación.

Asimismo desearé rescatar una frase que me gustaría ponerla en la letra grande de las cosas importantes que se dijeron en el Parlamento argentino.

Aquella noche el presidente de la bancada radical pidió que se cerrara la lista de oradores y por esa razón el único que quedó fui yo.

Recuerdo que el diputado Jaroslavsky dijo que era el turno de su administración y que les tocaba tomar decisiones duras, pero eran las que debía adoptar un gobierno en momentos límites.

La situación hoy es bastante parecida. Estamos convencidos de aquellas palabras y de la necesidad de adoptar estas medidas, que sabemos que no son simpáticas. A ningún cirujano del mundo le gusta amputar una pierna, pero a veces lo tiene que hacer para salvar una vida.

Estamos proponiendo medidas duras a pocos días de una elección general. No especulamos con resultados electorales. Cuando el país está en peligro la decisión política de los parlamentarios del partido de gobierno es la de salir a respaldar sus medidas. Bienvenidos sean los bloques que nos quieran acompañar. Agradecemos su colaboración en la formación del quórum y pedimos que nos acompañen en las decisiones que debemos adoptar.

El ministro de Economía señaló que pagaríamos todos los costos políticos. Esa es la responsabilidad del partido de gobierno: pagar costos políticos. Este es el precio que se paga por gobernar, por mantenerse en el poder y dar soluciones en cada caso. Para eso nos eligió la gente y a ella nos sometemos cada dos años. Es el juicio de las urnas que se expresa según se hagan las cosas bien o mal. *(Aplausos.)*

Sr. Galván. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Lierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: vamos a asumir las responsabilidades los unos y los otros.

El deber elemental que tiene el bloque de la mayoría es el de conformar el quórum. Esa es nuestra exigencia mínima para el tratamiento del proyecto. Con las reservas del caso, también estamos dispuestos a pagar algún precio político.

Queremos hablar con toda honradez a la Cámara y a la opinión pública, y por ello señalamos que, si se ha discutido la cuestión de las mayorías especiales para votar este proyecto de ley, para nosotros está fuera de toda discusión el quórum que demanda la decisión. Repito que esta postura va más allá de lo que cada uno piense acerca del significado de la mayoría especial que prescribe la Constitución Nacional.

Por lo tanto, con todo respeto y asumiendo los correspondientes costos políticos, ponemos de manifiesto que si el bloque de la mayoría conforma el quórum permaneceremos para discutir hasta las últimas consecuencias, pero si no lo logra no pueden pedarnos —disculpenme la expresión— que seamos más papistas que el Papa.

Esto es algo que expresamos con toda hidalguía y franqueza. La semana pasada lograron reunir 134 señores diputados, y si en esta sesión alcanzan el quórum reglamentario, llevaremos esta discusión hasta las últimas consecuencias haciendo las debidas salvedades constitucionales.

Para que nadie se engañe, con toda franqueza decimos que si el bloque de la mayoría no reúne los 130 legisladores requeridos, no vamos a facilitar la conformación del quórum y por ello solicito que la votación se practique en forma nominal.

Sr. Alvarez (C. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alvarez (C. A.). — Señor presidente: varios legisladores han sido suficientemente claros acerca de la interpretación de la letra de la Constitución en relación con la mayoría que se requiere para votar este proyecto de ley.

Estamos convencidos de que la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución representan elementos centrales para garantizar la estabilidad económica y posibilitar la previsibilidad en nuestro país.

Compartimos los conceptos expuestos por el señor diputado Negri cuando señaló con toda claridad que no podemos transformar la emergencia económica en emergencia constitucional.

Todos, independientemente de la posición que expresamos con respecto a la reforma constitucional, nos comprometimos luego de Santa

Fe a ser absolutamente esclavos de la Ley de Leyes, a ser absolutamente esclavos de la nueva Constitución de los argentinos. Hay que cumplir con ese compromiso.

No planteamos la cuestión vinculada con el quórum sino que vinimos a dar el debate y a manifestar que existían otros instrumentos para salir de la crisis económica como, por ejemplo, revisar el presupuesto, y que esta salida que propone el gobierno no es la única.

Con toda la responsabilidad que hemos demostrado y con la decisión de contribuir para encontrar propuestas, queremos decir que si el oficialismo no respeta la letra y el espíritu de la Constitución, que exige una mayoría especial para votar este proyecto de ley, nuestro bloque se va a retirar del recinto.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para una breve aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente, tal vez no comprendí en su totalidad la exposición del señor presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, pero sí la del señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, quien ha encontrado una excusa muy buena para no votar fondos para los jubilados. No obstante ello, la mayoría de los diputados del bloque Justicialista está sentada en sus bancas, aunque sabemos que por nosotros solos no tenemos la posibilidad de conformar el quórum. Pero vamos a votar sin condicionamientos, como tengo entendido lo va a hacer la mayoría de los bloques políticos que han estado trabajando aquí.

Señor presidente, usted puede invitarnos a realizar la votación y luego proclamará el resultado, que no puedo anticipar en este momento. A quienes crean que estamos trabajando en una emergencia les podemos decir que vamos a continuar luchando para superarla. Tienen la absoluta libertad de retirarse quienes crean lo contrario, porque el bloque Justicialista está dispuesto a practicar la votación.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: usted tiene que comunicar a la Cámara cómo va a programar el sistema electrónico de votación

con respecto a la mayoría exigida. ¡Es lógico que la Cámara sepa cuál es el criterio que va a utilizar la Presidencia!

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general en forma nominal.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 196 señores diputados presentes en el recinto, han votado 134 por la afirmativa y 47 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha registrado el voto de 12 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves. (*Aplausos.*)

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilagüe, Aceñola, Acham, Adame, Albamonte, Alcalá, Alsogaray, Alvarez, Alvarez Echagüe, Antelo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechica, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Balcer, Barberá, Barbetti, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bernádez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Breser, Brunelli, Bultrich, Cámara, Camarino, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Corduneo Blasco, Crostelli, D'Alessandro, Daud, Dellapiase, Díaz Martínez, Digón, Donni, Drisaldi, Duranona y Vedia, Durrieu, Falletti, Figueroa, Felloni, Funes, García Moreno, Gazia, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, González Cabañas, Granados, Green, Guzmán, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Jurre, Juncosa, Kaehler, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lambert, Larraburu, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Michitte, Mig'iozzi, Miralles de Romero, Müller, Munia-gurria, Muriel, Nacul, Natalo, Niño, Parada, Pellín, Pepe, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (José), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Saudo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Salino, Sampietro, Scelzi, Sebastiani, Smith, Soría, Sucaria, Suero, Teneo, Togni de Vely, Toma, Toto, Troyano, Valcarcel, Varela, Varela Cid y Venesia.

—Votan por la negativa los señores diputados: Algaba, Amendáriz, Balestra, Becerra (C. A.), Bussi, Cabirón, Casca, Celallos, D'Ambrosio, D'Elía, Del Fabro, Dumón, Fabrissin, Fayad, Felgueras, Galván, Gauna, Golpe (N. L.), Ibarreche, Jaunarena, Kelly, Losada, Machado, Marcos, Mathov, Mercader, Negri, Nieva, Novan, Olivera, Orgaz, Orquín, Parola, Pascual, Peláez, Polo, Rodrigo, Rodríguez (Jesús), Roig, Santín, Sobrino, Terragno, Topa, Trettel Meyer, Usandizaga, Vicchi y Viglione.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Koth y Pinto.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: vamos a proponer dos modificaciones en este artículo. Proponemos reemplazar el apartado cuarto por el siguiente: "Sustitúyense el antepenúltimo y el penúltimo párrafos del inciso a) del artículo 22, por lo siguiente: En los casos de inmuebles rurales, el valor determinado de acuerdo con los apartados anteriores, se reducirá en el importe que resulte de aplicar un veinticinco por ciento (25 %) sobre el valor fiscal asignado a la tierra libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario provincial. Se entenderá que los inmuebles revisten el carácter de rurales, cuando así lo dispongan las leyes catastrales locales. No será considerado como mejora el riego público que beneficie a un determinado predio. El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible —vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquide el presente gravamen—, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio. Si se trata de inmuebles rurales, el importe aludido se reducirá conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

"De tratarse de inmuebles destinados a habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos que hubieren sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos."

Asimismo proponemos agregar como punto 9 del artículo 1º el siguiente texto: "Incorpórase como último párrafo del artículo 26 el siguiente: La reglamentación establecerá los mecanismos mediante los cuales se evitará la doble imposición en el país en los casos en que sociedades del exterior sean titulares de bienes comprendidos en este artículo siendo sus accionistas residentes en el país u otros supuestos de doble imposición que pudieran presentarse."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: nuevamente nos vemos sorprendidos por una modificación que no es de nuestro conocimiento y que no po-

demo evaluar porque ni siquiera tuvimos posibilidad de escuchar al señor diputado Lamberto cuando la expone, a causa del bullicio existente en el recinto.

Por eso, como lo vengo reclamando desde siempre, quiero decir que sería interesante que, antes de votar, los legisladores supiéramos sobre qué debemos expedirnos. En ese sentido, quien habla no está en condiciones de participar de la votación porque no ha alcanzado a escuchar la lectura de los agregados propuestos, y dudo de que el resto del cuerpo haya podido comprender ni tan siquiera el sentido de la modificación.

Por lo expuesto, formulo moción de orden de que se pase a un breve cuarto intermedio en las bancas con el objeto de que quienes tengamos interés podamos leer los agregados que se proponen.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: sugiero que por Secretaría se dé lectura nuevamente de los agregados propuestos, pero antes quisiera aclarar cuál es el sentido de esta proposición.

En el marco del impuesto sobre los bienes personales quedaba una duda sobre la valuación de los inmuebles rurales. Dentro del impuesto a los activos y al patrimonio neto la tradición era que el inmueble rural tuviera una quita en la valuación por su naturaleza especial. Por eso se toma la quita del 25 por ciento del impuesto a los activos, para los inmuebles rurales.

La otra reforma propuesta tiene que ver con lo siguiente. Para aquellos lugares donde no hay tratado de corresponsabilidad, con respecto al anonimato de las acciones de contribuyentes que pueden tener bienes en el exterior pero que declaran en la Argentina, estamos ante la alternativa de una doble imposición, y esto intenta capturar el impuesto de quien no lo paga, no del que lo abona. Queremos evitar cometer una injusticia contra aquellos contribuyentes que declaran sus bienes y son gravados. Como existe una dificultad para instrumentar esto, el artículo delega en la reglamentación concretar la intención del legislador, que es evitar la doble imposición.

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura de los agregados propuestos por el señor diputado por Santa Fe.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — La primera modificación es reemplazar el apartado 4 del artículo 1º por el siguiente: "Sustitúyense el antepenúltimo y penúltimo párrafos del inciso a) del artículo 22, por lo siguiente: En los ca-

pos de inmuebles rurales, el valor determinado de acuerdo con los apartados anteriores, se reducirá en el importe que resulte de aplicar un veinticinco por ciento (25 %) sobre el valor fiscal asignado a la tierra libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario provincial. Se entenderá que los inmuebles revisten el carácter de rurales, cuando así lo dispongan las leyes catastrales locales. No será considerado como mejora el riego público que beneficie a un determinado predio. El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible —vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquide el presente gravamen—, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio. Si se trata de inmuebles rurales el importe aludido se reducirá conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

"De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos que hubieren sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos."

La otra modificación es agregar como punto 9 el siguiente: "Incorpórase como último párrafo del artículo 26 el siguiente: La reglamentación establecerá los mecanismos mediante los cuales se evitara la doble imposición en el país en los casos en que sociedades del exterior sean titulares de bienes comprendidos en este artículo siendo sus accionistas residentes en el país u otros supuestos de doble imposición que pudieran presentarse".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: la modificación que se ha informado es muy importante. La deducción que se pretende incluir resulta de gran relevancia para el caso de los inmuebles rurales en la provincia de Mendoza. Tal vez en la pampa húmeda el valor del inmueble sea importante por el valor de la tierra en sí, y en este caso la deducción del 25 por ciento sería razonable. Pero ocurre que en muchos de los inmuebles rurales de la provincia de Mendoza el valor de la tierra no tiene importancia sino que éste está

dado por las mejoras. Esta ha sido una vieja discusión que ha existido en nuestra provincia en materia tributaria con el entonces llamado impuesto a los capitales, del cual es prácticamente una recreación el que hoy estamos analizando. Los pozos, las perforaciones de agua —que son escasas en Mendoza— son los que en muchos casos constituyen el valor más importante del inmueble. Ya conocemos las disposiciones de la Dirección General Impositiva cuando categoriza estas mejoras como inmueble por accesión, pero no permite la deducción de este valor.

He pedido que se leyera nuevamente esta modificación a los efectos de que esto quede aclarado y que en el caso de Mendoza se contemple una deducción especial que existía en el impuesto a los capitales, que era del 50 por ciento para el valor del inmueble cuyas mejoras constituían inmueble por accesión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: aquí existe una contradicción que tiene que ver con la deducción que se puede hacer a la casa-habitación en cuanto al valor del crédito adeudado.

El sector agropecuario, mediante un plan que el propio gobierno dispuso a través del Banco de la Nación Argentina, posee cédulas hipotecarias que representan importantes créditos certificados. Ya que se trata de hacer la deducción de la casa-habitación, propongo en honor a la coherencia que se deduzcan también del valor del inmueble los créditos que estén representados por cédulas hipotecarias otorgadas por el Banco de la Nación Argentina a los productores agropecuarios.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sr. Lambert. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?

Sra. Troyano. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lambert. — Señor presidente: lo que propone el señor diputado Dumón es innecesario porque ya figura en el proyecto. Cuando se dice que se grava la participación en el capital de las empresas, debe tenerse en cuenta que el capital de las empresas es el activo menos el pasivo. Las cédulas hipotecarias constituyen un pasivo para la explotación rural, por lo que no hace falta incluirlas, porque los pasivos se deducen.

Ello no ocurre en el caso de los bienes personales no productivos, donde sí incorporamos el crédito sobre la vivienda, ya que esto no estaba contemplado en la redacción actual. Cuandó se habla de capital debe interpretarse activo menos pasivo. Se deducen las deudas.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde el uso de la palabra a la señora diputada por Salta.

Sr. Dumón. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?

Sra. Troyano. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: como lo que acaba de expresar el señor diputado Lambertó se acerca felizmente al mecanismo del patrimonio neto, insisto en que los funcionarios del Poder Ejecutivo —sobre todo los integrantes de la DGI, que dictarán las correspondientes circulares— tengan presente la inteligencia con que se votó este artículo en el sentido de deducir estas deudas.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano. — Señor presidente: como se trata de una iniciativa muy importante, solicito que por Secretaría se lea el texto de cada artículo que se va a votar en particular.

Sr. Presidente (Pierri). — Cada diputado tiene en su banca el texto originario del dictamen, señora diputada.

Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Koth. — Señor presidente: deseo dejar aclarado que en la votación en general lo hice por la negativa. Como en el listado que me han acercado figuro como un legislador que se abstuvo, quería corregir la situación.

Sr. Presidente (Pierri). — Se tendrá en cuenta su indicación, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: solicito al miembro informante que la interpretación que realizó con respecto al tema del capital sea incorporada al texto del proyecto, a fin de que no haya lugar a equivocaciones con respecto a que se trata del activo menos el pasivo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lambertó. — Señor presidente: no hay ningún problema en agregar al lado de la palabra "capital", entre paréntesis, la expresión "activo menos pasivo". Así figura en los libros de con-

tabilidad de primer año de la escuela secundaria.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: quisiera saber si el diputado Lambertó también considera pertinente incluir una aclaración con respecto a los inmuebles por accesión, ya que después se presentará la misma discusión que con el concepto de capital. Como ya lo ha anticipado, la Dirección General Impositiva no acepta estos criterios.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lambertó. — Señor presidente: la comisión no acepta esa modificación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbía. — La aclaración que hizo el señor diputado Lambertó a mi juicio confunde más las cosas, porque en las sociedades de capital la cuenta patrimonial se compone de capital, reservas y resultados. De manera que activo menos pasivo da patrimonio y no capital.

Por lo tanto, me parece que la norma debió hablar de valor patrimonial neto o patrimonio neto y no de capital, pues sólo se consideran como sociedades de capital las que emiten acciones para su suscripción. Si éste es el criterio, estoy totalmente de acuerdo con ello. De lo contrario, es lo mismo que decir valor patrimonial neto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lambertó. — Respecto a lo expresado por el señor diputado Ibarbía debo decir que en realidad en el único lugar donde iría esta aclaración es donde dice: "participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades", ya que cuando se alude a las sociedades de capital se dice "acciones".

Es decir que cuando hablamos de participación en el capital nos referimos a la parte que tiene cada socio en concepto de capital, que es activo menos pasivo. Activo menos pasivo incluye bienes valorizados menos las deudas, y ahí están contenidas las reservas, participaciones adicionales y el saldo acreedor de la cuenta capital.

Creo que sería conveniente agregar entre paréntesis en el inciso i) —donde dice "participaciones de capital"— "activo menos pasivo", para que no quede ninguna duda de lo que se trata.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Neder. — Señor presidente: simplemente deseo aclarar que he votado negativamente —co-

mo correspondía— y no ha quedado registrado correctamente mi voto. Dejo constancia de ello.

Sr. Presidente (Pierri). — Se ha tomado debida nota, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Voy a hacer una aclaración de carácter global para evitar otras particularidades que podrían prolongar esta discusión.

El tema es el siguiente: al momento de la votación aparecieron en el tablero 47 votos negativos; esto no coincide con la totalidad de los diputados radicales que estaban en el recinto. En ese momento, como es público y notorio, los diputados del bloque radical estaban parados al lado de sus bancas para constatar el quórum. Cuando la Presidencia verifica el quórum y somete a votación, algunos legisladores no tienen tiempo suficiente para volver a su banca y expresar su voto negativo. Esto es lo que sucedió.

—Varios señores diputados habían a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: para evitar más confusiones me voy a permitir leer nuevamente el agregado del punto 9, que dice: "Incorpórase como último párrafo del artículo 26 el siguiente: 'La reglamentación establecerá los mecanismos mediante los cuales se evitará la doble imposición en el país en los casos en que sociedades del exterior sean titulares de bienes comprendidos en este artículo siendo sus accionistas residentes en el país u otros supuestos de doble imposición que pudieran presentarse'".

Sr. Galván. — Solicito que la votación de todos los artículos se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado por La Rioja resulta suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Abihaggle. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Abihaggle. — Señor presidente: siguiendo con el tema planteado por el señor diputado Balter en el sentido de que falta encontrar una redacción que se adecue a la situación distinta que presenta el valor de la tierra de zonas desérticas respecto de las de la pampa húmeda

—o sea que no es exclusivamente para la provincia de Mendoza sino para cualquier región del país que también tenga perforaciones— proponemos el siguiente texto: "En el caso de inmuebles rurales, el valor determinado de acuerdo con los apartados anteriores, se reducirá en el importe que resulte de aplicar un veinticinco por ciento (25 %) sobre el valor fiscal asignado a la tierra libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario provincial". Proponemos que a continuación se establezca: "Al valor del inmueble, en el caso de zonas áridas con perforaciones de agua bajo riego, se descontará el valor de estas perforaciones".

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Mendoza?

Sr. Lamberto. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente el artículo 1º con las modificaciones propuestas por los señores diputados y aceptadas por la comisión.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 205 señores diputados presentes en el recinto, han votado 136 señores diputados por la afirmativa y 63 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha registrado el voto de un señor diputado por no haber hecho uso de su llave. (Aplausos.)

—Votan por la afirmativa los señores diputados Abasto, Abihaggle, Aceñolaza, Achém, Albamonte, Alcalá, Alsogaray, Alvarez (C.R.), Alvarez Echagüe, Antelo, Aranda, Argüello, Arias, Arcechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Balter, Barberá, Barboiti, Barriounevo, Baum, Becerra (N.C.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Braechi, Branda, Breser, Brunel, Bullrich, Cámara, Camaño, Casari de Alarcía, Castillo (J.L.), Castro, Corcueto Elasco, Crostelli, D'Alessandro, Daud, Dallepiane, Díaz Martínez, Digón, Doimi, Drisaldi, Durana y Vedia, Durrien, Falletti, Figueroa, Folloni, Funes, García Moreno, Gazia, Giménez (D.A.), Giménez (R.F.), Gioia, Golpe (C.H.), Gómez Centurión, González, González Cabañas, Granados, Green, Guzmán, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Humada, Iturre, Juncosa, Kachler, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lamberto, Laraburu, Leguizamón, Llopis, López (J.A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E), Martínez (S.V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C.R.), Menem, Michelli, Michitte, Miglizzo, Miralles de Romero, Müller, Muriel, Nacul, Natale, Nño, Parada, Pellin, Pope, Pé-

rez, Perrini, Pesce, Pichetto, R., Rodríguez (José), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Salino, Sampietro, Scelzi, Sebastiani, Smith, Soria, Sucaria, Sueiro, Teney, Togni de Vely, Toma, Toto, Troyano, Valcarcel, Varela, Varela Cid, Venesia y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Adaime, Algaba, Balestra, Becerra (C. A.), Berhongaray, Bosomi, Bussi, Cabirón, Carca, Ceballos, Class, D'Ambrosio, D'Elia, Del Fabro, Dumón, Fabrisin, Fayad, Felgueras, Galván, Gama, Hernández, Harbía, Ibarreche, Jaumarena, Kelly, Koth, Leconte, Losada, Machado, Mathov, Meneghini, Mercader, Moreau, Nader, Negri, Nieva, Novau, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Peláez, Pernasetti, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Roig, Santín, Sarquíz, Solano, Spinoza, Storani, Teodosio, Terragno, Topa, Trettel Meyer, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Viechi y Vigliane.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Alvarez García, Armendáriz, Golpe (N. L.) y Muniagurria.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar en forma nominal.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 205 señores diputados presentes en el recinto han votado 133 señores diputados por la afirmativa y 66 por la negativa, registrándose además una abstención. No se ha registrado el voto de un señor diputado por no haber hecho uso de su llave.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abihaggle, Aceñolaza, Achem, Albamonte, Alcá, Algaba, Alsongray, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Antelo, Aranda, Argüello, Arias, Arcechea, Ayala, Balistrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Baker, Barboza, Barbotti, Barriomeyo, Baim, Becerra (C. E.), Beazi, Benáidez, Bianchi, Silvestre, Boda, Bracchi, Branda, Bresser, Braucelli, Bull, Cámara, Camacho, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Castro, Corchuelo Blasco, Crostini, D'Alessandro, Daud, Dellepiane, Díaz Martínez, Digón, Dooni, Driscall, Durafona y Velia, Derricu, Fallati, Figueroa, Follini, Funes, García Moreno, Gaziz, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Giza, Golpe (C. H.), Gómez Corturión, González, González Cabanias, Grandos, Green, Guzmán, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Humada, Harbía, Iturre, Juncosa, Kuehler, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lamberto, La-

rraburu, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Michitte, Migliozi, Miralles de Romero, Müller, Muriel, Nacul, Natale, Niño, Parada, Pellin, Pepe, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, R., Rodríguez (José), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Salino, Scelzi, Sebastiani, Smith, Soria, Sucaria, Sueiro, Teney, Togni de Vely, Toma, Toto, Valcarcel, Varela, Varela Cid, Venesia y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Adaime, Alvarez García, Armendáriz, Balestra, Becerra (C. A.), Berhongaray, Bosomi, Bussi, Cabirón, Carca, Ceballos, Class, D'Ambrosio, D'Elia, Del Fabro, Dumón, Fabrisin, Fayad, Felgueras, Galván, Gama, Golpe (N. L.), Hernández, Ibarreche, Jaumarena, Kelly, Koth, Leconte, Losada, Machado, Marcos, Mathov, Meneghini, Mercader, Moreau, Nader, Nieva, Novau, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Peláez, Pernasetti, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Roig, Sampietro, Santín, Sarquíz, Sobrino, Spinoza, Storani, Teodosio, Terragno, Topa, Trettel Meyer, Troyano, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Viechi y Vigliane.

—Se abstiene de votar el señor diputado: Muniagurria.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: propongo a la Honorable Cámara la inclusión de tres artículos cuyas copias hemos hecho distribuir entre los señores diputados.

El primero —que llevará el número 3— se refiere a la creación de un fondo especial que se constituiría con un aumento de la alícuota del impuesto al valor agregado, que regiría por un tiempo limitado, que la misma norma establece en un año. Ese fondo sería administrado por el gobierno nacional y tendría un destino específico: el sostenimiento del equilibrio fiscal y el fortalecimiento del crédito público. En tal sentido proponemos la siguiente redacción: "Créase un fondo especial para el equilibrio fiscal, que será constituido por un adicional con asignación específica de tres puntos sobre la alícuota del impuesto al valor agregado, que regirá por el término de un año. Dicho fondo será administrado por el Tesoro nacional, se destinará al sostenimiento del equilibrio fiscal y el fortalecimiento del crédito público".

La propuesta que acabo de formular ha sido argumentada extensamente, durante seis horas

de debate, por el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, así como también por el señor diputado Lamberto en su exposición. Se trata de lograr el equilibrio de las cuentas públicas, avanzar en las negociaciones con los organismos financieros internacionales —Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial—, lograr de ellos los créditos que el país necesita, mantener la estabilidad —que es un valor defendido por la totalidad de los señores diputados que integramos esta Cámara—, estabilizar el sistema financiero público y las bancas de provincia, y de esta manera mantener los valores esenciales que el pueblo argentino acepta y sostiene.

El nuevo artículo 4º apunta hacia las provincias argentinas. El gobierno nacional compromete un aporte no reintegrable de 1.200 millones de pesos. Ese aporte también tiene una dirección, un objetivo concreto: contribuir al financiamiento de las reformas de los estados provinciales y la banca provincial. También establecemos que en un plazo no superior a 18 meses ese fondo debe estar totalmente constituido. El citado fondo se conformará con recursos que el Estado nacional piensa tomar de los organismos financieros internacionales y con recursos propios del gobierno nacional.

Por otro lado, una vez cumplidos los objetivos para los cuales este fondo fue creado, pues la mayoría de las provincias argentinas tienen la necesidad imperiosa de reestructurar su Estado, mejorar sus finanzas y estabilizar sus bancos, estos recursos serán destinados a las provincias en función del índice de coparticipación federal de impuestos.

Por lo expuesto, propongo como artículo 4º el siguiente: "La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de pesos 1.200.000.000 en los próximos 18 meses para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales y de la banca provincial. Al cumplir sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción que les corresponde en el régimen de coparticipación federal".

El texto que propondré como artículo 5º establece una prórroga para las provincias argentinas que están trabajando en el cumplimiento de los acuerdos contemplados en el pacto fiscal, vinculados a disminuir impuestos, en algunos casos, y a estabilizar sus finanzas, en otros. Mediante este artículo, y a esos fines, otorgamos a las provincias un año más de plazo con respecto al que ha sido acordado y oportu-

namiento ratificado mediante una ley, para que puedan llevar adelante estas reformas.

El artículo 5º dice así: "Prorrógase hasta el 1º de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que estuviesen pendientes de implementación."

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en forma nominal el artículo 3º propuesto por el señor diputado por La Pampa.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 205 señores diputados presentes, han votado 123 por la afirmativa, 71 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha registrado el voto de dos señores diputados por no haber hecho uno de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilbagge, Aceñolaza, Acham, Ahumada, Alcalá, Alsogaray, Álvarez (C. R.), Álvarez Echagor, Aranda, Argüello, Arias, Arrechén, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Balter, Barberá, Barbotti, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Brandá, Breser, Brunelli, Bulbich, Cámara, Camaño, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Crostelli, D'Alessandro, Daud, Dellepiane, Díaz Martínez, Digón, Donni, Durazona y Vedia, Durrien, Fallot, Figueroa, F. Illón, Funes, García Moreno, Giza, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, González Cabañas, Granados, Green, Herrera, Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Iturre, Juncosa, Kaehler, Kannerath, Kessler, Lafalla, Laboz, Lamberto, Landaburi, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Carbau, Matzkin, Mendoza (C. B.), Meuem, Michelli, Michitte, Migliozi, Miralles de Romero, Müller, Muniagurria, Muriel, Nacul, Niño, Parada, Pellin, Pepe, Pérez, Perrini, Pescé, Pichetto, Ré, Rodríguez (José), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Saíundo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Salino, Seclzi, Sebastiani, Smith, Soria, Sucaria, Sueiro, Tenev, Togni de Vely, Toma, Valcarcel, Varela, Varela Cid, Venesla y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Adaine, Algaba, Armendáriz, Balestra, Becerra (C. A.), Berhongaray, Bonomi, Bussi, Cabirón, Carca, Ceballos, Closs, D'Ambrosio, D'Elia, Del Falso, Drisaldi, Dumón, Fabrisin,

Fayad, Felgueras, Gallo, Galván, Gama, Golpe (N. L.), Hardy, Hernandez, Ibarreche, Jannarena, Kelly, Koth, Leconte, Losada, Machado, Marcos, Mathov, Meneghini, Merceder, Moreau, Nader, Negri, Nieva, Neván, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Peláez, Pernaschi, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Roig, Sampietro, Santin, Sarquíz, Sobrino, Spinosa, Storani, Teodosin, Ternegna, Toma, Tota, Tittel Meyer, Troyano, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Vicchi y Viglione.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Alvarez García, Antelo, Gerardo Blasco, Guzmán, López Arias y Natale.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde votar nuevamente dado que el número de abstenciones que se ha registrado puede modificar el resultado para el caso de requerirse una mayoría calificada.

Se va a votar.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — **Solero** 207 señores diputados presentes. Han votado 129 por la afirmativa y 63 por la negativa, registrándose además 10 abstenciones. No se ha registrado el voto de dos señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Abatto, Abthagele, Acciulaza, Achon, Albanaute, Abala, Abogará, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Aranda, Argüello, Arias, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Balter, Barberá, Barilotti, Barionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Boscá, Silvestro, Borla, Buechi, Branda, Basser, Bullrich, Camaño, Campaño, Casari de Abreia, Castillo (J. L.), Corchuelo Blasco, Costelli, D'Alessandro, Dand, Dellepiane, Díaz Martínez, Dirón, Donni, Durandona y Vedia, Durán, Falletti, Fiorerá, Folloni, Funes, García Moreno, Gazia, Giménez (D. A.), González (B. F.), Giofi, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, González, Granelos, Geron, Guzmán, Herrera, Herrera Arias, Jimena, Ibarbia, Iturre, Juncosa, Kachler, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Larroio, Larroburu, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Madaña, Manfredini, Maqueda, Martínez E., Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menon, Michelli, Mieliozzi, Miralles de Romero, Müller, Muniagurria, Murial, Nacul, Niño, Parada, Pellio, Pepe, Pérez, Perrin, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Ruiz

Palacios, Saadi, Salino, Scelzi, Sebastiani, Smith, Soia, Sucúa, Sueiro, Teney, Topoi de Vely, Toma, Valareel, Varela, Varela Cid, Venesia, Zicarelli.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Adame, Amadoriz, Balestra, Becerra (C. A.), Berchongaray, Bouami, Busi, Cabirén, Carca, Challos, Closs, D'Ambrosio, D'Elia, Del Falso, Driscaldi, Dumón, Fabrisin, Fayad, Felgueras, Gallo, Galván, Gama, Golpe (N. L.), Hardy, Ibarreche, Jannarena, Kelly, Koth, Leconte, Marcos, Mathov, Merceder, Merceder, Moreau, Nader, Negri, Nieva, Neván, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Peláez, Pernaschi, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Rodríguez (Jesús), Roig, Sampietro, Santin, Sarquíz, Sobrino, Spinosa, Storani, Teodosin, Ternegna, Toma, Tota, Tittel Meyer, Troyano, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Vicchi y Viglione.

—Se abstienen de votar, los señores diputados: Albana, Alvarez García, Antelo, Arrechea, Bruchli, Hernández, Losada, Machado, Natale y Rojo.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Nuevamente se han registrado abstenciones que pueden modificar el resultado de la votación. Por ello la Presidencia considera que corresponde hacer una tercera votación.

Sr. Moreau. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: habiéndose efectuado dos votaciones en forma reiterada, queremos dejar constancia de que no se ha obtenido el número exigido por la Constitución Nacional para la sanción de este tipo de proyectos.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Moreau. — Simplemente quiero que quede asentada nuestra posición en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: nosotros ya tenemos una opinión formada sobre el tema de las mayorías especiales, la cual ya fue expuesta oportunamente a través de la intervención que le cupo al señor diputado Maqueda. Entendemos que no es necesario votar nuevamente porque en ambas votaciones los votos afirmativos fueron ampliamente mayoritarios a pesar de las abs-

tenciones que se registraron. Por lo tanto, según nuestra óptica, puede usted proclamar el resultado afirmativo de la votación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez (Jesús). — Señor presidente: considero que antes que nada la Honorable Cámara debe calmarse, detenerse y reflexionar acerca de lo que estamos debatiendo.

La primera cuestión que deseo señalar es que éste no se el debate ni la discusión de la semana pasada. El debate vinculado con este artículo no tiene absolutamente nada que ver con la discusión que tuvimos la semana anterior en términos de si se ensancha la base imponible y si se modifica o no la alícuota. Estamos ante un tema sustancialmente distinto: la constitución lisa y llana de un fondo con afectación específica. Para ello es absolutamente indubitable —tal cual lo establece la Constitución de los argentinos— que se requiere mayoría especial.

Es totalmente inimaginable que se pretenda negar este requisito. Es como decir que estamos ante la voluntad del bloque Justicialista de tapar el Sol con una mano.

Si el bloque oficialista y el gobierno no quieren que esta cuestión se zanje judicialmente y que los tribunales se llenen de demandas por inconstitucionalidad, usted, señor presidente, debe decir que se requieren los votos de la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

Sr. Balestrini (A. E.). — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balestrini (A. E.). — Señor presidente: he solicitado las planillas con el detalle de la primera de las votaciones realizadas del primer artículo propuesto por el presidente del bloque Justicialista, y el resultado que arroja es de 128 votos positivos. Sin embargo, en dicho listado los diputados Corchuco Blasco y López Arias figuran como si se hubieran abstenido y por ello solicito que se verifiquen sus votos a efectos de determinar el resultado definitivo de la votación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. López Arias. — Pido la palabra para formular una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente: en primer lugar, deseo aclarar que la interpretación de la bancada justicialista —compartida por otros sectores— es que la aprobación de este proyecto requiere mayoría simple.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. López Arias. — Quiero dejar sentado eso precedente.

Además, antes de que se proclamara el resultado de la votación hice conocer que mi llave no había funcionado.

Sr. Presidente (Pierri). — Hay seis abstenciones que pueden modificar el resultado de la votación.

Sr. López Arias. — En la primera votación se obtuvieron 128 votos afirmativos y con las abstenciones del diputado Corchuco Blasco y de quien habla, que en realidad son votos positivos, se llega a los 130 señores diputados cuyo voto fue afirmativo. De todas maneras, bastaba la mayoría simple para aprobar este artículo.

Sr. Corchuco Blasco. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuco Blasco. — Señor presidente: en su momento solicité la palabra para aclarar esta situación.

Pido a los amigos radicales que vengan a verificar el mal funcionamiento de mi llave. Tengo como testigo al señor diputado Soria.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — La solución es muy simple: basta con consultar a los señores diputados cuyo voto figura como abstención. Hay dos legisladores que ya lo ha aclarado.

Sr. Arrechea. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Arrechea. — Señor presidente: quiero señalar que por un error figuró entre quienes se abstuvieron de votar, pero en realidad mi voto fue por la afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: frente a la circunstancia que se ha producido ratificamos una vez más que para que la futura norma sea válida y constitucional hace falta el pronunciamiento favorable de 130 señores diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — 129, señor diputado. O sea, mayoría absoluta.

Sr. Galván. — De todas maneras, esta sola duda que ha provocado esta votación confirma la tesis de la Unión Cívica Radical: hacen falta 130 votos por la afirmativa. Entonces, cualesquiera sean las votaciones futuras formulamos reserva en el sentido de atacar de nulidad toda sanción que no cuente con 130 votos por la afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: la mayoría absoluta está constituida por 129 votos; 130 se requieren para conformar el quórum.

Tiene la palabra el señor diputado por La Plata.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: cada vez que dicen que hacen falta 130 votos o una mayoría calificada, nosotros vamos a insistir en nuestra posición. Podemos votar varias veces, porque la mayoría simple nos sobra. Sería bueno tener 130 votos afirmativos para dar tranquilidad a la Unión Cívica Radical, aunque eso no nos preocupa. La preocupación de ellos y no nuestra.

Para nosotros la votación ha sido válida. La ganamos y pedí en varias oportunidades que la Presidencia la proclamara como afirmativa, porque es nuestra interpretación. Sean 126, 128 o 129 votos, esa votación fue afirmativa y es legal. A quien quiera le asiste el derecho de solicitar su nulidad, pero aclaro que para nosotros ha sido válida.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado Matzkin: la Presidencia no dio por válida la votación porque se habían producido seis abstenciones. Aclarados los votos de los señores diputados López Arias y Corebuelo Blasco es suficiente para alcanzar el número de 130 y proclamar que la votación ha sido por la afirmativa. (Aplausos.) Pero debemos hacer bien las cosas porque estamos tratando un proyecto de ley importante que merece que todo esté claro.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: en primer lugar, queda absolutamente en claro que el artículo en cuestión referido al aumento en tres puntos de la alícuota del impuesto al valor agregado no guarda relación con el tema en debate sobre el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico.

En segundo término, dejo sentado que esta Cámara ya fijó criterio con respecto a la mayoría agravada que se necesita para sancionar

impuestos que tengan carácter coparticipable al considerar el Fondo de Emergencia Agropecuaria...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — ¡Estamos votando!

Sr. Ceballos. — ... que tuvo que ser tratado nuevamente en este recinto para que se cumpliera con el precepto constitucional de la mayoría agravada.

Sr. Matzkin. — ¡No es así!

Sr. Ceballos. — Además, el hecho de que la Presidencia hiciera votar en dos oportunidades, cuando el resultado de la primera votación fue de 126 votos por la afirmativa...

Sr. Presidente (Pierri). — 128, señor diputado.

Sr. Ceballos. — ... a 68, está fijando el criterio necesario para que esta norma sea constitucional.

Por último, si existe en el oficialismo la voluntad de contar con la mayoría absoluta que constitucionalmente requiere este proyecto para ser sancionado, solicito que se vuelva a votar.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Albamonte. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente, solicito que por Secretaría se lea el primer párrafo del artículo 181 del reglamento, ya que eso aclararía las cosas con respecto a las abstenciones.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia entiende que sería muy importante que se vuelva a votar el artículo 32, aunque eso no guste, pues aquí debe quedar en claro que esta ley cuenta con el apoyo necesario, como para que después no se diga que no se procedió correctamente. En ese sentido, la Presidencia solicita que los señores diputados hagan el esfuerzo y que se vote nuevamente el artículo 32, tal como lo solicita el bloque radical.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Albamonte. — Que se cumpla el reglamento, señor presidente. No pueden haber abstenciones sin permiso de la Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Pero las ha habido, señor diputado.

Sr. Albamonte. — Reitero, señor presidente, que no pueden haber abstenciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Por eso vamos a votar nuevamente, a pesar de que hay dos señores diputados que dejaron constancia del sentido positivo de su voto, que había sido erróneamente registrado.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente, aceptando su criterio propongo que todos aquellos señores diputados que quieran abstenerse de votar, previamente pidan permiso a la Cámara, de tal manera que si el cuerpo lo otorga, podrán abstenerse; si no, no lo podrán hacer.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — En primer lugar, se va a dar lectura por Secretaría del artículo 181 del reglamento, tal como lo solicitó el señor diputado Albamonte.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así: "Ningún diputado podrá dejar de votar sin permiso de la Cámara, ni protestar contra una resolución de ella; pero tendrá derecho a pedir la consignación de su voto en el acta y en el Diario de Sesiones".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Storani. — Señor presidente: usted convalidó la segunda votación, no la primera. Como usted señaló, la primera arrojó 128 votos a favor, pero después puso a votación nuevamente el artículo, por lo que vale la segunda votación y no la primera. En ese caso dijo que había 126 votos a favor, razón por la cual, aunque se rectificara el voto de las dos abstenciones, según el testimonio que avala la posición del señor diputado Corbuelo Blasco, no se modificaría el sentido de la votación.

Si el señor diputado Albamonte pide la lectura del artículo 181 del reglamento, yo solicito que se lea el 179 que otorga a los miembros de la Cámara el derecho a pedir la rectificación de la votación en caso de duda. Es decir, nos asiste el mismo derecho.

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado Storani olvida un pequeño detalle: en la segunda votación, si bien es cierto que hubo 126 votos a favor, hubo diez abstenciones.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente, solicito que ponga a consideración el artículo 4º, ya que el 3º fue votado. La Presidencia debe proclamar

la aprobación de este artículo para continuar con el trámite de la consideración en particular de la ley.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Si algún señor diputado tiene dudas, que solicite a la Cámara la interpretación sobre el procedimiento correcto.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: debemos atenemos específicamente a lo que prescribe el reglamento. Una vez que el señor presidente pidió que se expidieran los diputados que no pudieron votar por el sistema electrónico, dio por aprobado el artículo 3º. En consecuencia, de acuerdo con el reglamento interno del cuerpo, la única posibilidad de que esto se rectifique es por medio de una moción de reconsideración, y hasta el momento, el único que la ha formulado es el señor diputado Storani. Esa moción requiere una mayoría especial que la Presidencia deberá enunciar; si no se logra, corresponde que se pase a considerar el artículo 4º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: en primer lugar quiero recordar el artículo 200 del reglamento, que dice lo siguiente: "Todo diputado puede reclamar al presidente la observancia de este reglamento, si juzga que se contraviene a él".

En segundo término, la correcta interpretación del reglamento indica que lo que ha pedido el señor diputado Storani no es una reconsideración sino una rectificación, que se otorga en un supuesto específico: cuando existe una duda sobre el resultado. Y en este caso, como ya lo ha expresado el señor diputado Storani, hay una duda doble porque primero se dio un resultado con seis abstenciones y después otro con diez abstenciones. La oportunidad de formular el pedido de rectificación es inmediatamente después de producida la votación, y el señor diputado Storani efectuó en tiempo esa solicitud. Si en verdad se observan las prescripciones del reglamento, no se puede quitar al señor diputado Storani el derecho que éste le otorga. ¡Cúmplase el reglamento y sométase a votación el pedido de rectificación efectuado en virtud del artículo 179!

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: advierto que existen diferentes criterios sobre la interpretación del reglamento. Por lo tanto, me remito al texto del artículo 206, que dice así: "Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente".

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: alguna vez he manifestado en este recinto lo mismo que acaba de expresar el señor diputado Dumón en el sentido de que el artículo 179 del reglamento autoriza a cualquier diputado a pedir la rectificación de la votación.

Me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque tantas veces han dicho los diputados de la Unión Cívica Radical que esas disposiciones requieren de una mayoría especial, que esas tantas veces importan reconocer que no hay un solo criterio sobre la cuestión. Y, que yo sepa, cuando existen criterios diversos no se resuelven por la voluntad de la minoría sino por la de la mayoría.

Por lo tanto, dado lo expresado por el señor diputado Matzkin, me parece que no hay ningún inconveniente en acceder a la moción del señor diputado Storani —que hago mía— en el sentido de que se rectifique la votación. No veo qué inconveniente puede haber si el criterio de necesidad de mayorías se establece por la opinión de la mayoría en cualquier democracia del mundo.

Sr. Presidente (Pierri). — Hay una moción de rectificación solicitada por el señor diputado Storani, para cuya aprobación se requiere simple mayoría.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: ¡tiene que proclamar la votación! ¡La hemos ganado!

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia entiende que si la moción del señor diputado por Buenos Aires está apoyada por la simple mayoría de los señores diputados, corresponde poner nuevamente a votación el artículo 3º.

Sr. Matzkin. — ¡No, señor presidente! Usted debe limitarse a proclamar el resultado afirmativo de la votación. ¡Nosotros somos mayoría en esta Cámara!

Sr. Dumón. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: me parece que aquí hay tres circunstancias a tener en cuenta. En primer lugar, usted mismo dijo que había que votar nuevamente el artículo 3º. En segundo término, el artículo 179 del reglamento no habla de votar la rectificación sino de votar nuevamente el artículo para avertar las dudas. Por último, si incluso con abstenciones el oficialismo tiene número suficiente para estar incluso por encima de toda interpretación constitucional, ¿qué temor tienen de que se vote de nuevo?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Gauna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: parece mentira que frente a la situación que vive la Nación no intentemos encontrar un camino de claridad con calma, como pidió hace un momento el diputado Jesús Rodríguez. Los gritos no ayudan a la situación de la Nación ni al rol que debe cumplir el Congreso de la Nación.

Todos y cada uno de los órganos de autoridad del Estado deben ajustarse a la legalidad. Aquí se está diciendo que hay interpretaciones diversas sobre el tema constitucional. Por nuestra parte creemos que no es así, que no existe ninguna duda. Pero nada obsta a que hagamos el esfuerzo de una nueva votación para aclarar la situación y dar tranquilidad al país. Tratóndose de un proyecto que necesita el gobierno, deben respetarse los recaudos legales propios de un estado de derecho y ceñirse a las prescripciones de la Constitución Nacional.

Se ha pedido una rectificación. Accedamos a ella y terminemos con este problema. Entonces, solicito que con calma y sin gritos tratemos de llevar adelante esta cuestión, porque la Nación está comprometida en esta situación. Hagámoslo en aras de la Nación, sin ponernos nerviosos y sin gritarnos entre nosotros.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente, quiero efectuar un par de aclaraciones para poner orden en este tema. En primer lugar, he escuchado

do alguna referencia con respecto al número que constituye la mayoría absoluta; debo señalar que se trata de 129 diputados y no de 130.

De todas maneras, esto no tiene ninguna importancia porque hemos insistido en que para aprobar esta norma bastaba la mayoría simple, la que hemos obtenido con holgura. Además, es realmente imposible que haya algún tipo de dudas sobre las planillas que constan en la Cámara. Allí figuran exactamente quiénes votaron a favor y quiénes aparecieron como absteniéndose contra su voluntad, entre quienes me incluyo. Cuando estos últimos hacen expresión de su voto por la afirmativa, queda claro que contamos con más de 130 votos.

Entonces, con esa sola votación la Presidencia debió proclamar la aprobación del artículo. En el cómputo de los votos se debió tener en cuenta a quienes aparecimos como absteniendonos y luego expresamos nuestro voto por la afirmativa. Así, además de proclamar la votación por simple mayoría, dejó constancia de que hemos contado con más de 130 señores diputados, con lo que superamos con holgura la mayoría requerida para ganar la votación.

Si alguien tiene alguna duda, puede reclamar por la vía judicial correspondiente. Nuestra interpretación de la Constitución es fundada. Tenemos argumentos de sobra. Lo hemos dejado sentado en el recinto y no podemos permitir que en una situación de crisis como la que vive la Argentina se actúe con chicanas al observar una votación de tanta envergadura como la que estamos realizando en este caso. Solicito a la Presidencia que proclame la votación del artículo 3º. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moreau.— Señor presidente: cuando esta iniciativa se votó en general, la Presidencia proclamó la votación expresando que el proyecto quedaba aprobado con 134 votos por la afirmativa.

Ante esa manifestación del presidente de la Cámara, el bloque radical, por razones obvias, no hizo ninguna objeción, ya que 134 señores diputados superan holgadamente el número que —según nuestra interpretación— se requiere para la sanción de una iniciativa de esta naturaleza. Como bien decía el presidente de la Cámara, se necesitan, en realidad, 129 votos por la afirmativa. Como creemos que con 133 votos por la afirmativa está cumplido el requisito constitucional, el bloque no hizo ninguna manifestación, más allá de votar por la negativa, como consta en actas.

Cuando se produce la primera votación en particular del artículo 3º, se obtiene un resultado de 133 señores diputados por la afirmativa. El bloque radical entendió que no se cumplió con el requisito constitucional y manifestó su reclamo. El presidente de la Cámara, frente a esta circunstancia, más allá de que probablemente sea cierto que algún diputado del bloque Justicialista o de la coalición gobernante haya aparecido absteniéndose, vuelve a convocar a una nueva votación ante la manifestación del bloque radical. Ello es en el entendimiento de que no sólo había abstenciones poco claras sino que este reclamo estaba en línea con lo que venimos planteando, no ahora como chicana, sino desde hace ya bastantes días a lo largo de este debate.

En la segunda votación observamos un cambio respecto de la primera: se registraron 126 votos por la afirmativa y 10 abstenciones, es decir, hubo 2 votos afirmativos menos que en la primera votación. Por ello, más allá de que la Presidencia recoja las expresiones del bloque Justicialista acerca de si en la primera votación o en la segunda hubo algún legislador que se equivocó, se rebeló o no quiso acompañar la iniciativa con su voto —cuestión que no nos atañe y que no entraremos a analizar—, solicito que se ponga nuevamente a votación este artículo por una sencilla y elemental razón: como bien ha dicho el presidente de la bancada Justicialista, la votación no está proclamada; no existe, porque el presidente de la Cámara no la proclamó, y no entro a analizar por qué no lo hizo.

Reitero: solicito a la Presidencia que ponga a votación nuevamente este artículo. Si se reúne el requisito constitucional, nosotros daremos por válida la votación, como lo hicimos, más allá de nuestra oposición, en la votación en general de la norma.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Rodríguez (Jesús).— ¡Este es el Congreso de la Nación, no la sede del bloque Justicialista! Hay que votar, señor presidente; si esperamos a que la bancada oficialista se reúna y vote no avanzamos más.

Sr. Albamonte.— Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri).— Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.— Señor presidente: quiero hacer una aclaración que se relaciona no sólo

con el cumplimiento estricto del reglamento sino también con lo que ha sido la práctica parlamentaria a lo largo de los ocho años que pertenecemos a esta Cámara.

Cada vez que, producida una votación nominal, algún señor diputado observó que su voto no había sido registrado debidamente, tuvo la posibilidad de aclarar su sentido.

El artículo 181 del reglamento establece con claridad que los diputados tenemos la obligación de votar por sí o por no. La posibilidad de abstención no la tiene el legislador sino el cuerpo, que es el que autoriza previamente dicho pedido.

Las aclaraciones formuladas por los señores diputados Corchuco Blasco y López Arias son absolutamente válidas, y así ha sido en toda la historia parlamentaria. En consecuencia, no veo cuál es la discusión si estamos obrando con total buena buena fe.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: si usted considera que es necesario volver a votar el artículo, aunque el bloque Justicialista no tiene dudas respecto del resultado de la votación practicada, accediendo a las eventuales dudas que pudiera tener la Presidencia, manifiesta que no tiene ningún inconveniente en que se vuelva a votar. Esto de ninguna manera implica un cambio de pensamiento de nuestro bloque sobre la votación que se ha realizado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nuevamente el artículo 3º en forma nominal.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 206 señores diputados presentes en el recinto, han votado 156 señores diputados por la afirmativa y 68 por la negativa, registrándose además una abstención.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilaggle, Aceñolaza, Achem, Albano, Alcada, Alsogaray, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Antelo, Aranda, Argüello, Arias, Arcecho, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Balter, Barberá, Barbotti, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Brachi, Branda, Breser, Brunelli, Bultrich, Cámara, Canaño, Casari de Akarcia, Castillo (J. L.),

Castro, Corchuco Blasco, Costelli, D'Alessandro, Dard, Dellepiane, Díaz Martínez, Digón, Domí, Drisaldi, Durandona y Vedia, Durán, Figueroa Follóni, Funes, García Moreno, Gázia, Giménez (D. A.), Giménez (R. E.), Gioja, Golpe (C. H.), González Canturión, González, González Cabañas, Granados, Green, Guzmán, Herrera, Herrera Arias, Humada, Ibarbá, Iturre, Jimena, Kachler, Kammerath, Kessler, La Balla, Laloz, Lambert, Larraburu, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menéndez, Michelli, Michitte, Migliorzi, Miralles de Romero, Müller, Munia-guía, Muriel, Nacul, Natale, Niño, Parada, P. Bui, Pese, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (José), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Saúdo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Salino, Sampietro, Sacchi, Sebastiani, Smith, Soria, Sucas, Suñer, Tenev, Togoi de Vely, Tolomeo, Toma, Toto, Valcarcel, Varela, Varela Cid, Venesía y Zicarrilli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Adamo, Alzaba, Alvarez García, Aranda, Ariz, Balestra, Baccera (C. A.), Bechongaray, Benoni, Bossi, Cabirón, Carca, Caballón, Closs, D'Ambrosio, D'Elia, Del Fabbro, Durnón, Fabrisin, Fayad, Felgueras, Gallo, Galván, Gama, Golpe (N. L.), Hardy, Hernández, Harreche, Janarena, Kelly, Koth, Lecoute, Losada, Marcos, Mathov, Meneghini, Mercader, Moreau, Neder, Negri, Nieva, Novati, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parafón, Patola, Peláez, Peracetti, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Rodríguez (Jesús), Roig, Santín, Sarquíz, Sobrino, Spina, Storani, Teodosio, Terragno, Topa, Turchi Meyer, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Viechi y Vigliore.

—Se abstiene de votar la señora diputada Troyano.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 4º propuesto por el señor diputado Matzkin.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. García Moreno. — Señor presidente: propongo al señor diputado Matzkin, autor de las últimas modificaciones propuestas, una reforma más en el sentido de incluir a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pues de acuerdo con la redacción actual quedaría excluida. En consecuencia, propongo que en este artículo se establezca que el fondo a constituirse será para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la

banca provincial y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: propongo que en este artículo, luego del primer punto, se supriman las siguientes cuatro palabras: "Al cumplir sus objetivos". De esta manera este artículo quedará redactado así: "La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de 1.200 millones de pesos en los próximos 15 meses para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales y de la banca provincial. Dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción que les corresponden en el régimen de coparticipación federal".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: estamos debatiendo en particular el artículo 4º, que correctamente considero que ha sido insertado en un proyecto de ley cuyo objeto era otro tipo de tributos.

La Cámara acaba de aprobar el artículo 3º, que permitirá —según los cálculos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos— generar la suma de 2.250 millones de pesos para la constitución de un fondo especial que manejará el Tesoro nacional y que precisamente será destinado a lograr el equilibrio fiscal y fortalecer el crédito público.

Indudablemente los diputados somos la expresión del pueblo de la Nación, pero de acuerdo con la concepción de país federal, también representamos a nuestras provincias. Como señalan los señores diputados Negri y Ceballos, estamos en presencia del impuesto coparticipable por excelencia.

Dado que la Cámara ha aprobado en general este proyecto, y en consecuencia seguiremos considerando y aprobando los artículos propuestos por el bloque oficialista, es importante señalar que en la actualidad varias provincias padecen desequilibrios fiscales pero no porque hayan administrado mal sus recursos.

Por lo tanto, que cada diputado del pueblo de la Nación, al volver a su respectiva provincia, tenga conciencia de que más allá de las objeciones formales, legales y constitucionales que aquí se plantearon —y sobre la base de los cálculos efectuados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos—, ha privado a su provincia de la posibilidad de cubrir sus desequilibrios fiscales.

Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires perderá 224 millones de pesos; Córdoba, 91; Mendoza, 43; Santa Fe, 91.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Fayad. — Señor presidente: estoy formulando consideraciones en particular acerca del artículo en tratamiento. Por lo tanto, continuaré con mi exposición.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúe, señor diputado, porque usted tiene derecho a hacer uso del tiempo de que dispone.

Sr. Fayad. — Señor presidente: Chubut perderá 16 millones de pesos; La Pampa, 19 millones; Neuquén, 18 millones; Río Negro, 26 millones; Santa Cruz, 16 millones; Entre Ríos, 50 millones; Salta, 39 millones; San Juan, 35 millones; San Luis, 23 millones; Tucumán, 49 millones; Catamarca, 28 millones; Chaco, 51 millones; Corrientes, 38 millones; Formosa, 37 millones; Jujuy, 29 millones; La Rioja, 21 millones; Misiones, 34 millones; Santiago del Estero, 42 millones.

De esta manera, teniendo en cuenta lo expresado en más de una oportunidad por el señor ministro de Economía de la Nación, quien responsabilizó a las provincias por los desequilibrios fiscales que presenta la Nación, hoy ésta toma recursos que pertenecen a aquéllas para lograr equilibrio fiscal en un presupuesto que ha sido mal elaborado. Es decir que con esta medida se pretende paliar el desequilibrio fiscal, tal como lo argumentó el diputado que propuso la incorporación de estos artículos.

Según el artículo 4º, a través de un fondo de 1.200 millones de pesos la Nación tratará de contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales, cuando todos y cada uno de los señores diputados sabemos lo que esta reforma ha significado en dichos estados. Sin duda, con esta iniciativa se va a complicar aún más esa situación, razón por la cual no se podrá dar cumplimiento a las políticas sociales, de salud y de educación que han elaborado en cada una de las provincias.

Advierto que más allá de la necesidad del aporte de la Nación se ha establecido un sistema que considero injusto y arbitrario pues hay provincias que no tienen exceso de personal en la administración pública, que han sido austeras en el manejo de sus fondos, que han sido serias en la conducción de sus bancos y, sin embargo, hoy están padeciendo una crisis en la que dejamos librado al arbitrio y discrecionalidad del gobierno los aportes que se pue-

dan hacer para implementar esta supuesta reforma y para auxiliar a los bancos provinciales. Lo justo y correcto sería que se ponga en vigencia en alguna oportunidad un régimen de premios y castigos con sentido federal, a fin de auxiliar a las provincias que han hecho un esfuerzo y que han manejado sus bancos en forma correcta, por más que hoy presenten un serio desequilibrio.

Por lo tanto, entiendo que en este caso correspondería adoptar algún parámetro, que bien podría ser el que ya se ha planteado en el ámbito de la Honorable Cámara. Con esto quiero decir que el criterio de la coparticipación sería el más adecuado para distribuir los recursos de este fondo especial.

En cuanto al artículo 5º que se ha propuesto, en el momento de la consideración en particular solicitaré una aclaración al diputado que lo ha propiciado para saber si en las cláusulas que comprenden exclusivamente la materia tributaria del pacto fiscal se ha incluido también ese 15 por ciento que a las provincias les representa una erogación significativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: yo también quiero proponer que se retire la expresión "Al cumplir sus objetivos" porque seguramente nos encontraremos con problemas en torno de quién lleve a cabo tal verificación en las provincias. Muy posiblemente se generarán situaciones que podrán derivar en la falta de envío de esos aportes a las provincias.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. D'Ambrosio. — Señor presidente: más allá de los argumentos de fondo dados por el señor diputado Fayad —que comparto plenamente— adhiero a la modificación propuesta, de suprimir una condición de cumplimiento imposible.

Para quien no quiere engañarse surge claramente que este artículo es un chocolate de futuro o una zanahoria colocada adelante del burro, a menos que se suprima la expresión "Al cumplir sus objetivos".

Dejar la definición de que en el curso de 18 meses se han cumplido los objetivos a cargo de quien distribuye los fondos es como decir: señores, les hemos mostrado un chocolate. Tal como está redactado este artículo es una indignidad para cualquier legislador que vaya a su provincia a decir que consiguió algo. Si no se modifica su redacción, el futuro me dará la razón.

Votemos forados para las provincias y no chocolates para legisladores en épocas electorales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: cuando anticipaba mi voto durante el tratamiento en general precisé el fundamento sobre el que me basaba para apoyar esta medida. Dije que iba a votar afirmativamente porque hay provincias que necesitan ayuda en forma urgente. En este artículo radica justamente la motivación de mi apoyo a esta medida.

Señalé la necesidad de nuestros bancos provinciales, que están absolutamente quebrados, no operan en el sistema bancario y no pueden esperar a que se formalice y constituya el fondo al que se refiere el artículo en consideración.

Por lo expuesto solicito que al final del artículo se agregue lo siguiente: "Los fondos mínimos indispensables requeridos por los bancos provinciales...".

—Manifestaciones en las bancas.

Sr. Balter. — En estas condiciones no puedo continuar, señor presidente. Además, lo haré cuando esté presente algún miembro de la comisión o quien haya redactado esta norma.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene razón, señor diputado.

Ruego a los señores diputados que presten atención al orador.

Continúa en uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Supongo que no tengo que volver a explicar al diputado Lamberto lo que no ha oído, porque conoce —repito— que nuestros bancos están quebrados, que no operan, que a los ahorristas no les pagan ni siquiera los 200 pesos que les habían prometido las autoridades y que los jubilados que tienen depositados sus haberes en las cajas de ahorro no los pueden retirar. En esta convocatoria de hecho de la banca provincial de Mendoza necesitamos apoyo urgente para que el sistema productivo de ese Estado no se caiga. Por ello propongo que al final del artículo en consideración se agregue lo siguiente: "Los fondos mínimos indispensables requeridos por los bancos provinciales en proceso de transformación para retomar su normalidad operativa serán girados de inmediato".

Por otra parte, quiero señalar mi oposición absoluta a que se testen del artículo esas cuatro palabras —"Al cumplir sus objetivos"—

porque si así se procediera significaría que este fondo se distribuirá de acuerdo con los coeficientes de coparticipación. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya cuenta con un fondo de emergencia que sería reforzado con esta partida, cuando el pueblo de la Nación está haciendo un gran sacrificio para poder conformarla. También se vería reforzada la partida con que cuenta la provincia de Santa Fe luego de la reciente sanción del proyecto de ley del señor diputado D'Ambrosio.

Insistimos en nuestra oposición a que se testen esas cuatro palabras y pedimos que se incluya al final de este artículo el párrafo que he leído recientemente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: he estado haciendo consultas con respecto al artículo 3º y quiero dejarlas planteadas en este recinto. Realmente mi inquietud tiene que ver con el artículo 4º, porque hoy se habló hasta el cansancio dándose fundamentos desde mi bloque y otros con relación al artículo 75 de la Constitución Nacional.

—Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega a los señores diputados que hagan silencio y que respeten al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: quiero plantear que el inciso 2) del artículo 75 de la Constitución Nacional habla de una nueva distribución entre la Nación y las provincias. Además, entre las siguientes: "Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1993; la distribución de competencia, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación".

Es decir que, más allá de la discusión de 123 votos más o menos, de acuerdo con mi criterio —en función de lo prescripto en la cláusula sexta de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución— el artículo 3º votado es nulo de nulidad absoluta.

Esto lo quiero dejar planteado y en todo caso no resultan sorprendentes las expresiones del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque siempre actúa en forma autoritaria cuando no se piensa como él.

El artículo 4º habla de 1.200 millones de pesos a distribuir. Recién el señor diputado Fayad hacía la cuenta de cuánto perdía cada una de las provincias; más de mil millones se susina a la coparticipación y se gira a rentas generales; pero además este artículo 4º provoca más injusticias porque los fondos se distribuyen en función de la coparticipación, lo que significa que las grandes provincias se quedan con casi todo, mientras que las más pequeñas sólo recibirán migajas.

Tras dejar planteada esta objeción de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución, señaló que otra vez las grandes provincias se llevarán el grueso de estos 1.200 millones y seguramente muchos señores diputados oficialistas tendrán que rendir cuentas en sus provincias sobre la votación de esta noche.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Machado. — Señor presidente: la propuesta que incorpora este artículo 4º dispone que la Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable de 1.200 millones de pesos para contribuir a financiar la reforma de los Estados provinciales y de la banca provincial. La propuesta adicional del señor diputado Lafalla —que solicita la supresión de la expresión "Al cumplir sus objetivos" para que, por lo tanto, el fondo sea distribuido directamente de acuerdo con el régimen de coparticipación federal— parece más razonable.

Si la comisión acepta la modificación, quizás haya mayor equilibrio teniendo en cuenta que se fue perdiendo progresivamente. Sobre un monto coparticipable de 29 mil millones de pesos, las provincias argentinas han visto reducida su participación en más de diez mil millones de pesos. Eso ha ocurrido en virtud de la afectación del 11 por ciento de la recaudación del IVA a las cajas de jubilaciones, del 20 por ciento de la del impuesto de ganancias con el mismo fin, el diez por ciento para el fondo del conurbano, el 4 por ciento para las ATN y, finalmente el 15 por ciento de coparticipación que el gobierno nacional ha desviado durante mucho tiempo hacia otros fines.

Recientemente se sancionó otra exacción a las provincias mediante el artículo 3º, por el cual los tres puntos de incremento en la tasa

del IVA no serán coparticipables en primera instancia y se afectarán a un fondo específico.

Podemos sumar a esto la actitud del Estado nacional, que recientemente aprovechó el marzo de la crisis para crear redes de seguridad que utilizó a su arbitrio, vaciando las reservas del Banco Central hasta el límite de 200 millones —como lo señalara el señor ministro de Economía—, que fueron utilizadas en forma discrecional y discriminatoria en contra de algunas provincias y a favor de otras. Asimismo se han otorgado créditos a bancos, que los han recolocado a dos o tres veces la tasa de corte.

De cumplirse en forma incondicional la reforma propuesta por el señor diputado Lafalla, creemos que este aporte devolvería equidad al sistema. La normativa, con la reserva del caso, merece ser aprobada porque en última instancia la reforma y modernización de los Estados provinciales estará sujeta a los criterios de cada uno de esos Estados. Muchas provincias no comparten el criterio de reforma del Estado adoptado por el Estado nacional. No creen que sea necesario cerrar lo que cuesta o vender lo que vale, y piensan que se pueden reformular los catastros o utilizar programas del Banco Mundial.

En síntesis, están en condiciones de optimizar el uso de sus recursos sin tener que recurrir a condicionamientos como se plantea para el artículo en consideración. Por eso considero que si se quita la discrecionalidad y se acepta la reforma propuesta por el señor diputado Lafalla, se contribuiría esta noche un aporte positivo a la discusión.

Con tal modificación se mejora en forma sustancial la redacción del artículo, pues se recorta una arbitrariedad que se ha venido aplicando y se restituye parte de las exacciones que venían sufriendo las provincias, las exacciones que ha votado el bloque de la mayoría esta noche y las exacciones a las que por medio de la red de seguridad del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina se ha sometido a los bancos provinciales.

Por lo expuesto adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado por Mendoza.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. González.— Señor presidente: en primer lugar quisiera que el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aclare cuál es la redacción final que se propone para el artículo en consideración, porque en la medida en que se siga insistiendo en que esta distribución

se hará de acuerdo con los índices de coparticipación me caben dos dudas fundamentales.

La primera duda es la siguiente: ¿se aplicará la distribución primaria y luego la secundaria? En caso de que sea así esto significaría que el Tesoro nacional se quedará con el 47 por ciento y el 53 por ciento restante formará la masa a ser distribuida de acuerdo con los índices de la distribución secundaria.

En segundo término, si se va a hacer esta distribución de fondos provenientes de créditos de organismos internacionales para la reforma de los Estados provinciales —reestructuración y modernización— y para la privatización de la banca provincial, en modo alguno podríamos hacerlo de acuerdo con los índices de la distribución secundaria porque el problema de todas las provincias no es igual al índice que tienen en la coparticipación. Por lo tanto, quizá lleguemos con fondos escasos en algunas provincias y excedentes en otras que no necesitan la reforma del Estado o ya privatizaron sus bancos o no están dispuestas a hacerlo. De manera que entiendo que no debe considerarse esta forma de asignación de este recurso especial en base a los índices de coparticipación.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durrón.— Señor presidente: para no apasionarme demasiado con esta discusión sobre la coparticipación y los pedazos que de aquí pedamos sacar, quiero dejar establecido que estamos asignando aire. Esta es una promesa de 1.200 millones de pesos que no sólo no tienen fondos sino tampoco recursos. Es necesario expresar esto para saber de qué estamos hablando. Pero, aun así, el artículo tiene ambigüedades sobre las que quiero preguntar al señor presidente de la comisión...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri).— La Presidencia advierte al señor diputado Lamberto que el señor diputado por Buenos Aires lo está efectuando una consulta.

Sr. Durrón.— Parece que el señor diputado Lamberto está muy entretenido con su conversación en el bloque.

En el marco de esta asignación de aire, quiero saber qué significa la reforma de los Estados provinciales y de la banca provincial; qué obligaciones imponen las provincias para tener derecho a recibir estos supuestos fondos, y quién determina cuáles son las reformas y cuándo se cumplen.

La segunda cuestión es si cuando se expresa "al cumplir sus objetivos" significa que el ejecutivo se va a distribuir según la coparticipación y no según las necesidades de las provincias, o que todo el fondo va a tener en cuenta la coparticipación. Esto sí modificaría la redacción del artículo.

Luego de que me contesten estas preguntas sobre esta asignación de aire voy a dar mi parecer.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: aceptamos la inclusión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los asignados a este tipo de crédito. Me parece irrelevante discutir algo que el propio diputado no cree. Si el señor diputado está diciendo que vamos a repartir aire está faltando el respeto a la gente que trabaja y no merece ninguna contestación.

Sr. Fayad. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Fayad. — Señor presidente: si se advierte en el ámbito de la Cámara que principalmente preocupa al Estado nacional la situación de las bancas provinciales, y si se han expresado aquí distintos criterios a fin de encontrar una redacción única a este artículo, parece razonable la opinión del señor diputado Antonio Erman González en el sentido de que no todas las bancas provinciales pasan por la misma circunstancia de gravedad.

Por ello, sugiero una redacción que contribuirá de manera insoslayable a solucionar la situación que hoy se presenta en distintas bancas de provincia. Dice así: "La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de \$ 1.200.000.000 para contribuir a financiar la banca provincial hasta cubrir los montos necesarios para restituir la operatividad de la misma". Luego continuaría la redacción original del artículo, es decir, incluiría las palabras "Al cumplir sus objetivos...", y el resto quedaría tal cual está.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Lamberto. — La comisión no acepta la propuesta de modificación.

Sr. D'Ambrosio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. D'Ambrosio. — Señor presidente: quiero aclarar que mantengo la moción de que se

suprima el párrafo que he señalado con respecto al cumplimiento de los objetivos. Adhiero a la moción formulada por el señor diputado Lafalla. Si él la retira, de todos modos la mantengo.

Sr. Lamberto. — Ya lo afirmé recién. Lo que vamos a votar es el artículo leído por el señor diputado Matzkin con el agregado que se refiere a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 4º propuesto por el señor diputado Matzkin con la modificación a que hizo alusión el señor diputado Lamberto.

— Votación afirmativa.

— A los señores diputados habían a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Ningún señor diputado solicitó que se votara nominalmente.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. D'Ambrosio. — Señor presidente: yo no tengo reconocer que esta Presidencia ha conducido la reunión con un criterio ejemplar. Incluso, ha ayudado al bloque oficialista a blanquear algunas cuestiones que podrían haberlo traído problemas en función del temperamento de apurarse en las votaciones.

Durante el tratamiento en particular de este proyecto estuvimos votando nominalmente cada artículo. Me parece absolutamente razonable que no debamos repetir en cada artículo que la votación debe efectuarse en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia va a acceder al pedido de votación nominal.

Se va a votar nuevamente en forma nominal el artículo 4º.

— Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 202 señores diputados presentes han votado 137 por la afirmativa y 60 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.

— Votó por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilbaggio, Aceñolaza, Acheny, Albamonte, Aleala, Alsogaray, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Antelo, Aranda, Argüello, Arias, Arcechea, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Balter, Barberá, Barbotti, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Breser, Brunelli, Bultrich, Bussi, Cámara, Canaño, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Corchuelo Blasco, Crostelli, D'

Alessandro, Dard, Dellepiane, Díaz Martínez, Digón, Donni, Duratona y Vedia, Durieu, Fallati, Figueras, Folloni, Funes, Garay, García Moreno, Gazia, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Góbi, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, González Caballos, Gramados, Green, Guzmán, Harig, Herrera, Herrera Arco, Harbín, Harroche, Hure, Juncosa, Kachler, Kammrath, Kessler, Leloz, Lombardo, Lombardi, Leguato, Legrandino, Linares, López López Arias, Macedo, Maldonado, Manfredini, Marquetti, Meléndez (D.), Martínez (S. V.), Meléndez, Carabón, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Michette, Migliozzi, Minillas de Rouero, Müller, Montenegro, Moriel, Naceri, Nino, Parada, Pella, Peto, Pérez, Perini, Pico, Pichetto, R., Barbóñez (José), Rodríguez (C. E.), Rodríguez Saá, Boggio, Boggio, Boggio (C. A.), Boggio (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Scudi, Salom, Szolzi, S. Testa, Smith, Soría, Suroch, Suroch, Terey, Tugol de Vely, Telnaro, Terna, Tova, Valente, Varela, Varela Gid, Vassini y Zicardi.

—Votan por la negativa los señores diputados: Achúne, Algalon, Balestra, Berera (C. A.), Berlinguery, Bonini, Cabrón, Garca, Gellalox, Glos, D'Ambrosio, D'Elia, Del Falso, Disaldi, Durán, Fabrisin, Fagel, Felgueras, Gallo, Galván, Gamar, González, Hovard, Jaramera, Kelly, Koth, Losada, Michale, Marcos, Milroy, Menéndez, Menéndez, Morera, Neder, Negri, Novati, Olivera, Orquín, Ortiz Maldonado, Pando, Parola, Pelioz, Perinatti, Pinto, Polo, Prat, Rodrigo, Roiz, Santha, Sarquitz, Sobrino, Spinoza, Sterani, Teodosio, Terragno, Toto, Trottel Meyer, Vazquez (S. B.), Vieda y Vigliani.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Alvarez García, Lallabá, Scarpato y Tognoli.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 59 propuesto por el señor diputado Matzkin.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: quiero hacer una consulta al señor miembro informante del dictamen de mayoría. El artículo 59 dice que se proroga el cumplimiento de la cláusula del pacto federal exclusivamente en lo relacionado con las cuestiones tributarias. Quisiera saber si esto incluye el 15 por ciento de la coparticipación para el sistema previsional.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: esto atañe solamente al poder de tributación que tienen las provincias. De acuerdo con el Pacto Fiscal,

ellas deberían cambiar su política tributaria a partir del próximo mes de junio. Entonces, por este artículo se permite que mantengan las tasas actuales hasta la fecha establecida de marzo de 1926.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: quisiera preguntar de nuevo al señor diputado por Santa Fe si puede entenderse que a partir del vencimiento del segundo Pacto Fiscal dejan de tener vigencia las disposiciones con respecto al 15 por ciento de la coparticipación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: no se puede entender tal cosa. Cuando llegue la fecha de discusión del pacto fiscal, se debatirán todas sus cláusulas.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quiero referirme a otra tema. Estamos considerando el último artículo del proyecto de ley aprobado en general. El bloque Justicialista va a permanecer en el recinto después de que se sancione esta iniciativa, ya que se formulará un pedido de amparo del reglamento, solicitado por varias bancas, sobre un proyecto de declaración vinculada con el paso por aguas argentinas del buque "Tacifio Pintail" que transporta material de carácter radiactivo.

Sr. Presidente (Pierri). — Luego de la aclaración formulada por el señor diputado por La Pampa, se va a votar nominalmente el artículo 59.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 202 señores diputados presentes en el recinto, han votado 122 por la afirmativa y 62 por la negativa, registrándose además 7 abstenciones.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abasto, Abilegale, Acciolla, Achúne, Albarracín, Alvarez (C. R.), Alvarez Febaglio, Aranco, Argüello, Arias, Arredona, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Barbieri, Barbotti, Barionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Bordo, Bracchi, Branda, Breser, Brunelli, Bullrich, Cámara, Camone, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Castro, Corbuelo Blasco, Costelli, D'Alessandro, Dard, Dellepiane, Díaz Martínez, Digón, Donni, Duratona y Vedia, Durieu, Fallati, Folloni, Funes, García Mereno, Gazia, Giménez (D. A.),

Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, González Cabañas, Granados, Green, Guzmán, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Iurre, Juncosa, Kachler, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lambert, Larraburu, Leconte, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Machado, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Carbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Michitte, Migliozzi, Miralles de Romero, Müller, Muniaurria, Muriel, Nacul, Niño, Parada, Pollin, Pope, Pérez, Perriai, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (J.), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Suárez, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Palacios, Saadi, Sabino, Seelzi, Sebastiani, Smith, Soria, Suearia, Suciro, Tenev, Togni de Vely, Tolomeo, Toma, Valcarel, Varela, Varela Cid, Venesia y Zencarli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Algaba, Alvarez García, Antelo, Balestra, Balter, Becerra (C. A.), Berhougaray, Bonomi, Bussi, Cabirón, Carea, Ceballos, Closs, D'Ambrosio, D'Elia, Del Fabro, Donadon, Esbrissin, Felgueras, Figueroa, Gallo, Galván, Garay, Gama, Hernández, Harreche, Jannarena, Kelly, Koth, Losada, Marcos, Mathoz, Meneghini, Mercader, Moreau, Natale, Nolas, Negri, Novau, Olivera, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Peláez, Pernasetti, Pinto, Polo, Prat, Roig, Santín, Sarguiz, Sobrino, Spinoza, Storani, Teodosini, Terragno, Topa, Trettel Meyer, Vázquez (S. B.), Viechi y Viglione.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Adame, Delsaldi, Fayad, Rodrigo, Sampietro, Toto y Troyano.

—El artículo 6^o —4^o del dictamen— es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ (Aplausos.)

Se comunicará al Honorable Senado.

7

MOCION DE ORDEN

Sr. Aceñolaza. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Aceñolaza. — Señor presidente: formulo moción de orden de que la Honorable Cámara

se aparte de las prescripciones del reglamento para tratar sobre tablas un proyecto de declaración que fue consensuado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que unifica diversas iniciativas presentadas por varios señores diputados, relacionadas con el tránsito por aguas argentinas del buque "Pacific Pintail", que transporta residuos de plutonio.

El mencionado proyecto cuenta incluso con el apoyo de la bancada radical. Este es un tema de suma importancia porque el barco "Pacific Pintail" en este momento se encuentra frente a las costas argentinas y transporta material radiactivo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Tucumán. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

8

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Aceñolaza. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto al que me he referido.

El proyecto de declaración dice así: "1. Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para impedir el ingreso del buque "Pacific Pintail", que transporta residuos de plutonio, desde el puerto francés de Cherburgo con destino al Japón, en el mar territorial argentino, la zona económica exclusiva y el espacio marítimo adyacente a la plataforma continental argentina cuando exceda las 200 millas, en un todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley 24.051 y los principios generales y particulares de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 2. Se envía copia de la presente declaración a las embajadas de Japón y de Francia". Expedientes 72-D.-95, 177-D.-95, 197-D.-95, 202-D.-95, 311-D.-95, 336-D.-95, 337-D.-95, 339-D.-95, 344-D.-95, 363-D.-95, 377-D.-95, 447-D.-95, 469-D.-95 y 472-D.-95).

Aclaro que, además, existe un agregado que ha sido consensuado con la bancada radical. De manera que sugiero que se lo acepte como tal y que se pase a votar inmediatamente.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 606.)